

DIARIO DE LOS DEBATES

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

AÑO I

II P.E.

LXVIII LEGISLATURA

TOMO II

NÚMERO 42

Segundo Período Extraordinario de Sesiones de la Sexagésima Octava Legislatura, dentro del primer año de ejercicio constitucional, que se realiza de manera presencial en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, y en la modalidad de acceso remoto o virtual, celebrada el día 22 de enero del 2025.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Declaración del quorum. 3.- Orden del día. 4.- Designación Comisión Especial de Cortesía. 5.- Lectura Decreto de inicio del Segundo Período Extraordinario de sesiones. 6.- Proyección de video relativo al informe anual que rinde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ejercicio 2024. 7.- Participación del encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 8.- Entrega del Informe de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ejercicio 2024. 9.- Mensaje del Secretario General de Gobierno del Estado. 10.- Receso para despedir a autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 11.- Reanudación de la sesión. 12.- Verificación del quorum. 13.- Presentación de dictámenes, informes o documentos. 14.- Lectura del Decreto de Clausura del Segundo Período Extraordinario de sesiones. 15.- Se levanta la sesión.

1.

APERTURA DE LA SESIÓN

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** [Hace sonar la campana].

Muy buenos días, diputadas y diputadas, público en general, compañeros de la prensa que nos acompañan.

Se abre la sesión.

Les invito a que ocupemos nuestro asiento y guardemos el debido respeto para continuar con esta sesión.

Siendo las once treinta y dos... las diez treinta y dos [10:32 Hrs.] horas del día 22 de enero del año 2025, damos inicio a los trabajos de la sesión del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional, que se realiza de manera presencial en el Recinto Oficial del Poder Legislativo y en la modalidad de acceso remoto o virtual.

Informo al Pleno que las y los diputados que asistirán vía acceso remoto, enviaron con la debida anticipación a esta Presidencia su solicitud.

2.

DECLARACIÓN DEL QUORUM

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Con el objetivo de verificar la existencia del quorum, solicito a la Primera Secretaría lleve a cabo el registro de la asistencia para que las y los diputados confirmen su presencia.

- **El C. Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Primer Secretario.- P.A.N.:** Con su permiso, Diputada Presidenta.

Procedo con el registro de la asistencia para esta sesión.

Diputadas y diputados, ya se encuentra abierto el sistema electrónico de asistencia.

A continuación, procedo a nombrar a quienes se encuentran mediante acceso remoto o virtual para que de viva voz registren su presencia.

Diputada Rosana Díaz Reyes.

Diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco.

- **La C. Dip. Irlanda Dominique Márquez Nolasco**
.- **P.T.:** Presente, Diputado.

- El C. Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Primer Secretario.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Diputado Pedro Torres Estrada.

Se cierra el sistema electrónico de asistencia.

Informo a la Presidencia que se encuentran presentes 25 [26] diputadas y diputados.

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Gracias, Diputado Secretario.

Por lo tanto, se declara la existencia del quorum, por lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal.

[Se encuentran presentes las y los diputados: América Victoria Aguilar Gil (PT), Óscar Daniel Avitia Arellanes (MORENA), Octavio Javier Borunda Quevedo (PVEM), Roberto Marcelino Carreón Huitrón (PAN), Luis Fernando Chacón Erives (PRI), José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo (MORENA), Nancy Janeth Frías Frías (PAN), Herminia Gómez Carrasco (MORENA), Elizabeth Guzmán Argueta (MORENA), Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI), Leticia Ortega Máñez (MORENA), Edith Palma Ontiveros (MORENA), María Antonieta Pérez Reyes (MORENA), Alma Yesenia Portillo Lerma (MC), Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez (PRI), Magdalena Rentería Pérez (MORENA), Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN), Brenda Francisca Ríos Prieto (MORENA), Carla Yamileth Rivas Martínez (PAN), Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC), Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), Joceline Vega Vargas (PAN), y Arturo Zubía Fernández (PAN).

De forma virtual: Rosana Díaz Reyes (MORENA) y Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT).

Se incorporan en el transcurso de la sesión las y los legisladores: Jael Argüelles Díaz (MORENA), Saúl Mireles Corral (PAN), Carlos Alfredo Olson San Vicente (PAN), Ismael Pérez Pavía (PAN), Pedro Torres Estrada (MORENA), José Luis Villalobos García (PRI) y Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN), la última mediante acceso remoto.]

3.

ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: A continuación, me voy a permitir dar lectura al

Orden del día:

I.- Lista de presentes.

II.- Designación de la Comisión Especial de Cortesía que introducirá al Recinto Oficial, al representante del Poder Ejecutivo, a la titular del Poder Judicial, así como al encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

III.- Lectura del decreto de inicio del Segundo Período Extraordinario de sesiones.

IV.- Proyección de un video relativo al informe anual que rinde el encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sobre las actividades realizadas en el período comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2024.

V.- Participación del maestro Alejandro Carrasco Talavera, encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

VI.- Mensaje del licenciado Santiago De la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno.

VII.- Breve receso para despedir al representante del Poder Ejecutivo, a la titular del Poder Judicial, así como al encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Como segunda parte

VIII.- Reanudación del Segundo Período Extraordinario.

IX.- Verificación del quorum.

X.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes:

A. En sentido positivo, que presentan las comisiones de:

1.- Gobernación y pus... Puntos Constitucionales.

2.- Juventud y Niñez.

XI.- Lectura del decreto de Clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones.

Chihuahua, Chihuahua, a 22 de enero del 2025.

Solicito a la Segunda Secretaría tome la votación, respecto del contenido del orden del día e informe el resultado.

- El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.-P.R.I.: Con su permiso, Diputada Presidenta.

Procederemos con la votación con respecto al contenido de la orden del día, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano en señal de aprobación.

[Las y los legisladores manifiestan su aprobación en forma unánime].

Presidenta, le informo que las y los diputados se han manifestado a favor del contenido de la orden del día.

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Gracias, Diputado Secretario.

Se aprueba el orden del día.

4. DESIGNACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE CORTESÍA

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: A continuación, me permito proponer al Pleno la integración de una Comisión Especial de Cortesía que se encargará de recibir e introducir a este Recinto, al representante del Poder Ejecutivo, a la titular del Poder Judicial, así como al encargado del despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Para ello, planteo que la comisión aludida se conforme por las y los coordinadores y representantes parlamentarios.

Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta Presidencia, favor de manifestarlo levantando la mano en señal de aprobación.

[Las y los legisladores manifiestan su aprobación en forma unánime].

Gracias.

Se aprueba la integración de la Comisión Especial de Cortesía.

Se declara un breve receso para que la citada comisión realice su encomienda. [Receso 10:37 Hrs.]

[Hace sonar la campana].

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: [Hace sonar la campana].

Se reanuda la sesión. [10:42 Hrs.]

Damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario al licenciado Santiago De la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno, en representación de la maestra María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado.

[Aplausos].

A la Magistrada Myriam Hernández Acosta, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

[Aplausos].

Y, por supuesto, al maestro Alejandro Carrasco Talavera, encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

[Aplausos].

Así mismo, nos honran con su presencia diversas personalidades que le dará lectura a los nombres, si me permiten, y al final les brindaremos un aplauso de bienvenida.

Al Capitán Primera Enfermera Aida Berenice Jiménez Castañeda, en representación de la V Zona Militar.

[Aplausos].

Licenciado Juan Manuel Corral, in... Inspector General de la Guardia Nacional.

A la licenciada Bárbara Rojas Zambrano, en representación de la maestra Ana Margarita Blakelei... [Blackaller] Prieto, Secretaria Ejecutiva del

Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al maestro Fausto Fortunato Barraza Arvizu, Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.

Al maestro Eduardo Barbosa Sáenz, Rector de la Universidad Politécnica de Chihuahua.

A la doctora Lourdes Díaz López, Directora de Vinculación de la Universidad Politécnica de Chihuahua.

Al maestro Eduardo Gutiérrez Aguirre, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Al doctor Eduardo Medrano Flores, Secretario de Investigación y pro... Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

A la licenciada Evelyn Yenice Padilla Luna, titular de la Dirección de Enlace en Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.

A la doctora Sara Gabriela Cárdenas Fernández, Subsecretaria de Normatividad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Al doctor Francisco Javier Acosta Molina, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Al doctor Hugo Molina Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

A la licenciada Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral.

Al maestro Víctor Yuri Zapata Leos, Consejero del Instituto Estatal Electoral.

A la licenciada Carla Fuentes Moreno, Comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A la maestra Ada Miriam Aguilera Mercado, Fiscal Especializada en... en Investigación a Violaciones

de Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

Al maestro Óscar Ernesto Hernández, Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Sistema Penitenciario, Prevención y resi... Reinserción Social.

A la doctora Liz Aguilera García, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Al doctor Adalberto Vences Baca, Director del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, en representación del rector.

Da... a Daniela Soraya Álvarez Hernández, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN.

Al licenciado Alejandro Tavares Calderón, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

A la licenciada Priscila Soto Jiménez, Magistrada de la Quinta Sala Unitaria Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Al doctor Diego Ulises Sandoval Aguirre, en representación del Rector de la Universidad La Salle, José Salvador Benavides Castro.

A la licenciada Silvia Jazmín Hidalgo Ramírez, en representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Martín Valdéz Juárez.

Al licenciado mar... Marco Castañeda Falcón, en representación del alcalde del municipio de Guachochi.

Al magistrado Leo Alvarado Zapata... Alvarado rol... Roldán, del Tribunal Superior de Justicia.

A María Eloisa Fong Balderrama, viuda del anterior Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Javier González Mocken.

A Ulises Pacheco Rodríguez, en representación del Secretario de Seguridad Pública.

Al lic... a la licenciada Adriana Ruiz Ramírez,

Directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

A la licenciada Sofía Martínez Rodríguez, Subprocuradora del DIF Estatal, Especializada en Atención a Personas Adultas Mayores.

Al maestro Enrique Alonso Rascón Carrillo, Secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Al ciudadano José Moncayo Porras, Presidente Municipal de Julimes.

Al doctor se... Sergio Rafael Facio Guzmán, Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Licenciado René Chavira Venzor, en representación del Presidente Municipal de la Ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla.

A la maestra Jazmín Rivera Castillo, Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Chihuahua.

A la ciudadana Judith González, en representación de Isela González, de la Alianza Sierra Madre, A.C.

A la licenciada Mónica Meléndez, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

Licenciado Eduardo Chávez Almada, titular del Órgano Interno de... de Control del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al licenciado Omar Armendáriz Jurado, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo.

Al licenciado José Jesús Jordán Orozco, de la Dirección de Desarrollo Económico.

A todas y todos ustedes bienvenidos a esta sesión.

[Aplausos].

5.

LECTURA DECRETO INICIO SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** A continuación, daré lectura al decreto de inicio del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, para lo cual les pido a las y los diputados, autoridades y demás personas que nos acompañan ponerse de pie.

[Las y los Legisladores y demás asistentes a la sesión atienden la instrucción de la Presidenta y se ponen de pie].

Decreto número 0183/2025

La Sexagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, inicia hoy, veintidós de enero del año dos mil veinticinco, el Segundo Período Extraordinario de Sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al término de su lectura.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de enero del año 2025.

Muchas gracias, pueden tomar asiento.

6.

PROYECCIÓN VIDEO RELATIVO AL INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EJERCICIO 2024

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** A fin de que el maestro Alejandro Carrasco Talavera, encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos rinda el informe que disponen los artículos 4o. de la

Constitución Política del Estado y 50 de la Ley de la Materia sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre del 2024, en primer término, se transmitirá un video sobre las actividades realizadas.

[Se reproduce video]:

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, informe anual 2024.

Desde el nacimiento de la CEDH en 1990, a lo largo de más de tres décadas el compromiso con los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua hoy más que nunca sigue inquebrantable.

Nuestra misión ha sido cimentar en el centro de la gestión pública la labor diaria de cada una de las oficinas regionales en la prevención y la gestión eficiente, así como la protección y defensa de los Derechos Humanos.

En 2024, sin duda, superamos múltiples desafíos institucionales, pero también encontramos oportunidades para atender una deuda histórica con pueblos y comunidades indígenas al abrir la oficina regional de la CEDH en Guachochi, por primera vez a cargo de abogadas de origen rarámuri, cercanas a la cosmovisión indígena. Una de las prioridades era servir con una oficina más accesible e incluyente, especialmente a las mujeres y a sus familias en la sierra Tarahumara.

Prevención.

La capacitación y promoción representa uno de los ejes más importantes, por ello en 2024 se efectuaron mil 751 acciones de capacitación que permitieron fomentar el respeto de la dignidad humana, a través de pláticas de sensibilización, seminarios, cursos, talleres y conferencias con especialistas.

En esta estrategia de prevención, participaron 82 mil 413 personas, un incremento de más del 5% con respecto al año anterior, de las cuales el 56% fueron mujeres y 44% hombres, lo que marcó una tendencia en la asistencia paritaria de género.

La capacitación en plataformas digitales ha sido una alternativa eficaz para acceder simultáneamente a distintos lugares y para ampliar el alcance a un mayor número de personas, por lo que en este año se impartieron mil 562 capacitaciones presenciales, 176 virtuales y 13 de manera híbrida; logrando así, un mayor acercamiento con el sector educativo, público y con grupos especiales.

La Comisión ha implementado métodos didácticos para las infancias y adolescencias con un enfoque lúdico y participativo, como el concurso dibujando mis derechos y las puestas en escena: "Yo no discrimino" y "Juega y aprende tus derechos con Deni"; así, este año, además del incremento en el número de actividades realizadas, se amplió la cobertura estatal de 34 a 41 municipios.

Difusión y divulgación.

En las tareas de prevención, la CEDH busca no solo informar, sino incidir en el conocimiento y formación de la población sobre sus Derechos Humanos; en este contexto, a través de tres tareas fundamentales como la creación de contenidos, la implementación de medios propios y el fortalecimiento de la relación con medios de comunicación de la entidad, la CEDH contribuye a crear una conciencia crítica y reflexiva entre la comunidad.

En el año que se informa la comisión desarrolló mil 461 producciones multimedia, digitales e impresas, fundamentales para visibilizar las tareas informativas del organismo.

Este año se lograron acuerdos de colaboración con el sistema público de radiodifusión del estado mexicano y el Instituto Mexicano de la Radio para la creación de nuevos espacios radiofónicos, a través de Altavoz radio en la ciudad de Chihuahua y de Órbita radio en Ciudad Juárez; además, se mantuvo al aire por tercer año consecutivo el programa de radio producido por la comisión: Con sentido humano, a través de radio Universidad y en diferentes plataformas digitales.

El Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos constituye una de las acciones más

importantes para reconocer la contribución de periodistas y personas comunicadoras del Estado de Chihuahua en la promoción y protección de los Derechos Humanos de la comunidad. En la quinta edición del certamen se recibieron trabajos participantes de los municipios de Chihuahua, Juárez, Parral, Camargo y Guachochi, por lo que entregaron 12 premios y 9 menciones honoríficas.

Vinculación y promoción.

La cooperación en el servicio público y privado es fundamental, por ello, en 2024, la CEDH firmó 19 convenios de colaboración con diversas instituciones para fortalecer la capacitación, formación, promoción, difusión, divulgación, investigación, defensa y protección de los Derechos Humanos; también, gracias a la colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo se instaló una oficina itinerante en Camargo.

Además, impulsó el desarrollo de mesas de diálogo, foros, talleres, capacitaciones y conversatorios que sumaron voluntades para escuchar y construir propuestas para la atención a personas de grupos prioritarios.

En este contexto, derivado del trabajo colaborativo de la red Estatal de Derechos Humanos instalada y encabezada por la Secretaría General de Gobierno, con el apoyo de la CEDH, el 13 de abril de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Primer Programa Estatal de Derechos Humanos que constituye una guía clara para trazar una ruta que dará forma a las políticas públicas enfocadas en la protección de la dignidad de todas las personas; propiciar el desarrollo de una cultura de paz, libertad, respeto, colaboración y participación social.

Con el propósito de sensibilizar a la comunidad sobre la vida de las personas privadas de la libertad, la comisión organizó exposiciones fotográficas en las ciudades de Cuauhtémoc y Chihuahua con imágenes artísticas tomadas por personal de la CEDH en los Centros de Reinserción Social del Estado, las cuales mostraron cómo la humanidad

persiste aún en contexto de reclusión.

Como parte de las acciones de vinculación con pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara la CEDH participó en el Yumare, una de las ceremonias rarámuri más importantes que integran la cosmovisión indígena, lo que permitió fortalecer la presencia y cercanía de la institución en la comunidad.

La violencia contra las mujeres es uno de los flagelos que más lastiman a la sociedad, por lo que de manera permanente promovemos una agenda activa para fomentar la perspectiva de género con el apoyo continuo de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de Derechos Humanos e instituciones con quienes hacemos equipo.

Velar por los Derechos Humanos es tarea de todos los sectores de la sociedad y esto incluye el privado, que ha estado presente en las tareas de vinculación de la CEDH desde el 2018, gracias a la creación del distintivo empresa comprometida con los Derechos Humanos, cuyo objetivo es mejorar las normas y prácticas laborales, por lo que este año se entregaron 117 distintivos a empresas de los diferentes municipios del Estado y se refrendó el compromiso de promover dicho distintivo en 21 Entidades de la República y en el extranjero gracias a la firma de convenios con comisiones homólogas e instituciones educativas locales e internacionales, como la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad La Salle, de Colombia.

La CEDH mantuvo también el acompañamiento directo con grupos de atención prioritaria como personas de la diversidad sexual en situación de movilidad, personas con discapacidad y adicionalmente a través de la coordinación con diversas dependencias gubernamentales del nivel estatal.

Gestión interna.

Como parte de los procesos para fortalecer la estructura institucional a fin de brindar servicios eficientes la CEDH estableció 21 acuerdos ejecutivos de presidencia y órganos colegiados para actualizar la normativa institucional en cuanto a la adminis-

tración de recursos rendición de cuentas y ejecución del gasto, el plan anual de capacitación, manual de procedimientos de recursos humanos y el diagnóstico de cultura institucional sobre igualdad de género y no discriminación al interior del organismo.

Protección y defensa.

Las personas acuden a la CEDH al sentir que su dignidad humana no ha sido respetada o cuando enfrentan desánimos y problemáticas originadas por el servicio público, por eso revisamos cuidadosamente cada situación, para recibir y procesar una queja, brindar asesoría o gestionar ante otras instituciones y acompañarles en todo momento.

En este marco, el total de servicios directos otorgados por personal de las siete oficinas en el estado ascendió a 7 mil 452 y de estos el 73.9% fueron presenciales, mientras que el resto vía telefónica o de forma virtual, y, considerando que una atención puede involucrar a más de una persona usuaria, se registró un total de 7 mil 993 personas atendidas, de las cuales el 52.47% fueron mujeres.

El servicio público consiste en brindar una atención inclusiva y eficiente, aun cuando algunos asuntos no se relacionen directamente con actos de autoridad, por lo que en 2024 se brindaron 4 mil 285 asesorías, principalmente en las oficinas de Chihuahua y Juárez.

Se realizaron 2 mil 245 gestiones mediante actos de vinculación con instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno y sociedad civil, para evitar, en lo posible se consumará una violación a Derechos Humanos, un registro de 24.65% por más, en comparación con el año anterior.

Al no lograr una solución satisfactoria o por tratarse de asuntos graves, se registraron 922 quejas en contra de autoridades locales y federales, de las cuales 829 corresponden a la competencia de esta institución, un incremento del 7.5% con relación al 2023. De dichos asuntos 775 fueron

iniciados a petición de parte y 54 por oficio, en quejas tramitadas por la oficina central y en las regionales donde se identificó a mil 331 personas presuntamente agraviadas en su mayoría hombres, en un 52.8% de los casos.

Cabe mencionar que en el 77.61% de la población atendida se trató de derechos violentados a personas de grupos de atención prioritaria, es decir, niñas, niños y adolescentes, personas privadas de la libertad, mujeres víctimas de violencia y personas de 60 años de edad o más.

Además, se reclamaron 4 mil 120 actos violatorios contra autoridades estatales y municipales, siendo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica el más afectado con 469 expedientes; y por otro lado, se remitieron a la CNDH 93 quejas en contra de instituciones federales.

La CEDH se involucra de manera constante y activa en la supervisión del respeto de la dignidad humana en el sistema penitenciario estatal; por ello, se registraron 687 visitas a los CERESOS y CERSAI estatales, especialmente en los municipios de Juárez y Chihuahua.

A fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a Derechos Humanos, se emitieron 35 medidas cautelares por considerar la existencia de acciones u omisiones que ponían en riesgo a 49 personas usuarias, entre ellas 19 niñas, niños y adolescentes; 18 mujeres y 12 Hombres.

para documentar violaciones a la integridad y seguridad personal se realizaron 67 valoraciones médicas y 70 servicios del área psicológica que se adjuntaron a los expedientes de queja.

Durante el 2024 se atendieron mil 288 expedientes, de los cuales 459 estaban pendientes de años anteriores. Se incrementó también el número de asuntos resueltos por conciliación en 91 expedientes de queja, así como 235 por solución durante el trámite, lo cual representa un 111% y 25% respectivamente más que el año anterior. Además, 447 fueron cerrados por causales que impiden un pronunciamiento de fondo, lo que muestra el esfuerzo de la comisión

por cumplir con los principios de inmediatez, concentración y rapidez en beneficio de la sociedad.

Al acreditarse actos u omisiones cometidas por personas servidoras públicas se emitieron 60 recomendaciones y se establecieron 22 acuerdos de no responsabilidad a 32 autoridades. Los expedientes resueltos que se concluyeron según las diversas causales en 2024 fueron 855 casos.

En la CEDH sabemos que la transformación institucional es un proceso incuestionable que nos obliga a renovarnos para responder con eficacia ante los desafíos que enfrentamos como sociedad, por eso seguimos adelante con la voluntad de servir con empatía y conciencia en la protección, defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.

[Aplausos].

7.

PARTICIPACIÓN DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Enseguida, se concede el uso de la palabra al maestro Alejandro Carrasco Talavera, encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Adelante.

- El C. Mtro. Alejandro Carrasco Talavera: Muy buenos días a todas y a todos.

Santiago De la Peña Grajeda, con la representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Myriam Hernández Acosta, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Elizabeth Guzmán Argueta, Diputada Presidenta del Honorable Congreso del Estado.

Diputadas y diputados.

Con el debido respeto, presento el Informe de Actividades del Ejercicio 2024, con el que doy cumplimiento al artículo 4o. de la Constitución Política de nuestro Estado y lo dispuesto en los numerales 2, 5, 11, 15, 50 y 51 de la ley que rige a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El año 2024 presentó configuraciones a nuevas formas de desigualdad entre las personas, que a partir de las brechas económicas, sociales y culturales ocurridas en nuestra comunidad y en países vecinos, nos llamaron a no perder de vista que los Derechos Humanos no son concesiones, sino derechos inalienables. Los Derechos Humanos se exigen y deben ser garantizados para toda la sociedad en su conjunto, en todo momento y en todo lugar. Los Derechos Humanos no son una moda.

Estos retos los abordamos en diversos programas en materia de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación.

La sensibilización es una herramienta poderosa de prevención y actúa directamente sobre la raíz de muchas conductas que son dañinas, como lo son la falta de conocimiento, la indiferencia, los prejuicios.

Atendiendo a esta visión logramos capacitar a 82 mil 413 personas a lo largo y ancho de nuestro querido Estado de Chihuahua, entendiendo que se trata de un proceso de generar conciencia, empatía y educación en las personas respecto a sus derechos, así como también las responsabilidades porque a veces solamente hablamos de derechos, pero no de obligaciones.

De esta manera, hemos logrado un incremento del 5% respecto al año anterior, esto con la convicción de hacer un cambio cultural en la sociedad y también promover la empatía, el respeto y la tolerancia con los grupos más necesitados en nuestra Entidad, pero también debemos de hablar de obligaciones jurídicas que debemos de respetar sobre todo, las autoridades, esto representó mil 751 acciones de capacitación que equivalen a 150 eventos más que los implementados durante el año

anterior, abarcando 41 municipios de la entidad de manera prioritaria, incluyendo a mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de origen indígena.

Quienes trabajan en los gobiernos no son simplemente operantes de las políticas públicas, son guardianes de los derechos de la población, su labor impacta directamente en la calidad de vida de todas las personas, su dignidad y acceso a la justicia. Por ello resulta imperativo que cada funcionario y funcionaria tenga la sensibilidad necesaria para actuar con responsabilidad, empatía y respeto, respeto a la dignidad humana, este término que a veces es muy difuso, pero no nos queda muy claro a qué se refiere, recordemos que los Derechos Humanos se basan en la dignidad y esa dignidad implica que cualquier persona que esté en el Estado de Chihuahua vale lo mismo ante la ley, y no debe existir discriminación para nadie.

Sé que el día de hoy me acompañan titulares de importantes instituciones locales y federales también, a ustedes nuestro agradecimiento sincero por su solidaridad con esta causa de los Derechos Humanos y por permitirnos en este año que estoy informando ante ustedes, lograr capacitar a 23 mil 249 personas del servicio público de todos los niveles, desde la mujer policía que nos está apoyando trabajando en una colonia hasta la profesora o el profesor que nos está apoyando con niñas y niños y adolescentes que presentan todo tipo de problemáticas en sus vidas, hasta la persona titular de una institución que decidió capacitarse, porque como sabemos la corrupción y las violaciones a Derechos Humanos se deben de prevenir barriendo las escaleras desde arriba hacia abajo y no al revés.

A ustedes les digo, tener personal capacitado fomenta la confianza ciudadana, mejora relaciones laborales, disminuye riesgos legales y hoy más que nunca el deber de quien lidera cada sector es construir una comunidad donde se resuelvan problemas actuando con conocimiento, ética y respeto.

Con estas acciones logramos ubicarnos en el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a personas capacitadas, mi reconocimiento a todo el personal de la comisión que está en el área de capacitación.

Desde otro frente, estamos creando redes de acción por medio de campañas en medios tradicionales y redes sociales, emitiendo en este periodo que se informa 9 campañas institucionales que promueven temas como discapacidad, igualdad de género, derechos de niñas, niños, y adolescentes, etcétera.

En ese sentido, se realizaron un total de mil 461 producciones que al lanzarlas demostramos que estamos de acuerdo con cualquier lugar del país que está respetando Derechos Humanos. ¿A qué me refiero con esto? A que las campañas que estamos lanzando desde Chihuahua se están replicando en estados como Tabasco, como Coahuila, como Aguascalientes, como Tlaxcala. Tengo el honor de decirles que las campañas que emitimos en Chihuahua pudiendo decirlo de alguna manera las exportamos a otros lugares por la calidad con la que se están realizando.

La labor que realizan periodistas en el estado les coloca como líderes de opinión al visibilizar y movilizar a la sociedad frente a las injusticias, exigiendo rendición de cuentas por parte de las autoridades y actores responsables. Es así que la quinta edición del Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos obtuvo en 2024 un récord de 53 personas participantes, nuestras felicitaciones y reconocimiento a quienes participaron en este premio, por su incansable labor que ejercen de una forma responsable y a favor de nuestros derechos.

En temas de vinculación, celebramos 19 convenios en este año, entre estos convenios se encuentran algunos que celebramos con Estados como Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, a instituciones inclusive de carácter internacional como la Universidad de La Salle en Bogotá Colombia, realizar trabajo de campo directamente con las comunidades y escuchar de primera mano sus inquietudes fortalece la confianza de la ciudadanía en nuestra institución.

Es así que este año pusimos en marcha la oficina itinerante en Ciudad Camargo, Chihuahua, la idea es seguir expandiendo las labores de esta institución para seguir llegando cada vez más a la población de nuestro estado.

Por otro lado, hablando de empresas, contamos con el distintivo empresa comprometida con los Derechos Humanos, este es un reconocimiento otorgado por la comisión a empresas que demuestran un verdadero compromiso y sobresaliente obviamente respecto a los Derechos Humanos, evitando simulaciones y logrando incidir positivamente en las personas trabajadoras y por ende en toda la sociedad. En este año se entregaron 117 distintivos a diversas empresas del sector primario, secundario y terciario.

La resiliencia se trata de superar lo inesperado y en Chihuahua sabemos de esto. El día 6 de agosto del año pasado dejó de existir en este mundo el licenciado Javier González Mocken, hombre siempre dispuesto a luchar por el bienestar de su comunidad, dispuesto a escuchar y dispuesto a ser justo. Al honrar su memoria no solo recordamos sus logros sino también el ejemplo que nos dejó haciendo siempre un llamado a la acción, a no tener miedo, y a ser mejores personas.

Su vida fue de servicio de entrega y de esperanza para un futuro mejor y esa precisamente esa es la llama que debemos mantener encendida todas las funcionarias y funcionarios que estamos presentes el día de hoy. Su partida nos dolió y en su memoria hemos estado realizando cada uno de los proyectos que él encomendó al inicio de su presidencia. Nuestro respeto sincero a su familia y a las amigas y amigos del licenciado que nos acompañan el día de hoy.

[Aplausos].

Seguimos atendiendo en diversos espacios los problemas sociales, uno de ellos es la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Chihuahua, para procurar que se restituyan de manera emergente las necesidades de salud,

educación y justicia de personas desplazadas por la violencia, sobre todo en nuestra zona serrana.

Reconocemos que es un tema muy delicado y que viene desde hace años, pero queremos destacar que en todo momento hemos encontrado el apoyo tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado y, por supuesto, los municipios que nos están acompañando en esta tarea.

Principalmente atendiendo emergencias investigando los motivos y las causas de este fenómeno que nos afecta y procurando el retorno seguro de las personas a sus lugares de origen.

Como una sociedad global lo que pasa en otras latitudes del mundo tiene repercusiones en lo local y justo al inicio de mi mensaje mencionaba problemas... problemáticas que se originaron en otros países y que nos afectan e inciden a veces de manera negativa, a veces de manera positiva aquí en donde vivimos.

En materia migratoria nuestra nación, y especialmente el Estado de Chihuahua, vivió las consecuencias de violencia, desplazamiento forzado, problemas de guerrillas, cambio climático y acceso a la justicia en otros países, esto motivó un incremento de casi el 200% de personas en contexto de movilidad urbana cruzando por México y con ello, una movilización del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como nunca se había visto para vigilar, para prevenir, que no se violaran los Derechos Humanos de más de 2 mil personas migrantes que atendimos mediante operativos de supervisión en diversas ciudades y poblaciones en el Estado.

Seguiremos siendo garantes de derechos y participando en la articulación de esfuerzos, por lo que aprovecho estar ante ustedes en esta Tribuna para convocar a los tres niveles de gobierno a la unidad, ante la nueva configuración que tomó el día de ayer la política migratoria en los Estados Unidos.

Es un fenómeno que nos va a afectar definitivamente y no es momento para la dispersión de las fuerzas políticas; reafirmando el compromiso

de proteger a niñas, niños y adolescentes se implementan diversos programas de observancia y supervisión, así como lo hicimos con personas que pertenecen a diversos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, periodistas, etcétera.

La instauración de una normativa interna, por su parte, también es fundamental, por eso pusimos en marcha el sistema de control interno por primera vez en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esto nos permitió conocer tanto las debilidades como las fortalezas de la comisión, pero primordialmente nos sirve para optimizar los procesos institucionales y llegar al 2 por cien... perdón al 29% los indicadores de gestión.

Esto no es cualquier cuestión, estamos hablando de que todo lo que no se mide no puede ser mejorado y en la comisión estamos conscientes de ello, por lo tanto, todos estos procesos deben de ser medidos y por supuesto transparentes para la ciudadanía. Cualquier acción que lleve a cabo la comisión o cualquier otra institución pública se maneja con dinero público y debe existir esta transparencia.

En temas de igualdad entre mujeres y hombres tampoco nos quedamos atrás, realizamos el diagnóstico de cultura institucional sobre igualdad de género y no discriminación para conocer retos y disminuir la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres, por primera vez en la historia de la comisión contamos con oficinas regionales donde sus titulares son mujeres, es momento de mujeres también.

La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier organización, en este tema, en el más reciente dictamen del ICHITAIP, este instituto nos asignó una calificación del 100% en todas las obligaciones de transparencia hablando de presupuesto, gasto, contratos, servicios y políticas públicas, cumplimos en todo y nos podemos jactar de ser transparentes en el ejercicio presupuestal.

También aprovecho para manifestar que con la reciente reforma en materia de transparencia por nuestra parte cuentan con que seguiremos haciendo visibles los procesos internos y resoluciones de nuestro organismo.

En este año 2024 que estamos informando, registramos 7 mil 452 servicios de atención inmediata y aquí deseo destacar que en 2 mil 245 de los casos que recibimos restituímos derechos básicos, derechos que tienen que ver con esta palabra que les comentaba en un inicio dignidad, sin estos servicios no vivimos una vida con dignidad, agua potable, educación, salud, electricidad, por mencionar solo algunos.

Estos casos son sustantivos ya que gracias a la intervención de las visitadurías y sin la necesidad de iniciarse un expediente se actuó de una forma rápida y colaborativa con autoridades de diversos niveles de gobierno. Mi reconocimiento también para todo el personal de la comisión que se encuentra trabajando día a día en las áreas de visitadurías.

Aspectos como este nos llenan de una enorme satisfacción ya que pod... podemos ver casos como el de aquella madre que logra que a su hijo con alguna discapacidad se le brinden servicios que de otra manera no tendría.

Es momento de dejar atrás ese mito de que los Derechos Humanos solamente sirven para defender delincuentes, esto no es así. Los Derechos Humanos van a proteger en algún momento a cualquier persona y no tenemos ningún derecho de estar juzgando a quienes sí a quienes no esa, esa es la magia de los Derechos Humanos que son para todas las personas sin discriminación.

En otros 829 casos iniciamos expedientes de queja al apreciar posibles violaciones al derecho a la legalidad, a grupos de atención prioritaria, los relacionados a la integridad y seguridad personal, libertad, educación y trabajo. En estas investigaciones encontramos que en el 77% de los casos se afecta población vulnerable por lo

que siempre buscamos restituir estos derechos y devolver a las personas lo que jurídicamente les corresponde, principalmente llevando a cabo procedimientos para tener acuerdos de conciliación y de solución de expedientes con las autoridades.

Ninguna víctima debe quedar sin acceso a la justicia. En este año, dándole voz a quienes no lo tienen, emitimos 60 recomendaciones superando el récord que teníamos de años anteriores, 60 recomendaciones. Si nos ponemos a comparar con otras comisiones a lo largo y ancho del país veremos que tenemos que tener mucho orgullo por la Comisión de Chihuahua, ya que nos hemos esmerado no nada más por aumentar el número de estas resoluciones sino por mejorar su calidad y la forma en la cual se cumplen.

Mediante estas 60 recomendaciones, se pidió la restitución de derechos a 71 personas afectadas a través de 480 acciones orientadas a complementar estas resoluciones de fondo.

Por otra parte, la voz de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado debe ser apreciada primero, debemos entender su cultura, escucharles y caminar junto con ellos por su tierra en la misma tierra que habitó el poeta Erasmo Palma y donde corre la mundialmente famosa Lorena Ramírez inició operaciones la nueva oficina para capacitar a la población e investigar violaciones a Derechos Humanos, esto fue en Guachochi, es algo histórico para la Comisión, jamás se había abierto una oficina en la sierra y hoy más que nunca nuestras hermanas y hermanos que habitan esta zona necesitan nuestro apoyo.

Nuestra misión es extender aún más la labor de la Comisión en otras comunidades de la Sierra Tarahumara. Las personas que van a estar trabajando ahí que ya están trabajando desde diciembre ellas entienden y valoran las diferencias culturales, la cosmovisión y sobre todo, la lengua de las personas.

Nosotros y nosotras tenemos que adaptarnos a las condiciones de las personas no viceversa.

La CEDH tenía que ser el primer Organismo Autónomo del Estado en atender con pertinencia cultural al 100%, con igualdad de inclusión y cumpliendo tratados internacionales y las normas le... le... locales, perdón.

En el Estado de Chihuahua, tanto la comunidad rarámuri, chabochis, migrantes, cualquier persona no se debe de quedar atrás en cuanto a la aplicación de sus Derechos Humanos.

A lo largo de este mensaje compartido que en 2024 alcanzamos el primer lugar en varios rubros, esto se debe al esfuerzo de todas las mujeres y hombres que trabajan en la CEDH.

Hoy vengo ante esta Honorable Tribuna a evidenciar con datos, cifras y conocimiento de causa, que se están dando resultados.

Nuestra comisión está destacando a nivel nacional muestra de ello es el más reciente informe del INEGI, publicado hace unas semanas donde se evidencia que nuestra Comisión obtuvo el segundo lugar en servicios de protección y Derechos Humanos a nivel nacional, solamente por debajo de la Ciudad de México en cuanto a gestiones, asesorías, medidas cautelares y demás acciones de investigación.

Respetuosamente, a quienes personifican a los tres Poderes del Estado, a quienes por mandato legal rendimos este informe les digo, hay retos por las nuevas configuraciones de problemas sociales y los estamos afrontando, pero también hoy les informo que estamos cumpliendo en promover y hacer que se cumplan los Derechos Humanos. Doy cuenta de ello en este documento que les entrego el día de hoy.

Estar al frente de este organismo por los últimos 5 meses ha sido algo inusitado, nos ha permitido echar andar proyectos y programas que siempre vimos como necesarios por los últimos 12 años, donde he tenido la fortuna de iniciar desde los puestos más básicos y de los cuales me siento muy orgulloso, porque he aprendido y se me ha permitido conocer todas las áreas de esta Comisión.

Presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es el más alto honor que una persona defensora de Derechos Humanos puede tener. Nunca pensé tener la fortuna de estar aquí ante ustedes y estos son los resultados que les presento hagan un balance de ellos seguiremos dando lo mejor de nosotras y nosotros trabajando al máximo de nuestras capacidades para seguir llevando a la CEDH a dar los mejores resultados y hasta donde nos lo permitan.

Gracias a todas y a todos por su tiempo.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Aplausos].

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Muchas gracias, maestro.

8.

ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Le solicito proceda con la entrega del informe de conformidad con la normatividad aplicable.

[El maestro Alejandro Carrasco Talavera, encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hace entrega del informe correspondiente a la Presidenta del Honorable Congreso del Estado, así como a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado].

Muchas gracias, maestro.

Solicito a la Secretaría remita el Informe a la Comisión del... de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su análisis.

9.

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: A continuación, invitamos respetuosamente al licenciado Santiago De la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno en representación de la maestra María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del

Estado nos dirija un mensaje.

- El C. Lic. Santiago De la Peña Grajeda: Muy... muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva.

Saludo con mucho gusto y con la honrosa representación de la Gobernadora Maru Campos, a todas y todos los integrantes de este Honorable Congreso del Estado; así como a todas eh... los representantes y titulares de organismos autónomos, compañeros servidores públicos, representantes de la sociedad civil, representantes de algunos municipios del Estado de Chihuahua y al público en general que nos acompaña esta mañana.

Eh... Quisiera empezar eh... por decirles que tuve el gusto de conocer al licenciado Javier González Mocken, en el ejercicio del servicio público. Realmente mi relación con él data de algunos meses hasta el momento de su lamentable partida. Sin embargo, en este periodo corto de tiempo en el que tuve la oportunidad de conocer al ser humano y no solo a la figura pública, al servidor público, al político pude darme cuenta de que trataba yo con un gran ser humano, comprometido, como lo decía el Presidente de la Comisión Estatal, eh... comprometido con su comunidad, comprometido con su país y comprometido con hacer las cosas de manera diferente.

Señora Eloisa Fong de González Mocken reciba mi respeto siempre y transmita, en nombre de la Gobernadora y del Gobierno del Estado y por supuesto a título personal, mi absoluto cariño y reconocimiento por el legado de su... de su marido.

Descanse en paz, Javier González Mocken.

[Aplausos].

Saludo también, con mucho gusto, a quienes me acompañan el día de hoy en esta Alta Tribuna y quienes ya han sido debidamente presentados Magistrada mi... Myriam Hernández y, por supuesto, quien comparece hoy como

eh... Encargado de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandro Carrasco Talavera.

Quisiera eh... también darme un espacio para platicarles un... un pequeño anécdota eh... en... en el momento en el que el licenciado gonza... González Mocken fue postulado como aspirante a Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el tiempo que tuvo la oportunidad de dirigir este importante órgano constitucional en el Estado de Chihuahua, tuve la oportunidad de trabajar de tener varias sesiones de trabajo con él en las que pude conocer cuál era la visión que el licenciado González Mocken quería imprimir a este... a esta importante institución; y recuerdo perfectamente que él me decía Santiago necesitamos relanzar la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que, enten... entendiendo, perdón, que la comisión no es un ente aislado que no es un organismo eh... un órgano autónomo constitucional que deba asumirse como... como una isla, como alguien que opera de manera individual y que tiene como propósito sí promover, velar eh... eh... custodiar los Derechos Humanos de las y los chihuahuenses, sino tenemos que asumarnos como una entidad del Estado que tiene que interactuar con el resto de los Poderes, que tiene que interactuar con... con el resto de las autoridades, pero sobre todo tiene que acercarse a aquellas personas que son la res... la razón de ser de la creación de un órgano de este tipo.

Y creo que esa filosofía, por el corto periodo que él estuvo al frente de la Comisión, logró imprimirla en su equipo de trabajo. Y hoy creo que el informe que nos presenta Alejandro Carrasco Talavera, encargado eh... de... de... de la Presidencia de la Comisión, pues da buena muestra de este giro, de esta nueva forma de interpretar la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que tenía en mente eh... desarrollar el licenciado González Mocken.

Alejandro lleva 5 meses eh... al frente de la comisión, creo que el informe presentado el día

de hoy da buena cuenta de que esté donde esté el licenciado González Mocken su equipo de trabajo le está entregando buenas cuentas.

Agradezco también en... en este sentido al Congreso del Estado por su disposición para hacer esta modificación rápida para... a la norma que rige la vida interna de la Comisión de Derechos Humanos, que permitió darle estabilidad legal eh... a esta etapa pues que resultó evidentemente inesperada para todos nosotros.

Entonces, pues, el trabajo al interior de la comisión, el trabajo al exterior de la comisión bajo esta idea eh... que les... que les compartí hace unos momentos pues resulta evidente, a los chihuahuenses nos encanta saber y sentirnos orgullosos de que somos el Estado más grande de la República Mexicana, pero además nos encanta saber que somos el primer lugar nacional eh... en ganadería, que somos el primer lugar nacional en la producción de una buena cantidad eh... de... de... de granos e insumos eh... de la economía pri... eh... primaria.

Pero además de eso, nos gusta saber que nuestra gente, que nuestras instituciones destaca también a nivel nacional. Los datos presentados por el encargado del despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos da buena cuenta de que también en la comisión, de que también en materia de Derechos Humanos Chihuahua ha transitado y sigue transitando por el camino correcto.

Eh... en este sentido, reconocemos, desde el Poder Ejecutivo del Estado, el compromiso y la responsabilidad con que a pesar de las circunstancias han dado un paso al frente todos y cada uno de los funcionarios que integran esta comisión y que a... y que permiten el día de hoy presentar un informe 2024 que no solo supera el trabajo de la propia comisión, sino que pone a la misma en los primeros lugares en custodia y promoción de Derechos eh... Humanos a nivel nacional.

¿Qué habría que destacar de este informe? Por

supuesto, no solo los detalles que ha dado ya eh... eh... el representante de la misma, a mí me gustaría destacar uno en particular, la ampliación de la cobertura, no solo en sus oficinas itinerantes como la que describía hace un momento el presidente que hoy por hoy se encuentra en Camargo, si mal no recuerdo, sino también la apertura de la oficina regional en Guachochi, una acción sin precedentes que sin duda debe llenarnos de orgullo ya que está dirigida esta oficina de la comisión por abogadas de origen rarámuri, garantizando esta noción de tener un servicio más cercano y con una perspectiva cultural que per... nos permite abrazar a nuestros pueblos originarios.

Está la Comisión llevando el trabajo a donde más se necesita entendiéndose -como decía el licenciado González Mocken- no como una isla, sino como parte de un ecosistema que tiene la obligación constitucional de... de procurar el respeto a los Derechos Humanos que como bien ya dijo quién me antecedió en el uso de la palabra no es una concesión ni una moda es un derecho y siempre tendremos la posibilidad de exigirlo.

Para no extenderme más y repetir las cifras que... que quien me antecedió en el uso de la palabra eh... ya presentó eh... solamente quisiera cerrar diciendo que el gran reto de las instituciones del Estado mexicano es o pasa en mi opinión por hacernos una pregunta que resulta fundamental. ¿Para qué existen estas instituciones y para qué estamos aquí quienes de manera temporal, sin duda temporal, estamos al frente de estas instituciones? Pues estamos aquí para materializar el mandato de la ley, estamos aquí para pasar del discurso a la acción, acción que debe tener en todo momento como centro o como razón de ser los ciudadanos a los que estamos obligados a servir.

Este es un compromiso que debemos asumir quienes hoy convivimos en estos espacios democráticos en un estado tan diverso y con una riqueza cultural extraordinaria. El respeto y la protección de los Derechos Humanos serán siempre fundamentales para garantizar la igualdad

y el bienestar de nuestros ciudadanos de nuestras comunidades.

Y estos retos no son conceptos estáticos, estos retos van evolucionando conforme evoluciona nuestra sociedad y como evoluciona nuestro entorno. Y hoy, precisamente, me parece que el gran reto lo tenemos frente a nosotros en la persona de cada uno de los mexicanos que están siendo amenazados con ser expulsados de territorio norteamericano.

Que quede bien claro, los y las chihuahuenses, encabezados por la Gobernadora del Estado, somos absolutamente empáticos con los ciudadanos mexicanos que serán en alguna forma y en algún momento repatriados por esta nueva política adoptada por el Gobierno del Estado mexi... perdón, por el Gobierno de los Estados Unidos de América, los migrantes mexicanos serán recibidos con todo el afecto, con todo el profesionalismo y con toda la disposición no solo por el Gobierno del Estado sino por esta gran alianza y gran coordinación que desde hace semanas se ha entablado desde el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y, por supuesto, los municipios eh... fronterizos de nuestro Estado de Chihuahua.

Los migrantes recibirán una atención primaria en donde se les dará, por supuesto, alimentación, se les dará las condiciones para su aseo personal, se les dará también cobertura para aquellos que requieran la expedición de algún documento que acredite su identidad personal y sobre todo, y en pleno respeto a sus Derechos Humanos, se les brindará la posibilidad de que ellos no sean eh... simplemente albergados en un espacio temporal, se les dará la posibilidad de que en el menor tiempo posible puedan regresar a sus comunidades, a sus estados y puedan, dentro de la tragedia que pueda ser su repatriación y... y... y... y ver trunco el sueño de... o para cumplir el sueño americano, que ellos tengan la posibilidad de regresar con toda seguridad a los brazos de sus familias en cada rincón de nuestro país.

Cuenten con el Gobierno del Estado en la

Comisión Estatal de Derechos Humanos para seguir desarrollando esta noción de no asumirnos como islas sino de trabajar conjuntamente para que el tema de los Derechos Humanos no sea, como bien lo decías, eh... Alejandro, no sea un tema de moda y no se entienda como una concesión del Estado. Los Derechos Humanos están ahí para exigirse y para ejercerse y el Gobierno del Estado será siempre un aliado de esta causa.

Enhorabuena por los logros alcanzados, felicitaciones y nuestro más absoluto respeto para cada uno de los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuenten con el Gobierno del Estado como contaron al momento de que juntos construimos por primera vez en la historia del Estado de Chihuahua el Plan Estatal de Derechos Humanos, que es una ma... es una forma de demostrar que se puede materializar el discurso en un plan de gobierno y en acciones concretas que benefician a la población.

Este Plan Estatal de Derechos Humanos eh... fue construido, y vale la pena reconocer el trabajo del personal de la Secretaría General de Gobierno, a mi cargo, por supuesto, pero con el acompañamiento permanente de quienes conforman la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa es una muestra de que juntos podemos construir mejores escenarios para la promoción, el respeto y la consolidación de una cultura de Derechos Humanos en nuestro Estado.

Cuenten con el Gobierno del Estado de Chihuahua, cuenten con la Gobernadora Maru Campos para afrontar los retos que nos plantea nuestra nueva realidad no solo en materia de Derechos Humanos sino en lo que tiene que ver con seguridad, salud y bienestar absoluto de la población de este gran Estado.

Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenas tardes.

[Aplausos].

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Agradecemos la participación

del Secretario General de Gobierno.

Muchas gracias.

A nombre de esta Sexagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, agradezco su presencia a esta sesión al Secretario General de Gobierno, licenciado Santiago De la Peña Grajeda; a la magistrada Myriam Hernández Acosta, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; y al maestro Alejandro Carrasco Talavera, encargado de despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por acompañarnos.

Igualmente, muchas gracias a todas las autoridades invitadas y público en general que acompañó este evento.

10.

RECESO PARA DESPEDIR A AUTORIDADES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL Y DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** A continuación, se declara un breve receso a fin de que la Comisión Especial de Cortesía despida a los funcionarios que nos acompañan.

Solicito a las y los legisladores permanezcan en sus lugares para estar en posibilidad de en unos momentos más, renuda... re... reanudar la sesión y continuar con el desahogo del orden del día.

[Receso 11:47 Hrs.]

[Hace sonar la campana].

11.

REANUDACIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** [Hace sonar la campana].

Diputadas y diputados, se reanuda la sesión. [12:12 Hrs.]

12.

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Siendo el quorum visible, continuamos con el desahogo del orden del día aprobado para este Segundo Periodo Extraordinario.

13.

**PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES
INFORMES O DOCUMENTOS**

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Se concede la palabra al Diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, para que en representación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dé lectura al dictamen preparado.

- **El C. Dip. Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez.- P.R.I.:** Muy buenos días.

Con su permiso, Presidenta.

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Adelante, Diputado.

- **El C. Dip. Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez.- P.R.I.:**

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.-

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción II de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88, 111 y 178 de la Ley Orgánica; así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 10 de enero del año 2025, el Diputado José Alfredo Chávez Madrid, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de decreto, a fin de expedir la Ley Electoral para Elegir Personas

Juzgadoras del Estado de Chihuahua.

2.- En la fecha señalada en el antecedente primero, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a quienes integran esta Comisión la iniciativa en comento a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Con fundamento en los artículos 176 de la Ley Orgánica y 101 un del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, solicito la Presidencia la dispensa de la lectura del resto de los antecedentes y el decreto para remitirme a las consideraciones, no obstante, se inserte el contenido íntegro del documento en el Diario de los Debates de la sesión.

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** De acuerdo, Diputado.

Continúe.

- **El C. Dip. Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez.- P.R.I.:** Muchas gracias, Presidenta.

Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en referencia, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades competenciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto.

II.- A fin de lograr un cabal entendimiento del tema que nos ocupa, es menester retomar algunos sucesos y eventos que explican el trascendental momento en que nos encontramos al entrar al escrutinio de la iniciativa que motiva el presente.

El Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre de 2024, trajo consigo un nuevo paradigma en cuanto a la integración y designación de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, como de las Entidades Federativas.

Del régimen transitorio del Decreto citado en el párrafo que antecede, se deben resaltar algunos aspectos como son:

1.- Que las Entidades Federativas cuentan con la obligación Constitucional de armonizar su marco jurídico local en un plazo de 180 días, contados a partir del día 16 de septiembre del año 2024, ya que, con fundamento en el Artículo Primero Transitorio, el Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, la cual se dio el 15 de septiembre de 2024, por ende, tendríamos hasta el 14 de febrero del año 2025 para tal efecto.

2.- Las Entidades Federativas, para la renovación de los cargos de elección del Poder Judicial local, pueden establecer los términos y modalidades que considere, pero en éstos deben concluir... pero estos deben concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, y en caso de que pretendan hacerlo en el año 2025, tendrán que coincidir con la fecha de las elecciones extraordinarias de ese mismo año, estipuladas para el Poder Judicial de la Federación.

3.- En caso de que la Entidad Federativa organice el proceso electoral para el año 2025, no será aplicable para efectos de dicha organización, lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, mismo que menciona: Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Así pues, en razón de las obligaciones constitucionales que le asigna el multicitado Decreto

a las Entidades Federativas, es que quienes integramos esta Legislatura, el 18 de diciembre del 2024 aprobamos el Decreto 172/2024, por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Estatal, en materia de elección por votación directa de personas juzgadoras e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración del Poder Judicial, a fin de armonizar la legislación de la Entidad conforme a lo que se ha venido planteando.

Es propio destacar que la reforma referida en el párrafo próximo anterior y como ya se señaló, fue a la Constitución Política del Estado, misma en la que se establecieron las bases para la elección de personas juzgadoras en la Entidad. Sin embargo, quedaron algunos aspectos que aún requerían regulación específica, mismos que se retoman en la iniciativa que motiva el presente.

III.- La iniciativa en estudio, en los términos en que fue presentada se compone de un total de 81 artículos, organizados en doce capítulos de lo que se procederá a hacer una síntesis de sus puntos torales.

En el primero, que se denomina disposiciones Generales, se establecen las bases fundamentales del ordenamiento, se define su ámbito de aplicación y se señala el objeto que es regular los procedimientos que deberán observarse en la elección de personas juzgadoras, reglamentando las normas constitucionales relativas a la competencia local en las siguientes materias: organización y calificación de elecciones para personas juzgadoras; derechos, obligaciones y prerrogativas políticas o electorales de la ciudadanía en dichos procesos; funcionamiento y competencia de las autoridades electorales locales en tales elecciones; determinación de las infracciones a la ley, sujetos de responsabilidad, así como los procesos para la imposición de sanciones administrativas y el sistema de medios de impugnación. Así mismo, se regula lo relativo a la interpretación del cuerpo normativo, principios rectores, cooperación entre autoridades y se integra

un glosario que define los principales términos.

En el Capítulo Segundo se lleva... porque lleva por nombre la participación ciudadana en las elecciones, se establecen los derechos y obligaciones de la ciudadanía en los procesos electorales.

Por lo que respecta al Capítulo Tercero, se titula el... se titula del Sistema Electoral, se especifican... se especifican las fechas y procedimientos para la realización de elecciones ordinarias y extraordinarias.

En cuanto al Capítulo Cuarto, que se llama de la participación de las autoridades electorales, se definen las competencias y responsabilidades del Instituto Estatal Electoral y otras autoridades involucradas en la organización y supervisión de las elecciones.

Destaca su contenido... destaca de su contenido la disposición relativa a que las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo Estatal no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a los procesos electorales objeto de la ley; así como también es de mencionarse que se establece un artículo en particular, que el Tribunal Estatal Electoral sustanciará y resolverá en forma definitiva e inatacable los medios de impugnación que deriven de los procesos electorales para dichas elecciones.

En el Capítulo Quinto cuyo título es del Proceso Electoral, que se refiere a los actos y etapas del proceso electoral, mismo que también ahí se define, se puede resaltar que se estipula todo lo relativo desde su inicio hasta la declaración de validez y la entrega de constancias a las personas electas. Así pues, en cuanto a dichas etapas se tiene... así pues, en cuanto a dichas etapas se tiene que son: preparación de la elección, convocatoria y postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos y entrega de constancias de mayoría y calificación y declaración de validez de la elección.

Por lo que hace al Capítulo Sexto, que se nombra de los actos preparatorios de la elección, debe señalarse que en él se describen los procedimientos preliminares, incluyendo la convocatoria y postulación de candidaturas.

Capítulo Séptimo, se denomina el Procedimiento de Registro de Candidaturas, contiene varias secciones que son: la primera, donde se establecen los requisitos de elegibilidad; la segunda, que regula la convocatoria, y se señala que esta... que ésta deberá contener, al menos, fechas, plazos, cargos a elegir y las etapas del procedimiento que son: registro e inscripción de documentación de las personas aspirantes ante el Comité de Evaluación de cada Poder del Estado, acreditación de elegibilidad de aspirantes por el Comité de Evaluación y calificación de la idoneidad de dichas personas; tercera, que aborda todo lo relacionado con el registro de aspirantes, como es los datos que deberá contener la solicitud de registro y los documentos que habrá de llevar anexos; y la cuarta, al proceso de postulación de candidaturas y la quinta a la publicación de las candidaturas.

En cuanto al Capítulo Octavo, cuyo título es de las campañas electorales, se tiene que, como su nombre lo indica, regula todo lo referente a éstas, su duración, financiamiento y acceso igualitario a los medios de comunicación.

En el Capítulo Noveno, que se deno... se denomina de la documentación y el material electoral, en donde destaca que se establece la información que como mínimo contendrá la boleta electoral, así como que ésta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección conforme a las categorías que ahí mismo se describen.

Por lo que se refiere al Capítulo Décimo, cuyo nombre es de las faltas y nulidades electorales y su sanción, en el cual destaca que serán causas de nulidad de una elección las previstas en la Ley Electoral y en la Ley General. Así como se establece que el Tribunal Estatal Electoral deberá declarar la nulidad de la elección cuando

se exceda el gasto de campaña; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de lo previsto por la ley; se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita, públicos y privados y/o se acredite la violencia política grave contra las mujeres en razón de género, mediante sentencia firme.

Otro aspecto que se regula es que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco por ciento y que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

En el Capítulo Décimo Primero, que se denomina de los efectos de la inelegibilidad, se describen los procedimientos a seguir en caso de que se actualice dicho supuesto.

En cuanto al Capítulo Décimo Segundo, cuyo título es de la sustanciación y resolución de los recursos incidentes... e incidentes, como su nombre lo aproxima, se regula todo lo relativo al tema, haciendo remisiones a otros ordenamientos.

Por último, el régimen transitorio regula que una vez... que por única vez, para el proceso de elección extraordinaria de 2025, los plazos y términos se ajustarán a la reforma constitucional contenida en el Decreto 172/2024, estableciendo que la etapa de preparación iniciará con la sesión que celebre el Consejo del Instituto Estatal, dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del Decreto en estudio. De igual manera, se establecen los plazos y procedimientos para la implementación de la ley, la toma de protesta de las personas selectas, así como normas tendientes a la transferencia de funciones, recursos y responsabilidades que originan en razón a los órganos de nueva creación.

IV.- Quienes integramos esta Comisión de Dictamen, estamos conscientes de la importancia que reviste el proceso de elección que habrá de llevarse a cabo este año en nuestra Entidad, mismo

que es histórico y será un parteaguas en la vida política, jurídica y social de Chihuahua.

Por lo cual, estimamos imprescindible retomar y profundizar en algunos argumentos y razonamientos que aporta la exposición de motivos de la iniciativa en escrutinio.

Señala el iniciador... el iniciador que su propuesta tiene como propósito fundamental fortalecer los principios democráticos en la designación de personas juzgadoras en el Estado de Chihuahua, al promover la participación ciudadana directa, la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos de selección en dichos cargos.

Continúa destacando que la demanda por instituciones sólidas y confiables, así como la implementación de una elección democrática refuerza la legitimidad del Poder Judicial del Estado.

Quienes conformamos esta dictaminadora coincidimos con el iniciador en que las recientes reformas a la Constitución del Estado sobre el tema en cuestión, ameritan ajustes estructurales, normativos y operativos para implementar el nuevo procedimiento de elección de personas juzgadoras.

Aunado a lo anterior, resulta inexorable mencionar los ejes principales de la reforma que menciona la iniciativa en estudio, mismos que son: Rendición y cuantas... rendición de cuentas y democracia judicial, con la incorporación de procesos electorales para la designación de personas juzgadoras; con lo cual se fomenta la participación ciudadana y se asegura que los... que las y los titulares de cargos jurisdiccionales cuenten con el respaldo popular y con una evaluación transparente de idoneidad... idoneidad y trayectoria.

Garantía de paridad de género y representatividad que la propuesta incluye con mecanismos que aseguren la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de selección y en el ejercicio de los cargos conforme a los principios de igualdad sustantiva.

Transparencia y acceso a la información con el refuerzo de las obligaciones de publicidad y acceso a los procesos internos del Poder Judicial, lo que garantiza que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los criterios y procedimientos que rigen la administración de justicia.

V.- Esta Comisión de Dictamen, al analizar la iniciativa que da origen a este documento, dada la trascendencia del tema y en un afán de efectuar una dinámica inclusiva y plural en el proceso legislativo, es que al haberse recibido varias propuestas y opiniones de integrantes de este órgano, así como de diversas personas legisladoras que manifestaron su interés de participar en los trabajos de redacción de la ley en cuestión, procedió a realizar un estudio integral de las mismas, con el propósito de integrarlas, las que fueran viables, al articulado planteado por el iniciador.

Así las cosas, la propuesta original de la iniciativa fue objeto de varias modificaciones y adiciones que robustecieron su contenido, a fin de obtener un ordenamiento legal que contemple de manera más amplia y acuciosa el procedimiento de selección de personas juzgadoras que habrá de llevarse a cabo en la Entidad.

Al respecto, se puede destacar que se adicionaron diversas disposiciones relativas al Procedimiento Especial Sancionador, así como a los medios de impugnación, se profundizó en lo relativo al uso de las tecnologías de la información y se definieron algunos conceptos en el glosario.

De igual manera, la denominación del cuerpo normativo se cambió por resultar más específica la propuesta efectuada, para efectos de lo que aborda dicho ordenamiento.

Así pues, una vez realizadas las modificaciones y adiciones a que se ha venido haciendo referencia, es que la propuesta de Decreto que esta Comisión efectúa se compone de un total de 146 artículo, organizados en 16 capítulos, de los cuales se procede a resaltar sus puntos torales.

El Capítulo Primero contiene las disposiciones generales; el Segundo, lo relativo a la participación de la ciudadanía en las elecciones; por su parte, el Tercero, lo que corresponde al Sistema Electoral; a su vez, el Cuarto, hace referencia a la participación de las autoridades electorales; el Quinto, establece las normas reguladoras del proceso electoral; en cuanto al Sexto, se tiene que dispone los... se tiene que dispone los actos preparatorios a la elección, y el Séptimo, regula el procedimiento de registro de candidaturas.

Por su parte, el Octavo, se refiere a la propaganda y campañas electorales; el Noveno, a la documentación y materia electoral; el Décimo, aborda el régimen sancionador electoral; así pues, el Décimo Primero, se avoca a los efectos de la inelegibilidad; el Décimo Segundo, a los medios de impugnación; el Décimo Tercero, a las nulidades, y el Décimo Cuarto, alude a los incidentes.

VI.- Por los argumentos que han quedado vertidos en estas consideraciones, esta Comisión de Dictamen estima oportuna, viable y necesaria la ley propuesta por el iniciador, con las modificaciones y adiciones que se le efectuaron durante el proceso de escrutinio al interior de este órgano.

Así mismo, se hace constar que no se recibieron opiniones ni comentarios en el buzón legislativo, que se encuentra en el portal electrónico oficial de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las facultades y atribuciones establecidas en la Ley Electoral se ajustarán por única vez a los plazos y términos de la reforma constitucional electoral contenida en el Decreto XVII- I/RFCNT/0172/2024.

TERCERO.- La etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025, iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Estatal celebre dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Para el proceso electoral extraordinario de 2024-2025, el Consejo de la Judicatura a más tardar el día 21 de febrero del 2025 deberá enviar al Congreso del Estado el listado que contenga los nombres de las personas en funciones en el cargo que desean contender, las personas que declinan su participación o participan por otro cargo distinto ya sea en el Poder Judicial Estatal o Federal.

Las personas juzgadoras en funciones que deseen contender para el proceso electoral extraordinario 2024-2025, deberán aparecer en la boleta a efecto de ser elegidas por la ciudadanía, en los términos de los Artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto LXVIII/RFCNT/0172/2024.

QUINTO.- La jornada electoral extraordinaria se celebrará el primer domingo de junio del año 2025, podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto Estatal, con excepción de representantes de un partido político.

SEXTO.- El Instituto Estatal efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual

resolverá las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025.

SÉPTIMO.- Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Congreso del Estado el 1o. de septiembre de 2025. El órgano de administración judicial adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre de 2025.

OCTAVO.- El Congreso del Estado contará con 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de realizar las reformas y adiciones que resulten necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba apli... que deba publicarse.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua; a los 22 días del mes de enero de 2025.

Así lo aprobó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en reunión de fecha 21 de enero del año 2025.

Es cuanto.

Gracias, Presidenta.

[Texto íntegro del dictamen presentado]:

[H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción II de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88, 111 y 178 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 10 de enero del 2025, el Diputado José Alfredo

Chávez Madrid, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de decreto, a fin de expedir la Ley Electoral para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua.

II.-En la fecha señalada en el antecedente primero, la Presidencia del H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a quienes integran esta Comisión la iniciativa en comento, a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III.- La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos: "En sistemas democráticos contemporáneos, la justicia no solo se debe impartir con imparcialidad y profesionalismo, sino también debe contar con un respaldo de legitimidad social derivado de procesos claros y participativos. La elección de las personas juzgadoras mediante sufragio directo de la ciudadanía responde a este objetivo,

La presente iniciativa de Ley tiene como propósito fundamental fortalecer los principios democráticos en la designación de las personas juzgadoras del Estado de Chihuahua, al promover la participación ciudadana directa, la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos de selección para estos cargos de alta responsabilidad. La propuesta responde a la necesidad de garantizar un sistema judicial más ágil, imparcial y cercano a la ciudadanía, al asegurar que todas las personas puedan acceder a una justicia eficaz y confiable.

En un contexto de creciente demanda por instituciones sólidas y confiables, la implementación de una elección democrática para juezas, jueces, magistradas y magistrados refuerza la legitimidad del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y su cercanía con la sociedad a la que sirve. De tal manera, se vuelve indispensable armonizar nuestras disposiciones locales con las reformas federales en la materia. La presente iniciativa se inscribe en esa lógica, al proponer ajustes estructurales, normativos y operativos para dotar de mayor eficiencia al Poder Judicial, en cumplimiento con estas reformas constitucionales que plantean principios y mecanismos con el objetivo de fortalecer la justicia en nuestra entidad.

La propuesta encuentra su fundamento en el Decreto LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O., por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado

de Chihuahua, así como en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio "pro-persona" y la obligación del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, lo que se alinea con los principios fundamentales de nuestra Constitución general y local, así como con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, busca cumplir con los principios de paridad de género y no discriminación, lo que asegura una integración equitativa de los órganos jurisdiccionales; tiene como principal objetivo establecer un marco normativo específico que regule los procesos electorales para la selección de personas juzgadoras en el Estado de Chihuahua. Entre sus finalidades destacan: 1. Promover la participación ciudadana en la elección de las y los integrantes del Poder Judicial del Estado, al dotarles de mayor legitimidad; 2. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de selección y evitar posibles conflictos de interés o discrecionalidad en la designación; 3. Fomentar la igualdad de oportunidades y la paridad de género, al asegurar una representación equitativa en los órganos jurisdiccionales, y 4. Establecer mecanismos claros y eficientes para la organización de elecciones, desde la convocatoria hasta la resolución de controversias.

La iniciativa de Ley se sustenta en los principios rectores de la materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Estos principios garantizarán que cada etapa del proceso electoral para elegir personas juzgadoras sea conducida de manera justa y en estricto apego a la normativa aplicable.

Entre los ejes principales de la reforma se encuentran: 1. Rendición de cuentas y democracia judicial, con la incorporación de procesos electorales para la designación de juezas, jueces, magistradas y magistrados; con ello, se fomenta la participación ciudadana y se asegura que las personas titulares de cargos jurisdiccionales cuenten con el respaldo popular y con una evaluación transparente de su idoneidad y trayectoria. 2. Garantía de paridad de género y representatividad que la propuesta incluye con mecanismos que aseguren la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de selección y en el ejercicio de los cargos judiciales, conforme a los principios constitucionales de igualdad sustantiva, y 3. Transparencia y acceso a la información con el refuerzo de las obligaciones de

publicidad y acceso a los procesos internos del Poder Judicial, lo que garantiza que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los criterios y procedimientos que rigen la administración de justicia.

Este nuevo marco normativo, estructurado en doce capítulos, atiende a consolidar un modelo democrático y eficiente para la selección de las personas juzgadoras, ante las exigencias de transparencia, equidad y respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

En su Capítulo Primero establece las bases fundamentales de la ley y define su ámbito de aplicación, así como los principios rectores que guiarán todo el proceso electoral, con énfasis en la observancia de los derechos humanos y la cooperación entre las autoridades. En particular el glosario refiere "Categoría", como la clasificación o agrupación de los cargos judiciales según su materia de competencia, nivel jerárquico y ámbito territorial, según lo dispuesto por la misma Ley y la normatividad aplicable.

En el Capítulo Segundo se detallan los derechos y obligaciones de la ciudadanía en los procesos electorales, al promover la igualdad de oportunidades y la eliminación de la violencia política de género.

En el Capítulo Tercero se especifican las fechas y procedimientos para la realización de elecciones ordinarias y extraordinarias, lo que asegura que los comicios sean organizados de manera eficiente y conforme a la ley.

El Capítulo Cuarto define las competencias y responsabilidades del Instituto Estatal Electoral y otras autoridades involucradas en la organización y supervisión de las elecciones, lo que asegura la imparcialidad y el cumplimiento de los principios democráticos.

El Capítulo Quinto abarca los actos y etapas del proceso electoral, desde su inicio hasta la declaración de validez y la entrega de constancias a las personas electas, lo que garantiza la paridad de género.

El Capítulo Sexto describe los procedimientos preliminares, incluyendo la convocatoria y postulación de candidaturas, lo que asegura la transparencia y accesibilidad en todas las etapas.

El Capítulo Séptimo incluye diversas secciones que detallan los requisitos de elegibilidad, el proceso de convocatoria, el registro de aspirantes, la postulación y la publicación de candidaturas, estructurado de manera clara cada paso del proceso. Este capítulo se compone de cinco secciones relativos a: Sección Primera: De los Requisitos de Elegibilidad; Sección Segunda: De la Convocatoria; Sección Tercera: Del Registro de Aspirantes; Sección Cuarta: De la Postulación de Candidaturas, y Sección Quinta: De la Publicación de Candidaturas.

El Capítulo Octavo regula las campañas electorales, su duración, financiamiento y el acceso igualitario a los medios de comunicación, con promoción de la equidad y la transparencia.

El Capítulo Noveno establece las normas para la documentación y el material electoral necesarios para garantizar un proceso electoral ordenado y seguro.

El Capítulo Décimo define las conductas sancionables, los procedimientos para su investigación y las sanciones aplicables, lo que garantiza la integridad del proceso electoral.

El Capítulo Décimo Primero describe los procedimientos en caso de inelegibilidad de candidatas o candidatos, lo que asegura que las elecciones se mantengan justas y conformes a la ley. Por último, el Capítulo Décimo Segundo detalla los procedimientos para la resolución de recursos e incidentes relacionados con el proceso electoral, lo que asegura una resolución justa y expedita.

En particular, los artículos transitorios establecen los lineamientos para llevar a cabo una elección extraordinaria en el año 2025, en la que se renovarán la totalidad de los cargos del Poder Judicial conforme a un esquema que garantice la transparencia, la equidad y la participación ciudadana.

Se establecen los plazos y procedimientos para la implementación de la ley, incluyendo la preparación de elecciones extraordinarias y la toma de protesta de las personas electas, así como las disposiciones específicas para la implementación y transición hacia el nuevo marco normativo, lo que garantiza un proceso ordenado y transparente. Asimismo, se delinean los pasos a seguir para la transferencia de funciones, recursos y responsabilidades hacia los nuevos órganos creados por esta reforma.

Estos transitorios son esenciales para asegurar una implementación eficaz y sin interrupciones del nuevo marco normativo, al proporcionar claridad y certeza en la transición hacia el nuevo sistema electoral para la elección de personas juzgadoras en el Estado de Chihuahua. La estructura facilitará el entendimiento y cumplimiento de las nuevas disposiciones legales por parte de autoridades y las personas servidoras públicas involucradas. Además, son cruciales para asegurar una implementación ordenada y eficaz de la nueva ley, ya que garantiza la continuidad de funciones, el respeto a los derechos laborales y la transparencia en la transición hacia el nuevo marco normativo.

La evolución del sistema de designación de las personas juzgadoras responde a una demanda social de mayor apertura y democratización de los procesos judiciales. Con esta normativa se busca consolidar un modelo que privilegie el mérito y la competencia, pero que también permita a la ciudadanía involucrarse activamente en la configuración del Poder Judicial. Además, la elección directa coadyuvará a la construcción de un Poder Judicial más inclusivo y sensible a las necesidades de la población, al contribuir en la erradicación de prácticas que puedan vulnerar los derechos de las personas, especialmente en el acceso a la justicia.

La implementación del ordenamiento permitirá construir un Poder Judicial más representativo y legítimo, basado en el voto popular. Con ello se reduce la discrecionalidad en la designación de juezas, jueces, magistradas y magistrados. Además, se garantiza el respeto irrestricto de los derechos humanos en los procesos electorales relacionados con la judicatura, y contribuye a la formación de un sistema judicial más cercano a la ciudadanía y comprometido con sus valores y demandas.

La Ley Electoral para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua, representa un paso histórico en la democratización del Poder Judicial local. Fortalecer el sistema judicial del Estado de Chihuahua mediante un proceso electoral transparente y accesible, al establecer un marco jurídico claro, inclusivo y equitativo para la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces en el estado. Refuerza la transparencia, la participación ciudadana y la equidad de género en el proceso electoral del Poder Judicial, al garantizar que los procedimientos sean accesibles y justos para todas las personas involucradas.

En el contexto de las reformas propuestas para garantizar procesos democráticos, transparentes y equitativos en la designación de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, se integra un marco normativo innovador que abarca aspectos fundamentales del proceso electoral. Con su aprobación, la expedición de la Ley dará cumplimiento a los ideales de transparencia, participación ciudadana y equidad que caracterizan a un Estado democrático de derecho. En estas innovaciones, Chihuahua reafirma su compromiso con la justicia y garantiza un sistema judicial robusto, eficiente y digno de la confianza ciudadana. Una visión a futuro en la que el Poder Judicial se convierta en un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo de nuestro estado.”

IV.- Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en referencia, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades competenciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto.

II.- A fin de lograr un cabal entendimiento del tema que nos ocupa, es menester retomar algunos sucesos y eventos que explican el trascendental momento en que nos encontramos al entrar al escrutinio de la iniciativa que motiva el presente.

El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre de 2024, trajo consigo un nuevo paradigma en cuanto a la integración y designación de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, como de las entidades federativas.

Del régimen transitorio del Decreto citado en el párrafo que antecede, se deben resaltar algunos aspectos como son:

1. Que las entidades federativas cuentan con la obligación constitucional de armonizar su marco jurídico local en un plazo de 180 días, contados a partir del día 16 de septiembre de 2024, ya que, con fundamento en el Artículo Primero Transitorio, el Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, la cual se dio el 15 de septiembre de 2024, por ende, tendríamos hasta el 14 de febrero del 2025 para tal

efecto.

2. Las entidades federativas, para la renovación de los cargos de elección del Poder Judicial Local, pueden establecer los términos y modalidades que considere, pero, éstos deben concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, y en caso de que pretendan hacerlo en el año 2025, tendrán que coincidir con la fecha de las elecciones extraordinarias de ese mismo año, estipuladas para el Poder Judicial de la Federación.

3. En caso de que la Entidad Federativa organice el proceso electoral para el año 2025, no será aplicable, para efectos de dicha organización, lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, mismo que menciona: Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Así pues, en razón de las obligaciones constitucionales que le asigna el multicitado Decreto a las entidades federativas, es que quienes integramos esta Legislatura, el 18 de diciembre del 2024, aprobamos el Decreto 172/2024, por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Estatal, en materia de elección por votación directa de personas juzgadoras e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración del Poder Judicial, a fin de armonizar la legislación de la Entidad, conforme a lo que se ha venido planteando.

Es propio destacar que la reforma, referida en el párrafo próximo anterior y como ya se señaló, fue a la Constitución Política del Estado, misma en la que se establecieron las bases para la elección de personas juzgadoras en la Entidad. Sin embargo, quedaron algunos aspectos que aún requerían regulación específica, mismo que se retoman en la iniciativa que motiva el presente.

III.- La iniciativa en estudio, en los términos en que fue presentada, se compone de un total de 81 artículos, organizados en doce capítulos, de lo que se procederá a hacer una síntesis de sus puntos torales.

o En el Primero, que se denomina "Disposiciones Generales", se establecen las bases fundamentales del ordenamiento,

se define su ámbito de aplicación y se señala el objeto que es regular los procedimientos que deberán observarse en la elección de personas juzgadoras, reglamentando las normas constitucionales relativas a la competencia local en las siguientes materias: organización y calificación de elecciones para personas juzgadoras; derechos, obligaciones y prerrogativas políticas o electorales de la ciudadanía en dichos procesos; funcionamiento y competencia de las autoridades electorales locales en tales elecciones; determinación de las infracciones a la Ley, sujetos de responsabilidad, así como los procesos para la imposición de sanciones administrativas y el sistema de medios de impugnación. Así mismo, se regula lo relativo a la interpretación del cuerpo normativo, principios rectores, cooperación entre autoridades y se integra un glosario que define los principales términos.

o En el Capítulo Segundo que lleva por nombre "De la participación ciudadana en las elecciones", se establecen los derechos y obligaciones de la ciudadanía en los procesos electorales.

o Por lo que respecta al Capítulo Tercero, que se titula "Del Sistema Electoral", se especifican las fechas y procedimientos para la realización de elecciones ordinarias y extraordinarias.

o En cuanto al Capítulo Cuarto que se llama "De la participación de las autoridades electorales", se definen las competencias y responsabilidades del Instituto Estatal Electoral y otras autoridades involucradas en la organización y supervisión de las elecciones. Destaca de su contenido la disposición relativa a que las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo Estatal no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a los procesos electorales objeto de la Ley. Así como también es de mencionarse que se establece, en un artículo en particular, que el Tribunal Estatal Electoral sustanciará y resolverá en forma definitiva e inatacable los medios de impugnación que deriven de los procesos electorales para dichas elecciones.

o En el Capítulo Quinto cuyo título es "Del Proceso Electoral", que se refiere a los actos y etapas del proceso electoral, mismo que también ahí se define, se puede resaltar que se estipula todo lo relativo desde su inicio hasta la declaración de validez y la entrega de constancias a las personas electas. Así pues, en cuanto a dichas etapas se tiene que son: preparación de la elección, convocatoria y postulación de candidaturas, jornada

electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos y entrega de constancias de mayoría y calificación y declaración de validez de la elección.

o Por lo que hace al Capítulo Sexto, que se nombra "De los actos preparatorios de la elección", debe señalarse que en él se describen los procedimientos preliminares, incluyendo la convocatoria y postulación de candidaturas.

o El Capítulo Séptimo, que se denomina "Del Procedimiento de Registro de Candidaturas", contiene varias secciones que son: la primera, donde se establecen los requisitos de elegibilidad; la segunda, que regula la convocatoria, y se señala que ésta deberá contener, al menos, fechas, plazos, cargos a elegir y las etapas del procedimiento que son: registro e inscripción de documentación de las personas aspirantes ante el Comité de Evaluación de cada Poder del Estado, acreditación de elegibilidad de aspirantes por el Comité de Evaluación y calificación de la idoneidad de dichas personas; la tercera, que aborda todo lo relacionado con el registro de aspirantes, como es los datos que deberá contener la solicitud de registro y los documentos que habrá de llevar anexos; y la cuarta, al proceso de postulación de candidaturas y la quinta a la publicación de las candidaturas.

o En cuanto al Capítulo Octavo, cuyo título es "De las campañas electorales", se tiene que, como su nombre lo indica, regula todo lo referente a éstas, su duración, financiamiento y acceso igualitario a los medios de comunicación.

o En el Capítulo Noveno que se denomina "De la documentación y el material electoral", en donde destaca que se establece la información que como mínimo contendrá la boleta electoral, así como que ésta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección conforme a las categorías que ahí mismo se describen.

o Por lo que se refiere al Capítulo Décimo, cuyo nombre es "De las faltas y nulidades electorales y su sanción", en el cual destaca que serán causas de nulidad de una elección las previstas en la Ley Electoral y en la Ley General. Así como se establece que el Tribunal Estatal Electoral deberá declarar la nulidad de la elección cuando se exceda el gasto de campaña; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de lo previsto por la Ley; se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita, públicos y privados y/o se acredite la violencia política grave contra las mujeres

en razón de género, mediante sentencia firme. Otro aspecto que se regula es que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco por ciento y que en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

o En el Capítulo Décimo Primero, que se denomina "De los efectos de la inelegibilidad", se describen los procedimientos a seguir en caso de que se actualice dicho supuesto

o En cuanto al Capítulo Décimo Segundo cuyo título es "De la sustanciación y resolución de los recursos e incidentes", como su nombre lo aproxima, se regula todo lo relativo al tema, haciendo remisiones a otros ordenamientos.

o Por último, el régimen transitorio regula que, por única vez, para el proceso de elección extraordinaria de 2025, los plazos y términos se ajustarán a la reforma constitucional contenida en el Decreto 172/2024, estableciendo que la etapa de preparación iniciará con la sesión que celebre el Consejo del Instituto Estatal, dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del Decreto en estudio. De igual manera, se establecen los plazos y procedimientos para la implementación de la ley, la toma de protesta de las personas electas, así como normas tendientes a la transferencia de funciones, recursos y responsabilidades que originan en razón a los órganos de nueva creación.

IV. Quienes integramos esta Comisión de Dictamen, estamos conscientes de la importancia que reviste el proceso de elección que habrá de llevarse a cabo este año en nuestra Entidad, mismo que es histórico y será un parteaguas en la vida política, jurídica y social de Chihuahua.

Por lo cual, estimamos imprescindible retomar y profundizar en algunos argumentos y razonamientos que aporta la exposición de motivos de la iniciativa en escrutinio.

Señala el iniciador que su propuesta tiene como propósito fundamental fortalecer los principios democráticos en la designación de personas juzgadoras en el Estado de Chihuahua, al promover la participación ciudadana directa, la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos de selección en dichos cargos. Continúa destacando que la demanda por instituciones sólidas y confiables, así como

la implementación de una elección democrática refuerza la legitimidad del Poder Judicial del Estado.

Quienes conformamos esta Dictaminadora coincidimos con el iniciador en que las recientes reformas a la Constitución del Estado sobre el tema en cuestión, ameritan ajustes estructurales, normativos y operativos para implementar el nuevo procedimiento de elección de personas juzgadoras.

Aunado a lo anterior, resulta inexorable mencionar los ejes principales de la reforma que menciona la iniciativa en estudio, mismos que son:

o Rendición de cuentas y democracia judicial, con la incorporación de procesos electorales para la designación de personas juzgadoras; con o cual se fomenta la participación ciudadana y se asegura que las y los titulares de cargos jurisdiccionales cuenten con el respaldo popular y con una evaluación transparente de su idoneidad y trayectoria.

o Garantía de paridad de género y representatividad que la propuesta incluye con mecanismos que aseguren la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de selección y en el ejercicio de los cargos, conforme a los principios de igualdad sustantiva.

o Transparencia y acceso a la información con el refuerzo de las obligaciones de publicidad y acceso a los procesos internos del Poder Judicial, lo que garantiza que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de los criterios y procedimientos que rigen la administración de justicia.

V.- Esta Comisión de Dictamen, al analizar la iniciativa que da origen a este documento, dada la trascendencia del tema y en un afán de efectuar una dinámica inclusiva y plural en el proceso legislativo, es que al haberse recibido varias propuestas y opiniones de integrantes de este órgano, así como de diversas personas legisladoras que manifestaron su interés de participar en los trabajos de redacción de la ley en cuestión, procedió a realizar un estudio integral de las mismas, con el propósito de integrar las que fueran viables, al articulado planteado por el iniciador.

Así las cosas, la propuesta original de la iniciativa fue objeto de varias modificaciones y adiciones que robustecieron su contenido, a fin de obtener un ordenamiento legal que contemple de manera más amplia y acuciosa el procedimiento

de selección de personas juzgadoras que habrá de llevarse a cabo en la Entidad.

Al respecto, se puede destacar que se adicionaron diversas disposiciones relativas al Procedimiento Especial Sancionador, así como a los medios de impugnación, se profundizó en lo relativo al uso de las tecnologías de la información y se definieron algunos conceptos en el glosario.

De igual manera, la denominación del cuerpo normativo se cambió por resultar más específica la propuesta efectuada, para efectos de lo que aborda dicho ordenamiento.

Así pues, una vez realizadas las modificaciones y adiciones a que se ha venido haciendo referencia, es que la propuesta de Decreto que esta Comisión efectúa se compone de un total de 146 artículo, organizados en 16 capítulos, de los cuales se procede a resaltar sus puntos torales.

El Capítulo Primero contiene las disposiciones generales, el Segundo lo relativo a la participación de la ciudadanía en las elecciones, por su parte, el Tercero lo que corresponde al Sistema Electoral, a su vez el Cuarto hace referencia a la participación de las autoridades electorales, el Quinto establece las normas reguladoras del proceso electoral, en cuanto al Sexto se tiene que dispone los actos preparatorios a la elección y el Séptimo regula el procedimiento de registro de candidaturas.

Por su parte, el Octavo se refiere a la propaganda y campañas electorales, el Noveno a la documentación y materia electoral, el Décimo aborda el régimen sancionador electoral, así pues, el Décimo Primero se avoca a los efectos de la inelegibilidad, el Décimo Segundo a los medios de impugnación, el Décimo Tercero a las nulidades y el Décimo Cuarto alude a los incidentes.

VI.- Por los argumentos que han quedado vertidos en estas consideraciones, esta Comisión de Dictamen estima oportuna, viable y necesaria la ley propuesta por el iniciador, con las modificaciones y adiciones que se le efectuaron durante el proceso de escrutinio al interior de este órgano.

Así mismo, se hace constar que no se recibieron opiniones ni comentarios en el buzón legislativo, que se encuentra en el portal electrónico oficial de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente manera:

LEY ELECTORAL REGLAMENTARIA
DE LOS ARTÍCULOS 99, 100, 101,
102 Y 103 DE LA CONSTITUCIÓN
PARA ELEGIR PERSONAS JUZGADORAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, de observancia general en el Estado de Chihuahua y tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, que deberán observarse en la elección de las personas juzgadoras, así como la relación entre el Instituto Nacional y el Instituto Estatal, reglamentando las normas constitucionales relativas a la competencia local en las siguientes materias:

- I. La organización y calificación de las elecciones.
- II. Los derechos, obligaciones y prerrogativas políticas o electorales de la ciudadanía en los procesos electorales.
- III. El funcionamiento y competencia de las autoridades electorales locales en dichos procesos.
- IV. La determinación de las infracciones a esta Ley, sujetos de responsabilidad, así como los procesos para la imposición de sanciones administrativas.
- V. El sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Artículo 2. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, en los términos de la legislación electoral y se deberá promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y los tratados internacionales de los que

el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Artículo 3. En lo no previsto en la presente Ley se aplicará supletoriamente la Ley General, Ley Electoral, Acuerdos y Lineamientos del Instituto Estatal y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral, en lo que resulte aplicable.

Artículo 4. Para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales establecidas por la Constitución local y esta Ley, contarán con la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales; las que están obligadas a proporcionar a los organismos electorales, la información que obre en su poder, las certificaciones de los documentos que existan en sus archivos y el apoyo necesario para practicar las diligencias que le sean demandadas para fines electorales.

Artículo 5. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde, además de al Instituto Estatal, a las candidatas o candidatos a ocupar un cargo de persona juzgadora.

Artículo 6. Las campañas de promoción del voto deberán ajustarse a los acuerdos que emita el Consejo Estatal o, en su caso, el Instituto Nacional

Artículo 7. La aplicación de las normas y procedimientos contenidos en esta Ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, a:

- I. El Instituto Estatal.
- II. El Tribunal Electoral.
- III. Los tres poderes del Estado.

Artículo 8. Las instancias antes enunciadas, deberán garantizar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, en el ejercicio de los derechos político electorales, así como el respeto a los derechos humanos.

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Acto de campaña: Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellas actividades en que las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas a ocupar un cargo de persona juzgadora

durante la etapa de campaña.

II. Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campaña, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura.

III. Aspirante a candidata o candidato: La ciudadana o ciudadano que decide contender con el fin de alcanzar su registro como persona candidata a ocupar un cargo de persona juzgadora.

IV. Campaña electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos y términos establecidos en esta Ley.

V. Comité de Evaluación: Es el órgano integrado en cada uno de los tres poderes del Estado, que desempeñarán su cargo de manera honorífica, responsables de recibir y evaluar los expedientes de las personas aspirantes.

VI. Candidata o candidato: La ciudadana o ciudadano que, con el debido registro pretende acceder a ocupar un cargo de persona juzgadora.

VII. Categoría: Tipo de elección de las personas juzgadoras, diferenciadas por materia y cargo, según lo dispuesto en la presente Ley y la normatividad aplicable.

VIII. Consejo Estatal: El Consejo Estatal del Instituto Estatal.

IX. Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional.

X. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XI. Constitución local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

XII. Distrito Judicial: El Distrito Judicial, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

XIII. Elección Distrital: Elección de juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia.

XIV. Elección Estatal: Elección de magistraturas del Tribunal

de Disciplina Judicial y del Tribunal Superior de Justicia.

XV. Instituto Estatal: El Instituto Estatal Electoral.

XVI. Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral.

XVII. Ley Electoral: La Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

XVIII. Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

XIX. Paridad de género: Se garantiza con la asignación del 50% de mujeres y 50% de hombres en los cargos de personas juzgadoras.

XX. Personas juzgadoras: Las juezas, los jueces, las magistradas y los magistrados del Poder Judicial del Estado, electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía.

XXI. Propaganda electoral: Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difundan las personas candidatas con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada por la libertad de expresión.

XXII. Propaganda gubernamental: Aquella de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social que bajo cualquier modalidad de comunicación social difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, con motivo de sus funciones.

XXIII. Tribunal Electoral: El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

XXIV. Violencia Política de Género: Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose

de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LAS ELECCIONES

Artículo 10. Los derechos y obligaciones de la ciudadanía en los procesos para elegir a las personas juzgadoras, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para acceder a dichos cargos, el registro de electores y la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, atenderán a las disposiciones contenidas en la Constitución General, los tratados internacionales, la Constitución local, la Ley General, la Ley Electoral, la presente Ley y demás relativas en la materia.

Artículo 11. La inviolabilidad del voto, las calidades del mismo, los actos que generen presión o coacción al electorado y el derecho a ser votada o votado para los cargos a que se refiere esta Ley se regirán por las disposiciones contenidas en la Constitución General, los tratados internacionales, la Constitución local, la Ley General, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Electoral, la presente Ley y demás relativas de la materia.

Artículo 12. La ciudadanía podrá ejercer su derecho como persona observadora electoral en términos de lo dispuesto en la Ley Electoral y conforme a los acuerdos que al efecto emita el Consejo Estatal o, en su caso, el Instituto Nacional.

CAPÍTULO TERCERO DEL SISTEMA ELECTORAL

Artículo 13. El proceso para elegir a las personas juzgadoras deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

Artículo 14. Cuando se declare la nulidad de una elección o la persona electa resultare inelegible, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral, en los términos de la Ley Electoral.

Artículo 15. La convocatoria para la realización de una elección extraordinaria no podrá restringir los derechos previstos en la presente Ley, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

Artículo 16. El Consejo Estatal podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley, para adecuar el proceso electoral a la fecha de la convocatoria a que alude el artículo anterior.

En caso de ausencia de disposición expresa sobre la elección extraordinaria, se aplicará supletoriamente lo referente a las elecciones ordinarias.

CAPÍTULO CUARTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

Artículo 17. El Instituto Estatal es la autoridad responsable de la organización, preparación, desarrollo, vigilancia y cómputo del proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras, con excepción de las que la Ley disponga para otra autoridad competente.

Artículo 18. El Consejo Estatal, para efectos de la presente Ley, se integrará por:

- I. Consejerías electorales, con derecho a voz y voto.
- II. Titular de la Secretaría Ejecutiva, con derecho a voz.

A las sesiones del Consejo Estatal se podrá invitar a la persona titular de la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional en el Estado, quien contará con voz.

Las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo Estatal no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a los procesos electorales objeto de esta Ley.

Artículo 19. El Instituto Estatal tendrá facultades para emitir los reglamentos, lineamientos, acuerdos y convenios necesarios para la debida regulación de la organización de la elección de las personas juzgadoras.

Artículo 20. El Tribunal Electoral sustanciará y resolverá en forma definitiva e inatacable los medios de impugnación que deriven de los procesos electorales para elegir a las personas juzgadoras.

CAPÍTULO QUINTO DEL PROCESO ELECTORAL

Artículo 21. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución General, la Constitución local, la Ley General y la Ley Electoral,

realizados por los poderes del Estado, las autoridades electorales y la ciudadanía, que tiene por objeto la elección periódica de personas juzgadoras, el que se respetará el principio de paridad de género, en la asignación de dichos cargos.

Artículo 22. El proceso electoral ordinario para la elección de personas juzgadoras iniciará con la primera sesión que el Consejo Estatal celebre en los primeros siete días del mes de octubre del año anterior a la elección, y concluye con la etapa de declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría y validez; o en su caso, con la resolución que emita en última instancia el Tribunal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 23. El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

I. Preparación de la elección: inicia con la primera sesión que el Consejo Estatal celebre en los primeros siete días del mes de octubre del año anterior a la elección, y concluye al iniciarse la jornada electoral.

II. Convocatoria y postulación de candidaturas: inicia con la publicación de la convocatoria que emita el Congreso del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 101, fracción I, de la Constitución Local y concluye con la remisión por dicho órgano legislativo del listado de candidaturas al Instituto Estatal.

III. Jornada electoral: inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio del año que corresponda y concluye con la clausura de casillas.

IV. Cómputos y sumatoria: inicia con la remisión de la documentación y los expedientes electorales de las casillas al Instituto Estatal y concluye con los cómputos y sumatoria de las elecciones que realice el Consejo Estatal y en su caso, los órganos desconcentrados del Instituto Estatal designados para tal efecto.

V. Asignación de cargos y entrega de constancias de mayoría: inicia con la identificación que realiza el Instituto Estatal de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia y respetando el principio de paridad de género de manera alternada entre mujeres y hombres, y

concluye con la entrega por dicho Instituto de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva.

Las asignaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán a quien haya obtenido el mayor número de votos al primer cargo vacante, según el orden que obre en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracción I de la Constitución local, y así de manera consecutiva en orden descendente, en cada materia y Distrito Judicial.

VI. Calificación y declaración de validez de la elección, inicia con la remisión de resultados que realice el Instituto Estatal al Tribunal Electoral y concluye al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de las elecciones respectivas o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

Se deberá observar el principio de paridad de género para la elección de personas juzgadoras; así, en caso de que no se cumpla con este principio, se podrán realizar los ajustes para garantizarla, de forma que cuando menos el 50% del total de los cargos de cada una de las categorías corresponda a cada género.

Artículo 24. La organización de la jornada electoral para elegir a las personas juzgadoras estará a cargo del Instituto Estatal en el ámbito de su competencia, el cual tendrá bajo su responsabilidad:

I. Contratar al personal temporal necesario para realizar las actividades atinentes a la organización y desarrollo de la elección, con base en la disponibilidad presupuestal.

II. Aprobar el modelo de la boleta, documentación y materiales electorales, así como su elaboración, recepción y resguardo, de acuerdo con la normativa aplicable.

III. Integrar y distribuir los paquetes electorales a las personas que conforman las mesas directivas de casilla.

IV. Registrar a las personas observadoras electorales, conforme al procedimiento respectivo.

V. Aprobar el lugar destinado para el resguardo de paquetes electorales.

VI. Organizar y desarrollar la jornada electoral.

VII. Organizar y desarrollar, en su caso, foros de debate entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social puedan brindar dichos espacios de manera gratuita, vigilando que la participación sea en condiciones de equidad.

VIII. Determinar los topes máximos de gastos personales de campaña aplicables para cada candidatura.

IX. Emitir los acuerdos necesarios para coadyuvar en difusión equitativa de propuestas de personas candidatas y se promoverá la participación ciudadana en el proceso electoral.

X. Instalar, en su caso, Asambleas Municipales y Distritales, Oficinas Regionales u otros órganos desconcentrados que determine el Consejo Estatal, que coadyuven en el desarrollo del proceso electoral.

XI. Emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones establecidas en la Ley, así como aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional, así como ejercer, en su caso, las facultades que éste delegue al Instituto Estatal.

XII. Efectuar el cómputo de las elecciones, a través del Consejo Estatal y los órganos desconcentrados que al efecto se designen.

XIII. Emitir las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal aplicables al proceso electoral.

XIV. Las demás necesarias que determine el Consejo Estatal para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del proceso electoral y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Artículo 25. En lo conducente y con las salvedades a que se refiere esta Ley, los procedimientos para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, la documentación y el material electoral, así como la jornada electoral y actos posteriores, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley General y en la Ley Electoral.

Artículo 26. El Instituto Estatal efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados, entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de

votos y asignará los cargos entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género alternando entre mujeres y hombres.

Artículo 27. El procedimiento de escrutinio y cómputo de la elección de personas juzgadoras se desarrollará, en cada etapa, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y en su caso, los acuerdos que emita el Consejo Estatal.

Artículo 28. El Instituto Estatal declarará la validez de la elección y enviará sus resultados al Tribunal Electoral, que resolverá las impugnaciones a más tardar el treinta y uno de julio.

El Congreso del Estado, el día que instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, tomará protesta a las personas electas.

CAPÍTULO SEXTO DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN

Artículo 29. Las personas juzgadoras serán elegidas de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía, el día que se realicen las elecciones ordinarias del año que corresponda, conforme al siguiente procedimiento:

I. El Congreso del Estado publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas en los términos de esta Ley.

II. Los poderes del Estado postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo conforme a la Constitución local y esta Ley.

III. Cada poder postulará hasta tres personas aspirantes, tratándose de magistradas o magistrados; y hasta dos, tratándose de juezas y jueces; lo anterior, conforme a lo siguiente: el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular; el Poder Legislativo, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial, por conducto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.

IV. El Congreso del Estado recibirá las postulaciones y las remitirá al Instituto Estatal.

**CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO
DE CANDIDATURAS**

**SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 30. Son elegibles para el cargo de persona juzgadora, las ciudadanas o ciudadanos que cumplan con requisitos establecidos en la Constitución General, la Constitucional local y la Ley.

Artículo 31. Concluido el término de registro, cada Comité de Evaluación determinará su procedimiento de sustitución de personas aspirantes, en caso de ser necesario.

En caso de fallecimiento, incapacidad, inhabilitación o declinación de alguna de las candidaturas, el Poder del Estado postulante informará al Congreso del Estado la sustitución que haya realizado el Comité de Evaluación correspondiente, para que haga del conocimiento al Instituto Estatal, observando el procedimiento de insaculación pública sobre el listado de las personas mejor evaluadas que no fueron seleccionadas para la candidatura del cargo que se trate.

Artículo 32. El Congreso del Estado informará de forma inmediata al Instituto Electoral de la sustitución de candidaturas que realicen los poderes del Estado, en su caso.

Artículo 33. La modificación a las boletas electorales por sustitución, solo se podrá realizar hasta antes del inicio de su producción, conforme al programa de producción y documentación electoral que apruebe el Consejo Estatal.

**SECCIÓN SEGUNDA
DE LA CONVOCATORIA DEL REGISTRO
DE CANDIDATURAS**

Artículo 34. El Congreso del Estado publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a ocupar un cargo como persona juzgadora, dentro de los treinta días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.

Artículo 35. La convocatoria contendrá, al menos, fechas, plazos, los cargos a elegir, los requisitos de elegibilidad y las etapas siguientes:

I. Registro e inscripción de documentación de las personas

aspirantes ante el Comité de Evaluación de cada Poder del Estado.

II. Acreditación de elegibilidad de aspirantes por el Comité de Evaluación.

III. Calificación de la idoneidad de las personas aspirantes por el Comité de Evaluación.

Artículo 36. En todo caso, los plazos a que se refiere el artículo anterior serán improrrogables.

**SECCIÓN TERCERA
DEL REGISTRO DE ASPIRANTES**

Artículo 37. Los plazos para presentar la solicitud de registro de candidaturas durante el año de la elección serán los que contenga la convocatoria a que se refiere el artículo 35 de esta Ley.

Artículo 38. La solicitud de registro de aspirantes deberá contener los siguientes datos:

I. Nombre completo, y, en su caso el sobrenombre.

II. Lugar y fecha de nacimiento.

III. Ocupación, domicilio y tiempo de residencia en el mismo.

IV. Clave de la credencial para votar.

V. Cargo para el que se le postula.

VI. Las personas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de que se cumple con lo establecido por la Constitución local, en materia de reelección.

Artículo 39. La solicitud de registro se deberá acompañar de los documentos siguientes:

I. Copia del acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana por nacimiento.

II. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente.

III. Título que acredite que la persona aspirante cuenta con Licenciatura en Derecho.

IV. Certificado de estudios o de historial académico de la Licenciatura que contengan las calificaciones obtenidas por grado y materia.

V. Documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional de la misma, de cuando menos tres años.

VI. Constancia que acredite que la persona aspirante residió en el Estado durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria respectiva.

VII. Carta bajo protesta de decir verdad de que se goza de buena reputación, que no ha sido titular de una Secretaría de Estado Federal o local, de la Fiscalía General de la República o local, Senadora o Senador, Diputada o Diputado Federal o local, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna Entidad Federativa, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva; no ubicarse en las hipótesis previstas en el artículo 38 de la Constitución General.

VIII. Un ensayo de tres cuartillas, justificando los motivos de la postulación.

IX. Cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden la idoneidad para desempeñar el cargo.

X. Constancia que acredite la no inscripción en el Padrón del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua.

XI. Constancia de no inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

XII. Constancia que acredite que no se le ha inhabilitado en el servicio público, con la validación respectiva.

Artículo 40. Los Comités de Evaluación de los poderes del Estado, podrán implementar los sistemas y plataformas digitales que estime necesarias para efectos de lo dispuesto en esta sección.

Artículo 41. Los poderes del Estado postularán el número de candidaturas que corresponda en cada caso. Al efecto, establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en la Constitución local y en las leyes.

Artículo 42. El Órgano de Administración del Poder Judicial hará del conocimiento del Congreso del Estado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el Distrito Judicial respectivo y demás información que requiera, dentro de los veinte días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.

De igual forma, al cierre de la convocatoria deberá enviar el listado que contenga los nombres de las personas juzgadoras que desean contender, las que declinan su participación o quienes participan por otro cargo diverso, ya sea en el Poder Judicial Estatal o en la elección del Federal.

Artículo 43. Recibida la información a que se refiere el artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, el Congreso del Estado lo hará del conocimiento de los otros dos poderes del Estado, así como del Instituto Estatal y les remitirá una copia certificada del mismo.

Artículo 44. Para la evaluación y selección de sus postulaciones, cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Artículo 45. Recibida una solicitud de registro, ante cualquiera de los tres poderes del Estado, el Comité de Evaluación correspondiente verificará que se cumplió con todos los requisitos señalados en la legislación aplicable.

Los comités de evaluación publicarán la lista de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad e idoneidad. Las candidaturas que hayan sido rechazadas podrán impugnar esa decisión ante el Tribunal

SECCIÓN CUARTA
DE LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
E INSPECCIÓN

Electoral, dentro del plazo y conforme al procedimiento que determine la Ley y los acuerdos generales en la materia. Las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo que permita a las personas aspirantes participar en la evaluación de idoneidad en caso de que su impugnación resulte fundada.

Artículo 46. De no cumplir con los requisitos se tendrá por no presentada la solicitud de registro.

Artículo 47. Los comités de evaluación integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de juezas y jueces. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género.

Artículo 48. Una vez que se depure el listado a que se refiere el artículo anterior, cada Comité de Evaluación identificará, por categoría, el cargo sujeto a elección, de conformidad con el informe rendido por el Órgano de Administración del Poder Judicial.

Artículo 49. Cada Comité de Evaluación ajustará los listados, los remitirá a la autoridad que represente a cada Poder del Estado para su aprobación, en su caso, y envió al Congreso del Estado.

El Congreso del Estado una vez que reciba los listados, verificará de acuerdo a la información proporcionada por el Órgano de Administración del Poder Judicial que las personas juzgadoras que declinen su participación, que participen por un cargo diverso al que ocupan en el Poder Judicial Estatal o que participen en la elección del Poder Judicial Federal, no se encuentren en el listado que se remita al Instituto Estatal.

Artículo 50. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes del Estado, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente.

SECCIÓN QUINTA DE LA PUBLICACIÓN DE CANDIDATURAS

Artículo 51. El Congreso del Estado recibirá las postulaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, posteriormente remitirá los listados de los tres poderes al Instituto Estatal, a más tardar

el doce de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que éste organice el proceso electoral.

Artículo 52. En caso de que alguno de los poderes del Estado, no envíe las postulaciones, no será motivo de cancelación o diferimiento de la elección.

Artículo 53. Una vez recibidos los listados de candidaturas, la Presidencia del Instituto Estatal deberá solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

CAPÍTULO OCTAVO DE LA PROPAGANDA Y CAMPAÑAS ELECTORALES

Artículo 54. Las campañas electorales a que se refiere esta Ley tendrán una duración de sesenta días.

Artículo 55. En ningún caso habrá etapa de precampaña.

Las personas candidatas no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las campañas, acatando en todo momento los términos de la convocatoria respectiva.

Artículo 56. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General.

Artículo 57. Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la Ley General y determine el Consejo General; y podrán, además, participar en entrevistas de carácter noticioso, foros de debate organizados por el Instituto Estatal o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social, en condiciones de equidad.

Artículo 58. Para todos los cargos de elección de personas juzgadoras, estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio o televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidaturas.

Las personas candidatas podrán erogar recursos con la

finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos, mismos que no podrán considerarse como financiamiento privado.

Los topes de gastos personales, por cada persona candidata, serán determinados por el Consejo Estatal en función del tipo de elección que se trate y no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones.

Artículo 59. La difusión de propaganda electoral impresa, se hará en papel, que deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, atendiendo el periodo legal de las campañas y deberá suspenderse o retirarse tres días antes de la jornada electoral.

La propaganda impresa de las candidatas y candidatos podrá contenerse en papel, trípticos y materiales análogos, identificando la propuesta y los perfiles.

La propaganda podrá circularse de mano en mano entre las y los ciudadanos y a través de medios electrónicos.

Está prohibida la utilización de recursos provenientes de los partidos políticos, además de hacer alusión a siglas, emblemas o denominaciones de estos y símbolos religiosos.

El Instituto Estatal podrá generar un sistema de difusión en su página oficial para que la ciudadanía pueda conocer sobre el proceso electoral y la información de cada una de las candidaturas.

En las actividades que realice el Instituto Estatal para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral, se privilegiará el uso de medios electrónicos y periódicos de mayor circulación y cobertura en el Estado.

Artículo 60. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las candidaturas a cargos de personas juzgadoras podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables.

Artículo 61. Queda estrictamente prohibida la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, conductas que se presumirán como indicio de presión al electorado para obtener su voto. Estas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y demás aplicables.

Artículo 62. Sólo se permitirá la difusión de candidaturas de personas juzgadoras mediante uso de redes sociales o medios digitales para su promoción, siempre y cuando dichas candidaturas no realicen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos.

Artículo 63. Las personas físicas o morales que realicen encuestas o sondeos de opinión en el marco del proceso de elección de los cargos de personas juzgadoras deberán observar las reglas, lineamientos y criterios que para tal efecto emita el Instituto Nacional y el Instituto Estatal.

Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.

Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar ante el Consejo Estatal un informe que señale al menos la metodología, resultados obtenidos, el desglose de los recursos aplicados y costos, así como identificar a las personas responsables de su realización.

Queda prohibida la contratación y difusión de encuestas, por parte de personas candidatas, por sí o por interpósita persona. La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas por el Instituto Estatal en su página de Internet.

Artículo 64. En todo caso se deberán aplicar los reglamentos, lineamientos y acuerdos generales, que en su caso emitan el Consejo General y Consejo Estatal en materia de propaganda, campañas electorales, encuestas y sondeos de opinión.

**CAPÍTULO NOVENO
DE LA DOCUMENTACIÓN Y
EL MATERIAL ELECTORAL**

Artículo 65. El Consejo Estatal aprobará el modelo de las boletas electorales, documentación y materiales del proceso electoral, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes para la emisión del voto.

El Instituto Estatal será responsable de la producción y distribución de la documentación y materiales electorales que se emplearán en el proceso.

Artículo 66. La boleta contendrá, por lo menos, la siguiente información:

- I. Cargo para el que se postula.
- II. Circunscripción Estatal o Distrito Judicial, según corresponda.
- III. Especialidad por materia a la que se postula.
- IV. Nombre completo de las personas candidatas, numerados y distribuidos por orden alfabético y progresivo, distinguiendo la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a renovar. Las boletas podrán incluir, además, el sobrenombre con el que se conoce públicamente a las personas candidatas.
- V. Firmas impresas de las personas titulares de la Presidencia del Consejo Estatal y de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal.

Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La información que contenga el talón corresponderá a la Entidad Federativa y Distrito Judicial. El número de folio será progresivo.

Artículo 67. La boleta garantizará que el electorado asiente la candidatura de su elección conforme a las siguientes categorías:

- I. Para magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia se podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres, por cada materia según corresponda.
- II. Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres.
- III. Para juezas y jueces se podrán elegir, hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres por cada materia y Distrito Judicial, según corresponda.

CAPÍTULO DÉCIMO
DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS SUJETOS, CONDUCTAS
SANCIONABLES Y SANCIONES

Artículo 68. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

- I. Los partidos políticos.
- II. Las agrupaciones políticas.
- III. Las personas aspirantes y candidatas a un cargo de elección.
- IV. Las ciudadanas y ciudadanos, o cualquier persona física o moral.
- V. Las personas observadoras electorales o las organizaciones de observadores electorales.
- VI. Las autoridades o las personas en el servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público.
- VII. Las notarias y notarios públicos.
- VIII. Las personas extranjeras.
- IX. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes.
- X. Los ministerios de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.
- XI. Quien resulte con obligación en los términos de la presente Ley.

Artículo 69. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de este, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo anterior de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las conductas siguientes:

I. Ocultar información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades.

II. Ocultar la convocatoria para el registro de candidaturas, o información relacionada con esta, con la finalidad de impedir su participación.

III. Proporcionar información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro.

IV. Obstaculizar su campaña, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.

V. Cualquier otra acción que lesione o dañe su dignidad, integridad o libertad en el ejercicio de sus derechos político electorales.

VI. Alguna de las contenidas en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 70. Constituyen infracciones de los partidos políticos, agrupaciones políticas, personas en el servicio público y poderes de los estados a la presente Ley:

I. La realización de actos de campaña a favor de las personas aspirantes y, en su caso, candidaturas.

II. La difusión de propaganda electoral que calumnien a las personas aspirantes y, en su caso, a las candidaturas.

III. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión a favor de las personas aspirantes, y en su caso, candidaturas.

IV. Otorgar aportaciones económicas o en especie a una persona aspirante y en su caso, candidatura.

V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y en lo que resulte aplicable, las de la Ley Electoral.

Artículo 71. Constituyen infracciones de las personas aspirantes o candidatas a la presente Ley:

I. La realización de actos anticipados de campaña.

II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de otra persona, agrupación, ente público, o personas servidoras públicas.

III. No presentar el informe de gastos personales de campaña.

IV. Exceder el tope de gastos personales de campaña.

V. La difusión de propaganda política electoral en periodos no permitidos.

VI. La difusión de propaganda política electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas o instituciones.

VII. La difusión de propaganda electoral a través de medios no permitidos por la ley.

VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley;

Artículo 72. Constituyen infracciones de las ciudadanas o ciudadanos o, en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Nacional o por el Instituto Estatal, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con las personas aspirantes o candidatas a cargos de elección popular.

II. Contratar o difundir propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía a favor o en contra de candidaturas registradas.

III. La promoción de denuncias frívolas.

IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 73. Constituyen infracciones de las personas observadoras electorales, y de las organizaciones con el mismo propósito, a la presente Ley:

I. El incumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones establecidas en el artículo 4, inciso 5), inciso e) de la Ley Electoral.

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 74. Constituyen infracciones de las notarias o notarios públicos a la presente Ley, el incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la jornada electoral y de atender las solicitudes que les hagan las autoridades electorales, las personas funcionarias de casilla, las ciudadanas y ciudadanos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Artículo 75. Constituyen infracciones de las personas extranjeras a la presente Ley, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución General y las leyes aplicables.

Artículo 76. Constituyen infracciones de los ministerios de culto, asociaciones iglesias o agrupaciones de cualquier religión, a la presente Ley:

I. La inducción a la abstención, a votar por una candidata o candidato, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación.

II. Realizar o promover aportaciones económicas a un aspirante o candidata o candidato a cargo de elección popular.

III. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 77.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme lo siguiente:

I. Respecto de los partidos políticos:

a) Amonestación pública.

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta.

c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución General y de la presente Ley, con la cancelación de su registro como partido político.

II. Respecto de las agrupaciones políticas estatales:

a) Con amonestación pública.

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad

de la falta.

c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a seis meses.

III. Respecto de las personas aspirantes y candidaturas a cargos de personas juzgadoras:

a) Con amonestación pública.

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta.

c) Con la pérdida del derecho de la persona aspirante infractora a ser registrada como persona candidata o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.

IV. Respecto de las ciudadanas y ciudadanos, o cualquier persona física o moral:

i. Con amonestación pública.

ii. Respecto de las personas físicas con multa de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley.

iii. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley.

iv. Con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigentes, en el caso de las demás conductas previstas como infracción.

V. Respecto de personas observadoras electorales u organizaciones de observación electoral:

a) Con amonestación pública.

b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como personas observadoras electorales y la inhabilitación para acreditarlas como tales en al menos dos procesos electorales locales.

c) Con multa de hasta doscientas veces el valor diario de

la Unidad de Medida y Actualización vigente, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan las personas observadoras electorales.

VI. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto Estatal, se dará vista a la autoridad con superioridad jerárquica y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, o las denuncias o querellas ante la agencia del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 78. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Capítulo, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él.

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

III. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución.

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio

VII. derivado del incumplimiento de obligaciones.

Se considerará reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal.

Las multas deberán ser pagadas en el Instituto Estatal; si la persona infractora no cumple con su obligación, el órgano dará

vista a las autoridades competentes a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.

Los ingresos de las multas aplicadas serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua.

SECCIÓN SEGUNDA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

Artículo 79. Toda persona con interés jurídico podrá acudir en denuncia por la vía del Procedimiento Especial Sancionador ante el Instituto Estatal, cuando considere que alguno de los sujetos regulados en esta Ley haya incurrido en violaciones a la misma.

Artículo 80. El trámite y sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador que establece esta Ley, se regirá por las normas previstas en la Ley Electoral.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LOS EFECTOS DE LA INELEGIBILIDAD

Artículo 81. Tratándose de la inelegibilidad de la candidata o candidato se estará a lo siguiente:

I. Si se trata de la persona que obtuvo el mayor número de votos y existen varias candidatas o candidatos en la misma categoría, ocupará su lugar la persona que haya obtenido en segundo lugar el más alto número de votación válida obtenida.

En el supuesto del párrafo anterior, si la candidata o candidato que obtuvo el segundo lugar también resultar inelegible, ocupará su lugar el tercer lugar y así sucesivamente.

II. Si se trata de todas las candidatas o candidatos en la misma categoría, se realizará una elección extraordinaria, de acuerdo con lo ordenado por esta Ley.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 82. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

I. Que todos los actos y resoluciones de las autoridades de los poderes del Estado, involucradas, así como de las autoridades electorales en el proceso electoral, se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad.

II. La definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral para la elección de personas juzgadoras.

Artículo 83. El sistema de medios de impugnación se integra por:

I. El juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía.

II. El juicio de inconformidad.

III. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

Artículo 84. Corresponde al Tribunal Electoral resolver los medios de impugnación previstos en la presente Ley, en la forma y términos establecidos por este ordenamiento y por los acuerdos generales que en aplicación de la misma dicte dicho órgano.

Artículo 85. Las autoridades federales, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como la ciudadanía, partidos políticos, candidaturas, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del presente ordenamiento.

**SECCIÓN PRIMERA
DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA**

Artículo 86. El juicio para la protección de los derechos político electorales procederá cuando la ciudadanía en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votado en las elecciones de personas juzgadoras, sea con base en un interés jurídico o legítimo.

Asimismo, será procedente, cuando se considere que se

actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General.

Artículo 87. Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, serán definitivas e inatacables y podrán tener los efectos:

I. Confirmar el acto o resolución impugnada.

II. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir a la parte promovente en el uso y goce del derecho político electoral que le haya sido violado.

En su caso, declarar la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, y establecer las medidas de reparación integral.

**SECCIÓN SEGUNDA
DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD**

Artículo 88. Durante el proceso electoral el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, en los términos señalados por esta ley. Los medios de impugnación no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado.

Artículo 89. Son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en los términos, los siguientes:

I. Los resultados consignados en las actas de cómputo, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas.

II. Por nulidad de la elección.

III. La falta de elegibilidad de la candidatura que resulte triunfadora.

Artículo 90. Además de los requisitos generales establecidos en esta ley, el escrito por el cual se promueva el juicio de inconformidad deberá cumplir con los siguientes:

I. Señalar la elección que se impugna, manifestando expresamente si se objetan los resultados del cómputo, la

declaración de validez de la elección y por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas.

II. La mención individualizada del acta de cómputo que se impugna.

III. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso, la causal que se invoque para cada una de ellas y los motivos por los que se considera que se actualizan las causales de nulidad invocadas.

IV. La conexidad que, en su caso, guarde con otras impugnaciones.

SECCIÓN TERCERA DE LOS PLAZOS Y DE LAS SENTENCIAS

Artículo 91. La demanda del juicio de inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que se notifique a la parte interesada el resultado del cómputo relacionado con la elección impugnada.

Artículo 92. Las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de inconformidad podrán tener los efectos siguientes:

I. Confirmar el acto impugnado.

II. Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas y, modificar en consecuencia, el acta de cómputo respectiva.

III. Revocar la constancia expedida en favor de una candidatura y otorgarla a la candidatura que resulte ganadora como resultado de la anulación de la votación emitida en una o varias casillas en uno o, en su caso, la elección Estatal o Distrital; y modificar, en consecuencia, las actas de cómputo respectivas, según la elección que corresponda.

IV. Declarar la nulidad de la elección y, en consecuencia, revocar las constancias expedidas.

Artículo 93. Los juicios de inconformidad deberán quedar resueltos a más tardar el día treinta y uno de julio del año de la elección.

Artículo 94. Las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad, serán definitivas e inatacables.

SECCIÓN CUARTA DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

Artículo 95. Procede el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador, en contra:

I. De la concesión o negativa de medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador.

II. Del acuerdo de desechamiento que emita el Instituto Estatal a una denuncia.

III. De los actos dentro del procedimiento que produzcan un daño material irreparable en la sentencia definitiva.

Artículo 96. El plazo para promover el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador será de dos días, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

Artículo 97. El plazo para la publicitación del medio de impugnación por parte de la autoridad responsable, será de cuarenta y ocho horas, dentro del cual podrán comparecer las personas terceras interesadas.

Artículo 98. El presente recurso se resolverá dentro de los tres días siguientes a la admisión del medio de impugnación.

SECCIÓN QUINTA DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 99. Las disposiciones de la presente sección rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos.

Artículo 100. En ningún caso la interposición de los medios de impugnación previstos en esta Ley producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada.

Los medios de impugnación establecidos en la presente Ley serán de estricto derecho.

Artículo 101. El Tribunal Electoral, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción.

En ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplicación de ordenamiento o leyes locales sobre la materia electoral contrarias a la propia Constitución General.

Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio.

SECCIÓN SEXTA DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS

Artículo 102. Durante los procesos electorales para la elección, todos los días y horas serán hábiles.

Artículo 103. Cuando los plazos estén señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas, y cuando estén señalados por horas se contarán de momento a momento, en el entendido de que su vencimiento será a la misma hora del inicio de su cómputo del día en que se contabilice el número de horas respectivo.

Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de la legislación aplicable.

Artículo 104. Los medios de impugnación previstos en esta Ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la Ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

SECCIÓN SÉPTIMA DE LOS REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 105. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, y deberán cumplir con los requisitos siguientes:

- I. Hacer constar el nombre de la parte actora.
- II. Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Chihuahua y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir.
- III. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la parte promovente.
- IV. Identificar el acto o resolución impugnado y a la autoridad

responsable del mismo.

V. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución General.

VI. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente Ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando la parte promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.

VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa de la parte promovente.

Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI del párrafo anterior.

Artículo 106. Cuando la parte promovente incumpla los requisitos establecidos en las fracciones III, IV y V del artículo anterior, o estos sean poco claros, la Magistratura Electoral instructora formulará prevención para el efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación respectiva, se subsane la irregularidad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda.

En el caso de que la parte promovente no señale domicilio procesal en el lugar del juicio, todas las notificaciones, aún las de carácter personal, le serán realizadas por estrados.

SECCIÓN OCTAVA DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO

Artículo 107. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes cuando:

- I. No se presenten por escrito ante la autoridad responsable del acto impugnado.
- II. No se haga constar el nombre de la parte actora o la firma autógrafa de ésta.

III. Cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado solo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

IV. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de la parte actora; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta Ley.

V. Que la parte promovente carezca de legitimación en los términos de la presente Ley.

VI. Se presenten fuera de los plazos o no reúnen los requisitos especiales señalados en este ordenamiento.

VII. No se hayan agotado las instancias previas para combatir los actos o resoluciones electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado.

VIII. En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección.

IX. El medio de impugnación resulte evidentemente frívolo.

X. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General, o de esta Ley.

Artículo 108. Procede el sobreseimiento cuando:

I. La parte promovente se desista expresamente por escrito, y ratifique el mismo.

II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia.

III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley.

IV. La parte promovente agraviada fallezca o sea suspendida o privada de sus derechos político electorales.

Artículo 109. Cuando se actualice alguno de los supuestos a que se refieren los dos artículos anteriores, la Magistratura Electoral propondrá la improcedencia o sobreseimiento al Pleno.

SECCIÓN NOVENA DE LAS PARTES

Artículo 110. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes:

I. La parte actora, que será quien estando legitimada lo presente por sí misma o, en su caso, a través de representante, en los términos de este ordenamiento.

II. La autoridad responsable que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna.

III. La persona tercera interesada, que es la o el ciudadano o la candidatura, según corresponda, con un interés jurídico en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora.

Artículo 111. La parte actora o tercera interesada podrá autorizar por escrito a licenciada o licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de quien autorice, salvo la presentación de medios de impugnación o recursos. Quien cuente con la autorización no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este artículo.

SECCIÓN DÉCIMA DE LAS PRUEBAS

Artículo 112. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Se podrán invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por las partes.

En el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.

Artículo 113. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta Ley, se estará a lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA DEL TRÁMITE

Artículo 114. La autoridad que reciba un medio de impugnación, en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá:

I. Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al Tribunal Electoral, precisando: parte actora, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción, anexando copia del escrito de demanda respectivo.

II. Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de cuarenta y ocho horas se fije en los estrados respectivos de la autoridad responsable.

Artículo 115. Cuando algún órgano del Instituto Estatal u otra autoridad involucrada en el proceso electoral reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano de dicho Instituto o autoridad responsable para su trámite.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren el párrafo anterior, será sancionado en los términos previstos en el presente ordenamiento y en las leyes aplicables.

Artículo 116. Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de publicitación del medio de impugnación, las personas terceras interesadas podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Presentarse ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnado.

II. Hacer constar el nombre de la persona tercera interesada.

III. Señalar domicilio para recibir notificaciones, en la ciudad de Chihuahua.

IV. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería de quien comparece.

V. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas de quien comparece.

VI. Ofrecer y aportar las pruebas; mencionar en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban requerirse, cuando quien promueve justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas.

VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa de quien comparece.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones I, II, IV, V y VII del párrafo anterior, será causa para tener por no presentado el escrito correspondiente. Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI del párrafo anterior.

Artículo 117. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo de publicitación del medio de impugnación, la autoridad responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al Tribunal Electoral, lo siguiente:

I. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo.

II. La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder.

III. En su caso, los escritos de las personas terceras interesadas, las pruebas y la demás documentación que se haya acompañado a los mismos.

IV. En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas de cómputo, hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieren presentado, en los términos de ley.

V. En caso de que la parte promovente sea una persona con candidatura registrada, el expediente de registro respectivo.

VI. El informe circunstanciado.

VII. Cualquier otro documento que estime necesario para la

resolución del asunto.

Artículo 118. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad responsable, por lo menos deberá contener:

I. En su caso, la mención de si quien promueve o comparece, tienen reconocida su personería.

II. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado.

III. La firma del funcionario que lo rinde.

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA DE LA SUSTANCIACIÓN

Artículo 119. Recibida la documentación a que se refieren los dos artículos anteriores, el Tribunal Electoral realizará los actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación, de acuerdo con lo siguiente:

I. La presidencia del Tribunal turnará de inmediato el expediente recibido a una Magistratura Electoral, quien tendrá la obligación de revisar que el escrito del medio de impugnación y demás documentación reúna todos los requisitos de ley.

II. La Magistratura Electoral propondrá al Pleno el proyecto de sentencia por el que se deseche de plano el medio de impugnación, cuando se dé alguno de los supuestos de improcedencia.

III. En cuanto al informe circunstanciado, si la autoridad no lo envía dentro del plazo señalado en esta ley, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos y se tendrán como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo prueba en contrario; lo anterior, sin perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad con el presente ordenamiento y las leyes aplicables.

IV. La Magistratura Electoral, en el proyecto de sentencia del medio de impugnación que corresponda, propondrá al Pleno tener por no presentado el escrito de la persona tercera interesada, cuando se presente en forma extemporánea o se incumplan los requisitos respectivos establecidos en la presente Ley.

V. Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos establecidos por este ordenamiento, la Magistratura Electoral, en un plazo no mayor a cinco días, dictará el auto de admisión que corresponda; una vez sustanciado el expediente y puesto en estado de resolución, se declarará cerrada la instrucción pasando el asunto a sentencia.

VI. Cerrada la instrucción, la Magistratura Electoral procederá a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, y lo someterá a la consideración del Pleno.

La no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito de la persona tercera interesada. En todo caso, el Tribunal Electoral resolverá con los elementos que obren en autos.

Artículo 120. Si la autoridad responsable incumple con la obligación de remitir el informe circunstanciado u omite enviar cualquiera de los documentos a que se refiere el artículo 117 de esta Ley, se requerirá de inmediato su cumplimiento o remisión fijando un plazo de veinticuatro horas para tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar oportunamente los documentos respectivos, se hará acreedora a uno de los medios de apremio establecidos en la Ley.

Artículo 121. La Presidencia o la Magistratura Electoral podrá requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como cualquier persona física o moral, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación.

Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LA ACUMULACIÓN

Artículos 122. Para la realización de las notificaciones dentro de los medios de impugnación previstos en el presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto en los artículos 336,

337, 338 y 339 de la Ley Electoral.

Artículo 123. Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta ley, los órganos competentes del Instituto o el Tribunal Estatal Electoral podrán determinar su acumulación.

La acumulación podrá decretarse al inicio, durante la sustanciación, o en la sentencia respectiva.

**SECCIÓN DÉCIMO CUARTA
DE LAS RESOLUCIONES Y
DE LAS SENTENCIAS**

Artículo 124. Las resoluciones o sentencias que pronuncien, respectivamente, el Instituto Estatal o el Tribunal Electoral deberán hacerse constar por escrito y contendrán:

- I. La fecha, el lugar y el órgano que la dicta.
- II. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos.
- III. En su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes.
- IV. Los fundamentos y consideraciones jurídicas.
- V. Los puntos resolutivos.
- VI. En su caso, el plazo para su cumplimiento.

Artículo 125. La Magistratura Electoral podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la sustanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento

Artículo 126. Dentro del término de dos días siguientes a la notificación de la sentencia, el Tribunal Electoral, de oficio o a petición de parte, podrá aclarar un concepto o precisar los efectos de una sentencia, siempre y cuando esto no implique una alteración sustancial de los puntos resolutivos o del sentido del fallo.

La aclaración formará parte de la resolución o sentencia.

Artículo 127. Las sentencias que dicte el Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables.

**SECCIÓN DÉCIMO QUINTA
DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN
DE LAS SENTENCIAS, DE LAS MEDIDAS**

**DE APREMIO Y DE LAS CORRECCIONES
DISCIPLINARIAS**

Artículo 128. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

- I. Amonestación.
- II. Multa de cincuenta hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada.
- III. Uso de la fuerza pública.
- IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 129. Para el cumplimiento de sus resoluciones, el Tribunal podrá vincular a órganos o autoridades que no hayan formado parte del procedimiento, atendiendo a la competencia legal de las mismas.

**CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LAS NULIDADES
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS REGLAS GENERALES**

Artículo 130. Las nulidades establecidas en este capítulo podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada.

Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral respecto de la votación emitida en una o varias casillas o de una elección, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio de inconformidad.

Artículo 131. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.

Artículo 132. Las candidaturas no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado.

Artículo 133. Son causas de nulidad de una elección las

previstas en la Ley Electoral y en la Ley General, con las excepciones previstas en esta Ley.

Artículo 134. Sólo podrá ser declarada nula la elección de una persona juzgadora, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.

Artículo 135. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a la parte promovente.

Artículo 136. El Tribunal Electoral deberá declarar la nulidad de la elección por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos siguientes:

I. Se exceda en un cinco por ciento el tope de gastos personales de campaña.

II. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.

III. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos y privados en las campañas.

IV. Se acredite la violencia política grave contra las mujeres en razón de género mediante sentencia firme del órgano jurisdiccional electoral.

Artículo 137. Las violaciones a que se refiere el artículo anterior deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

Artículo 138. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona que generó las conductas que derivaron la nulidad.

Artículo 139. Para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las reglas siguientes:

I. Se contará un voto válido por la marca o asiento que realice la persona votante en un recuadro de una misma boleta en favor de una candidatura claramente identificable,

con independencia de que puedan emitirse dos o más votos por diversas candidaturas contenidas en una misma boleta.

II. El Consejo Estatal determinará la cantidad de votos válidos que pueda emitir cada persona votante en una misma boleta, en función del tipo de elección, categoría y el número de candidaturas a elegir.

III. Se contará como voto nulo la falta de marca en uno o más de los recuadros de la boleta.

IV. Se contará como voto nulo aquellas marcas en que sea imposible determinar razonable y objetivamente la intención del voto.

V. Se contarán como votos nulos aquellos en que se asiente o marque en más de un recuadro la votación en favor de una misma candidatura por categoría. Solo podrá contabilizarse como válido el primer voto identificado por categoría.

El Consejo Estatal emitirá los criterios generales aplicables a la validez y nulidad de votos contenidos en esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA DE LA REGLAS NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA

Artículo 140. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Instituto Nacional.

II. Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Instituto Estatal, fuera de los plazos señalados por la Ley Electoral.

III. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

IV. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley.

V. Permitir a la ciudadanía sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

VI. Ejercer violencia física o presión sobre quienes integran

la mesa directiva de casilla o sobre el electorado y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

VII. Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a la ciudadanía y esto sea determinante para el resultado de la votación.

VIII. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

SECCIÓN TERCERA DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES

Artículo 141. Son causales de nulidad de la elección, adicionalmente a las aplicables previstas en la base VI del artículo 41 de la Constitución General:

I. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en esta Ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio estatal, o en el respectivo Distrito Judicial.

II. Cuando en el territorio Estatal o en el respectivo Distrito Judicial, no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida.

III. Tratándose de la única candidatura registrada y ésta resulte ganadora e inelegible.

Las causales de nulidad señaladas en el párrafo anterior deberán estar plenamente acreditadas y se debe demostrar que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección.

Artículo 142. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o en la entidad, que se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a la candidatura actora.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO DE LOS INCIDENTES

Artículo 143. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un medio de impugnación y que tienen relación inmediata con el mismo.

Cuando los incidentes que se promuevan no guarden relación inmediata con el asunto principal, sean notoriamente improcedentes o frívolos, el Tribunal Electoral, de oficio, deberá desecharlos de plano.

Artículo 144. Los incidentes se sustanciarán en la misma pieza de autos que el asunto principal. Por regla general no suspenderán el procedimiento principal.

Solo suspenderá el procedimiento, aquellos incidentes que impidan el curso del medio de impugnación, sin cuya previa resolución sea absolutamente imposible, de hecho, o de derecho, continuar sustanciándolo.

Artículo 145. Para la sustanciación y resolución de los incidentes, se estará a lo siguiente:

I. Admitido el incidente, se dará vista a la contraparte por el termino de cuarenta y ocho horas, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga.

II. Concluido el plazo otorgado en los términos de la fracción anterior, si la Magistratura Electoral instructora lo considera necesario, citará a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos.

III. Una vez celebrada la audiencia, en su caso, la Magistratura Electoral instructora o el Pleno del Tribunal Electoral, según corresponda, resolverá lo conducente.

Artículo 146. Se tramitarán en la vía incidental por el Tribunal Electoral:

I. Los recuentos parciales, que consisten en el nuevo escrutinio y cómputo de una o más casillas, sin llegar a la totalidad de las que integraron la elección de que se trate.

II. El recuento total, que consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas que integraron la elección de que se trate.

III. Las demás cuestiones que la Magistratura Electoral instructora o el Tribunal Electoral estimen necesarias para la correcta sustanciación de los medios de impugnación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las facultades y atribuciones establecidas en la Ley Electoral se ajustarán, por única vez, a los plazos y términos de la reforma constitucional electoral contenida en el Decreto No. LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O.

TERCERO.- La etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025 iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Estatal celebre dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Para el proceso electoral extraordinario de 2024-2025, el Consejo de la Judicatura, a más tardar el día 21 de febrero del 2025, deberá enviar al Congreso del Estado, el listado que contenga los nombres de las personas en funciones en el cargo que deseen contender, las personas que declinan su participación o participan por otro cargo distinto ya sea en el Poder Judicial estatal o federal.

Las personas juzgadoras en funciones que deseen contender para el proceso electoral extraordinario 2024 - 2025, deberán aparecer en la boleta a efecto de ser elegidas por la ciudadanía, en los términos de los Artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto No. LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O.

QUINTO.- La jornada electoral extraordinaria se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto Estatal, con excepción de representantes de un partido político.

SEXTO.- El Instituto Estatal efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la cual resolverá las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025.

SÉPTIMO.- Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Congreso del Estado el 1º de septiembre de 2025. El órgano de administración judicial adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre de 2025.

OCTAVO.- El Congreso del Estado contará con 120 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de realizar las reformas y adiciones que resulten necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de Decreto en los términos que deba duplicarse.

DADO en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veinticinco.

ASÍ LO APROBÓ LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, EN REUNIÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2025

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. DIP. GUILLERMO PATRICIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, Presidente; DIP. JOCELINE VEGA VARGAS, Secretaria; DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID, Vocal; DIP. JORGE CARLOS SOTO PRIETO, Vocal; DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS, Vocal; DIP. AMÉRICA VICTORIA AGUILAR GIL, Vocal; DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO, Vocal; DIP. OCTAVIO JAVIER BORUNDA QUEVEDO, Vocal; DIP. JAEL ARGÜELLES DÍAZ, Vocal].

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Gracias, Diputado.

Procederemos a la votación del dictamen, para lo cual solicito a la Segunda Secretaría actúe en consecuencia.

- El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputadas y diputados, presentes en el Recinto Oficial, respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón corre-

spondiente de su pantalla.

Se abre el sistema de voto electrónico.

Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa o quienes se abstengan.

Le pregunto a quienes se encuentran en la modalidad de acceso remoto o virtual para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto.

Diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera.

- **La C. Dip. Edna Xóchitl Contreras Herrera.- P.A.N.:** A favor.

- **El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.- P.R.I.:** Gracias, Diputada.

Diputada Rosana Díaz Reyes.

- **La C. Dip. Rosana Díaz Reyes.- MORENA:** A favor, Diputado.

- **El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.- P.R.I.:** Gracias, Diputada.

Diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco.

- **La C. Dip. Irlanda Dominique Márquez Nolasco.- P.T.:** A favor, Diputado.

- **El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.- P.R.I.:** Gracias.

Se cierra el sistema de voto electrónico.

Le informo, Presidenta, que se manifestaron 29 votos favor, cero en contra y 2 abstenciones, perdón, nos falta el voto de la Diputada...

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Sí, mientras no hagamos, tengamos hecha la declaración le pido por favor Secretario...

- **El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.- P.R.I.:** Okay...

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presi-**

denta.- MORENA: Tome en consideración los...

- **El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.- P.R.I.:** Se registran los votos a favor...

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Sí.

Sí, Diputado.

- **El C. Dip. Luis Fernando Chacón Erives, Segundo Secretario.- P.R.I.:** Se genera la lectura.

Diputada Presidenta 31 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones del dictamen antes leído.

[Se manifiestan 31 votos a favor emitidos por las y los diputados: América Victoria Aguilar Gil (PT), Jael Argüelles Díaz (MORENA), Óscar Daniel Avitia Arellanes (MORENA), Octavio Javier Borunda Quevedo (PVEM), Roberto Marcelino Carreón Huitrón (PAN), Luis Fernando Chacón Erives (PRI), José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN), Rosana Díaz Reyes (MORENA), Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo (MORENA), Nancy Janeth Frías Frías (PAN), Herminia Gómez Carrasco (MORENA), Elizabeth Guzmán Argueta (MORENA), Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT), Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI), Saúl Mireles Corral (PAN), Carlos Alfredo Olson San Vicente (PAN), Leticia Ortega Máynez (MORENA), Edith Palma Ontiveros (MORENA), Ismael Pérez Pavía (PAN), María Antonieta Pérez Reyes (MORENA), Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez (PRI), Magdalena Rentería Pérez (MORENA), Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN), Brenda Francisca Ríos Prieto (MORENA), Carla Yamileth Rivas Martínez (PAN), Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), Pedro Torres Estrada (MORENA), Joceline Vega Vargas (PAN), José Luis Villalobos García (PRI) y Arturo Zubía Fernández (PAN).

2 abstenciones de las y los diputados: Alma Yesenia Portillo Lerma (MC) y Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC).]

- **La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA:** Gracias, Diputado Secretario.

Se aprueba el dictamen tanto general como en lo particular.

[Texto del Decreto No. 184/2025 II P.E.

[DECRETO No. LXVIII/EXLEY/0184/2025 II P.E.

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente manera:

LEY ELECTORAL REGLAMENTARIA
DE LOS ARTÍCULOS 99, 100, 101,
102 Y 103 DE LA CONSTITUCIÓN
PARA ELEGIR PERSONAS JUZGADORAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, de observancia general en el Estado de Chihuahua y tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, que deberán observarse en la elección de las personas juzgadoras, así como la relación entre el Instituto Nacional y el Instituto Estatal, reglamentando las normas constitucionales relativas a la competencia local en las siguientes materias:

- I. La organización y calificación de las elecciones.
- II. Los derechos, obligaciones y prerrogativas políticas o electorales de la ciudadanía en los procesos electorales.
- III. El funcionamiento y competencia de las autoridades electorales locales en dichos procesos.
- IV. La determinación de las infracciones a esta Ley, sujetos de responsabilidad, así como los procesos para la imposición de sanciones administrativas.
- V. El sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Artículo 2. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, en los términos de la legislación electoral, y se deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Artículo 3. En lo no previsto en la presente Ley se aplicará supletoriamente la Ley General, Ley Electoral, Acuerdos y Lineamientos del Instituto Estatal y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral, en lo que resulte aplicable.

Artículo 4. Para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales establecidas por la Constitución local y esta Ley, contarán con la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales; las que están obligadas a proporcionar a los organismos electorales, la información que obre en su poder, las certificaciones de los documentos que existan en sus archivos y el apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines electorales.

Artículo 5. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde, además de al Instituto Estatal, a las candidatas o candidatos a ocupar un cargo de persona juzgadora.

Artículo 6. Las campañas de promoción del voto deberán ajustarse a los acuerdos que emita el Consejo Estatal o, en su caso, el Instituto Nacional.

Artículo 7. La aplicación de las normas y procedimientos contenidos en esta Ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, a:

- IV. El Instituto Estatal.
- V. El Tribunal Electoral.
- VI. Los tres poderes del Estado.

Artículo 8. Las instancias antes enunciadas, deberán garantizar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, en el ejercicio de los derechos político electorales, así como el respeto a los derechos humanos.

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

- I. Acto de campaña: Las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellas actividades en que las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas a ocupar un cargo de persona juzgadora durante la etapa de campaña.
- II. Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campaña, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura.
- III. Aspirante a candidata o candidato: La ciudadana o ciudadano que decide contender con el fin de alcanzar su registro como persona candidata a ocupar un cargo de persona juzgadora.
- IV. Campaña electoral: Al conjunto de actividades llevadas a cabo por las candidatas o candidatos registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos y términos establecidos en esta Ley.
- V. Comité de Evaluación: Es el órgano integrado en cada uno de los tres poderes del Estado, que desempeñarán su cargo de manera honorífica, responsables de recibir y evaluar los expedientes de las personas aspirantes.
- VI. Candidata o candidato: La ciudadana o ciudadano que, con el debido registro, pretende acceder a ocupar un cargo de persona juzgadora.
- VII. Categoría: Tipo de elección de las personas juzgadoras, diferenciadas por materia y cargo, según lo dispuesto en la presente Ley y la normatividad aplicable.
- VIII. Consejo Estatal: El Consejo Estatal del Instituto Estatal.
- IX. Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional.
- X. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- XI. Constitución local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
- XII. Distrito Judicial: El Distrito Judicial, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
- XIII. Elección Distrital: Elección de juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia.
- XIV. Elección Estatal: Elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Superior de Justicia.
- XV. Instituto Estatal: El Instituto Estatal Electoral.
- XVI. Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral.
- XVII. Ley Electoral: La Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
- XVIII. Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- XIX. Paridad de género: Se garantiza con la asignación del 50% de mujeres y 50% de hombres en los cargos de personas juzgadoras.
- XX. Personas juzgadoras: Las juezas, los jueces, las magistradas y los magistrados del Poder Judicial del Estado, electas por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía.
- XXI. Propaganda electoral: Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difundan las personas candidatas con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada por la libertad de expresión.
- XXII. Propaganda gubernamental: Aquella de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social que bajo cualquier modalidad de comunicación social difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, con motivo de sus funciones.
- XXIII. Tribunal Electoral: El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
- XXIV. Violencia Política de Género: Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres,

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LAS ELECCIONES

Artículo 10. Los derechos y obligaciones de la ciudadanía en los procesos para elegir a las personas juzgadoras, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para acceder a dichos cargos, el registro de electores y la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, atenderán a las disposiciones contenidas en la Constitución General, los tratados internacionales, la Constitución local, la Ley General, la Ley Electoral, la presente Ley y demás relativas en la materia.

Artículo 11. La inviolabilidad del voto, las calidades del mismo, los actos que generen presión o coacción al electorado y el derecho a ser votada o votado para los cargos a que se refiere esta Ley se regirán por las disposiciones contenidas en la Constitución General, los tratados internacionales, la Constitución local, la Ley General, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Electoral, la presente Ley y demás relativas de la materia.

Artículo 12. La ciudadanía podrá ejercer su derecho como persona observadora electoral en términos de lo dispuesto en la Ley Electoral y conforme a los acuerdos que al efecto emita el Consejo Estatal o, en su caso, el Instituto Nacional.

CAPÍTULO TERCERO DEL SISTEMA ELECTORAL

Artículo 13. El proceso para elegir a las personas juzgadoras deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

Artículo 14. Cuando se declare la nulidad de una elección o la persona electa resultare inelegible, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral, en los términos de la Ley Electoral.

Artículo 15. La convocatoria para la realización de una elección

extraordinaria no podrá restringir los derechos previstos en la presente Ley, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

Artículo 16. El Consejo Estatal podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley, para adecuar el proceso electoral a la fecha de la convocatoria a que alude el artículo anterior.

En caso de ausencia de disposición expresa sobre la elección extraordinaria, se aplicará supletoriamente lo referente a las elecciones ordinarias.

CAPÍTULO CUARTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

Artículo 17. El Instituto Estatal es la autoridad responsable de la organización, preparación, desarrollo, vigilancia y cómputo del proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras, con excepción de las que la Ley disponga para otra autoridad competente.

Artículo 18. El Consejo Estatal, para efectos de la presente Ley, se integrará por:

III. Consejerías electorales, con derecho a voz y voto.

IV. Titular de la Secretaría Ejecutiva, con derecho a voz.

A las sesiones del Consejo Estatal se podrá invitar a la persona titular de la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional en el Estado, quien contará con voz.

Las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo Estatal no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas con los procesos electorales objeto de esta Ley.

Artículo 19. El Instituto Estatal tendrá facultades para emitir los reglamentos, lineamientos, acuerdos y convenios necesarios para la debida regulación de la organización de la elección de las personas juzgadoras.

Artículo 20. El Tribunal Electoral sustanciará y resolverá, en forma definitiva e inatacable, los medios de impugnación que deriven de los procesos electorales para elegir a las personas juzgadoras.

CAPÍTULO QUINTO DEL PROCESO ELECTORAL

Artículo 21. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución General, la Constitución local, la Ley General y la Ley Electoral, realizados por los poderes del Estado, las autoridades electorales y la ciudadanía, que tiene por objeto la elección periódica de personas juzgadas, en el que se respetará el principio de paridad de género, en la asignación de dichos cargos.

Artículo 22. El proceso electoral ordinario para la elección de personas juzgadas inicia con la primera sesión que el Consejo Estatal celebre en los primeros siete días del mes de octubre del año anterior a la elección, y concluye con la etapa de declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría y validez; o en su caso, con la resolución que emita en última instancia el Tribunal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 23. El proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

I. Preparación de la elección: inicia con la primera sesión que el Consejo Estatal celebre en los primeros siete días del mes de octubre del año anterior a la elección, y concluye al iniciarse la jornada electoral.

II. Convocatoria y postulación de candidaturas: inicia con la publicación de la convocatoria que emita el Congreso del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 101, fracción I, de la Constitución local y concluye con la remisión por dicho órgano legislativo del listado de candidaturas al Instituto Estatal.

III. Jornada electoral: inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio del año que corresponda, y concluye con la clausura de casillas.

IV. Cómputos y sumatoria: inicia con la remisión de la documentación y los expedientes electorales de las casillas al Instituto Estatal, y concluye con los cómputos y sumatoria de las elecciones que realice el Consejo Estatal y, en su caso, los órganos desconcentrados del Instituto Estatal designados para tal efecto.

V. Asignación de cargos y entrega de constancias de mayoría: inicia con la identificación que realiza el Instituto Estatal de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos

y la asignación de estas en cada cargo, en función de su especialización por materia y respetando el principio de paridad de género de manera alternada entre mujeres y hombres, y concluye con la entrega por dicho Instituto de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva.

Las asignaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán a quien haya obtenido el mayor número de votos al primer cargo vacante, según el orden que obre en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en términos de lo dispuesto por el artículo 101, fracción I de la Constitución local, y así de manera consecutiva en orden descendente, en cada materia y Distrito Judicial.

VI. Calificación y declaración de validez de la elección, inicia con la remisión de resultados que realice el Instituto Estatal al Tribunal Electoral, y concluye al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de las elecciones respectivas o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

Se deberá observar el principio de paridad de género para la elección de personas juzgadas; así, en caso de que no se cumpla con este principio, se podrán realizar los ajustes para garantizarla, de forma que cuando menos el 50% del total de los cargos de cada una de las categorías corresponda a cada género.

Artículo 24. La organización de la jornada electoral para elegir a las personas juzgadas estará a cargo del Instituto Estatal, en el ámbito de su competencia, el cual tendrá bajo su responsabilidad:

I. Contratar al personal temporal necesario para realizar las actividades atinentes a la organización y desarrollo de la elección, con base en la disponibilidad presupuestal.

II. Aprobar el modelo de la boleta, documentación y materiales electorales, así como su elaboración, recepción y resguardo, de acuerdo con la normativa aplicable.

III. Integrar y distribuir los paquetes electorales a las personas que conforman las mesas directivas de casilla.

IV. Registrar a las personas observadoras electorales, conforme al procedimiento respectivo.

V. Aprobar el lugar destinado para el resguardo de paquetes electorales.

VI. Organizar y desarrollar la jornada electoral.

VII. Organizar y desarrollar, en su caso, foros de debate entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social puedan brindar dichos espacios de manera gratuita, vigilando que la participación sea en condiciones de equidad.

VIII. Determinar los topes máximos de gastos personales de campaña aplicables para cada candidatura.

IX. Emitir los acuerdos necesarios para coadyuvar en la difusión equitativa de propuestas de personas candidatas y promover la participación ciudadana en el proceso electoral.

X. Instalar, en su caso, Asambleas Municipales y Distritales, Oficinas Regionales u otros órganos desconcentrados que determine el Consejo Estatal, que coadyuven en el desarrollo del proceso electoral.

XI. Emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones establecidas en la Ley, así como aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional, así como ejercer, en su caso, las facultades que éste delegue al Instituto Estatal.

XII. Efectuar el cómputo de las elecciones, a través del Consejo Estatal y los órganos desconcentrados que al efecto se designen.

XIII. Emitir las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal aplicables al proceso electoral.

XIV. Las demás necesarias que determine el Consejo Estatal para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia del proceso electoral y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Artículo 25. En lo conducente y con las salvedades a que se refiere esta Ley, los procedimientos para la integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, la documentación y el material electoral, así como la jornada electoral y actos posteriores, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley General y en la Ley Electoral.

Artículo 26. El Instituto Estatal efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados, entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos y asignará los cargos entre las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos, observando la paridad de género alternando entre mujeres y hombres.

Artículo 27. El procedimiento de escrutinio y cómputo de la elección de personas juzgadoras se desarrollará, en cada etapa, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral, y en su caso, en los acuerdos que emita el Consejo Estatal.

Artículo 28. El Instituto Estatal declarará la validez de la elección y enviará sus resultados al Tribunal Electoral, que resolverá las impugnaciones a más tardar el treinta y uno de julio.

El Congreso del Estado, el día que instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, tomará protesta a las personas electas.

CAPÍTULO SEXTO DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN

Artículo 29. Las personas juzgadoras serán elegidas de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía, el día que se realicen las elecciones ordinarias del año que corresponda, conforme al siguiente procedimiento:

I. El Congreso del Estado publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas en los términos de esta Ley.

II. Los poderes del Estado postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo, conforme a la Constitución local y esta Ley.

III. Cada Poder postulará hasta tres personas aspirantes, tratándose de magistradas o magistrados; y hasta dos, tratándose de juezas y jueces; lo anterior, conforme a lo siguiente: el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular; el Poder Legislativo, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial, por conducto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.

IV. El Congreso del Estado recibirá las postulaciones y las remitirá al Instituto Estatal.

**CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO
DE CANDIDATURAS**

**SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 30. Son elegibles para el cargo de persona juzgadora, las ciudadanas o ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución General, la Constitucional local y esta Ley.

Artículo 31. Concluido el término de registro, cada Comité de Evaluación determinará su procedimiento de sustitución de personas aspirantes, en caso de ser necesario.

En caso de fallecimiento, incapacidad, inhabilitación o declinación de alguna de las candidaturas, el Poder del Estado postulante informará al Congreso del Estado la sustitución que haya realizado el Comité de Evaluación correspondiente, para que haga del conocimiento al Instituto Estatal, observando el procedimiento de insaculación pública sobre el listado de las personas mejor evaluadas que no fueron seleccionadas para la candidatura del cargo que se trate.

Artículo 32. El Congreso del Estado informará, de forma inmediata, al Instituto Electoral de la sustitución de candidaturas que realicen los poderes del Estado, en su caso.

Artículo 33. La modificación a las boletas electorales por sustitución, solo se podrá realizar hasta antes del inicio de su producción, conforme al programa de producción y documentación electoral que apruebe el Consejo Estatal.

**SECCIÓN SEGUNDA
DE LA CONVOCATORIA**

Artículo 34. El Congreso del Estado publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a ocupar un cargo como persona juzgadora, dentro de los treinta días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.

Artículo 35. La convocatoria contendrá, al menos, fechas, plazos, los cargos a elegir, los requisitos de elegibilidad y las etapas siguientes:

I. Registro e inscripción de documentación de las personas aspirantes ante el Comité de Evaluación de cada Poder del Estado.

II. Acreditación de elegibilidad de aspirantes por el Comité de Evaluación.

III. Calificación de la idoneidad de las personas aspirantes por el Comité de Evaluación.

Artículo 36. En todo caso, los plazos a que se refiere el artículo anterior serán improrrogables.

**SECCIÓN TERCERA
DEL REGISTRO DE ASPIRANTES**

Artículo 37. Los plazos para presentar la solicitud de registro de candidaturas durante el año de la elección serán los que contenga la convocatoria a que se refiere el artículo 35 de esta Ley.

Artículo 38. La solicitud de registro de aspirantes deberá contener los siguientes datos:

I. Nombre completo y, en su caso, el sobrenombre.

II. Lugar y fecha de nacimiento.

III. Ocupación, domicilio y tiempo de residencia en el mismo.

IV. Clave de la credencial para votar.

V. Cargo para el que se le postula.

VI. Las personas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electas en ese cargo y la manifestación de que se cumple con lo establecido por la Constitución local, en materia de reelección.

Artículo 39. La solicitud de registro se deberá acompañar de los documentos siguientes:

I. Copia del acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana por nacimiento.

II. Copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente.

III. Título que acredite que la persona aspirante cuenta con

Licenciatura en Derecho.

IV. Certificado de estudios o de historial académico de la Licenciatura, que contenga las calificaciones obtenidas por grado y materia.

V. Documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional de la persona aspirante, de cuando menos tres años.

VI. Constancia que acredite que la persona aspirante residió en el Estado durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria respectiva.

VII. Carta bajo protesta de decir verdad de que se goza de buena reputación, que no ha recibido condena por delito doloso con sanción privativa de la libertad; que no ha sido titular de una Secretaría de Estado Federal o local, de la Fiscalía General de la República o local, Senadora o Senador, Diputada o Diputado Federal o local, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna Entidad Federativa, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva; no ubicarse en las hipótesis previstas en el artículo 38 de la Constitución General.

VIII. Un ensayo de tres cuartillas, justificando los motivos de la postulación.

IX. Cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden la idoneidad para desempeñar el cargo.

X. Constancia que acredite la no inscripción en el Padrón del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua.

XI. Constancia de no inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

XII. Constancia que acredite que no se le ha inhabilitado en el servicio público, con la validación respectiva.

Artículo 40. Los Comités de Evaluación de los poderes del Estado, podrán implementar los sistemas y plataformas digitales que estimen necesarias para efectos de lo dispuesto en esta Sección.

Artículo 41. Los poderes del Estado postularán el número de candidaturas que corresponda en cada caso. Al efecto, establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en la Constitución local y en las leyes.

Artículo 42. El Órgano de Administración del Poder Judicial hará del conocimiento del Congreso del Estado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el Distrito Judicial respectivo y demás información que requiera, dentro de los veinte días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.

De igual forma, al cierre de la convocatoria deberá enviar el listado que contenga los nombres de las personas juzgadoras que desean contender, las que declinan su participación o quienes participan por otro cargo diverso, ya sea en el Poder Judicial Estatal o en la elección del Federal.

Artículo 43. Recibida la información a que se refiere el artículo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, el Congreso del Estado lo hará del conocimiento de los otros dos poderes del Estado, así como del Instituto Estatal y les remitirá una copia certificada de la misma.

Artículo 44. Para la evaluación y selección de sus postulaciones, cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Artículo 45. Recibida una solicitud de registro, ante cualquiera de los tres poderes del Estado, el Comité de Evaluación correspondiente verificará que se cumplió con todos los requisitos señalados en la legislación aplicable.

Los comités de evaluación publicarán la lista de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad e idoneidad. Las candidaturas que hayan sido rechazadas podrán impugnar esa decisión ante el Tribunal

Electoral, dentro del plazo y conforme al procedimiento que determine la Ley y los acuerdos generales en la materia. Las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo que permita a las personas aspirantes participar en la evaluación de idoneidad en caso de que su impugnación resulte fundada.

Artículo 46. De no cumplir con los requisitos se tendrá por no presentada la solicitud de registro.

Artículo 47. Los comités de evaluación integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de juezas y jueces. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género.

Artículo 48. Una vez que se depure el listado a que se refiere el artículo anterior, cada Comité de Evaluación identificará, por categoría, el cargo sujeto a elección, de conformidad con el informe rendido por el Órgano de Administración del Poder Judicial.

Artículo 49. Cada Comité de Evaluación ajustará los listados, los remitirá a la autoridad que represente a cada Poder del Estado para su aprobación, en su caso, y envío al Congreso del Estado.

El Congreso del Estado, una vez que reciba los listados, verificará de acuerdo a la información proporcionada por el Órgano de Administración del Poder Judicial, que las personas juzgadoras que declinen su participación, que participen por un cargo diverso al que ocupan en el Poder Judicial Estatal o que participen en la elección del Poder Judicial Federal, no se encuentren en el listado que se remita al Instituto Estatal.

Artículo 50. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios poderes del Estado, siempre que aspiren al mismo cargo. Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria, no podrán hacerlo posteriormente.

SECCIÓN QUINTA DE LA PUBLICACIÓN DE CANDIDATURAS

Artículo 51. El Congreso del Estado recibirá las postulaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, posteriormente remitirá los listados de los tres poderes al Instituto Estatal, a más tardar

el doce de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que éste organice el proceso electoral.

Artículo 52. En caso de que alguno de los poderes del Estado, no envíe las postulaciones, no será motivo de cancelación o diferimiento de la elección.

Artículo 53. Una vez recibidos los listados de candidaturas, la Presidencia del Instituto Estatal deberá solicitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

CAPÍTULO OCTAVO DE LA PROPAGANDA Y CAMPAÑAS ELECTORALES

Artículo 54. Las campañas electorales a que se refiere esta Ley, tendrán una duración de sesenta días.

Artículo 55. En ningún caso habrá etapa de precampaña.

Las personas candidatas no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las campañas, acatando en todo momento los términos de la convocatoria respectiva.

Artículo 56. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General.

Artículo 57. Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión, de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la Ley General y determine el Consejo General; y podrán, además, participar en entrevistas de carácter noticioso, foros de debate organizados por el Instituto Estatal o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social, en condiciones de equidad.

Artículo 58. Para todos los cargos de elección de personas juzgadoras, estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio o televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidaturas.

Las personas candidatas podrán erogar recursos con la

finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados, dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura, dentro de los periodos de campaña respectivos, mismos que no podrán considerarse como financiamiento privado.

Los topes de gastos personales, por cada persona candidata, serán determinados por el Consejo Estatal en función del tipo de elección que se trate y no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones.

Artículo 59. La difusión de propaganda electoral impresa, se hará en papel, que deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, atendiendo el periodo legal de las campañas y deberá suspenderse o retirarse tres días antes de la jornada electoral.

La propaganda impresa de las candidatas y candidatos podrá contenerse en papel, trípticos y materiales análogos, identificando la propuesta y los perfiles.

La propaganda podrá circularse de mano en mano entre las y los ciudadanos y a través de medios electrónicos.

Está prohibida la utilización de recursos provenientes de los partidos políticos, además de hacer alusión a siglas, emblemas o denominaciones de estos y símbolos religiosos.

El Instituto Estatal podrá generar un sistema de difusión en su página oficial para que la ciudadanía pueda conocer sobre el proceso electoral y la información de cada una de las candidaturas.

En las actividades que realice el Instituto Estatal para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral, se privilegiará el uso de medios electrónicos y periódicos de mayor circulación y cobertura en el Estado.

Artículo 60. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las candidaturas a cargos de personas juzgadoras podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables.

Artículo 61. Queda estrictamente prohibida la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, conductas que se presumirán como indicio de presión al electorado para obtener su voto. Estas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y demás aplicables.

Artículo 62. Sólo se permitirá la difusión de candidaturas de personas juzgadoras mediante uso de redes sociales o medios digitales para su promoción, siempre y cuando dichas candidaturas no realicen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos.

Artículo 63. Las personas físicas o morales que realicen encuestas o sondeos de opinión, en el marco del proceso de elección de los cargos de personas juzgadoras, deberán observar las reglas, lineamientos y criterios que para tal efecto emita el Instituto Nacional y el Instituto Estatal.

Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar o difundir por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.

Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar ante el Consejo Estatal un informe que señale al menos la metodología, resultados obtenidos, el desglose de los recursos aplicados y costos, así como identificar a las personas responsables de su realización.

Queda prohibida la contratación y difusión de encuestas, por parte de personas candidatas, por sí o por interpósita persona. La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas por el Instituto Estatal en su página de Internet.

Artículo 64. Se deberán aplicar los reglamentos, lineamientos y acuerdos generales, que en su caso emitan el Consejo General y Consejo Estatal en materia de propaganda, campañas electorales, encuestas y sondeos de opinión.

**CAPÍTULO NOVENO
DE LA DOCUMENTACIÓN Y
EL MATERIAL ELECTORAL**

Artículo 65. El Consejo Estatal aprobará el modelo de las boletas electorales, documentación y materiales del proceso electoral, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes para la emisión del voto.

El Instituto Estatal será responsable de la producción y distribución de la documentación y materiales electorales que se emplearán en el proceso.

Artículo 66. La boleta contendrá, por lo menos, la siguiente información:

- I. Cargo para el que se postula.
- II. Circunscripción Estatal o Distrito Judicial, según corresponda.
- III. Especialidad por materia a la que se postula.
- IV. Nombre completo de las personas candidatas, numerados y distribuidos por orden alfabético y progresivo, distinguiendo la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a renovar. Las boletas podrán incluir, además, el sobrenombre con el que se conoce públicamente a las personas candidatas.
- V. Firmas impresas de las personas titulares de la Presidencia del Consejo Estatal y de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal.

Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La información que contenga el talón corresponderá a la Entidad Federativa y Distrito Judicial. El número de folio será progresivo.

Artículo 67. La boleta garantizará que el electorado asiente la candidatura de su elección, conforme a las siguientes categorías:

- I. Para magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia se podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres, por cada materia, según corresponda.
- II. Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres.
- III. Para juezas y jueces se podrán elegir, hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres, por cada materia y Distrito Judicial, según corresponda.

CAPÍTULO DÉCIMO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS, CONDUCTAS SANCIONABLES Y SANCIONES

Artículo 68. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

- I. Los partidos políticos.
- II. Las agrupaciones políticas.
- III. Las personas aspirantes y candidatas a un cargo de elección.
- IV. Las ciudadanas y ciudadanos, o cualquier persona física o moral.
- V. Las personas observadoras electorales o las organizaciones de observadores electorales.
- VI. Las autoridades o las personas en el servicio público de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público.
- VII. Las notarias y notarios públicos.
- VIII. Las personas extranjeras.
- IX. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes.
- X. Los ministerios de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.
- XI. Quien resulte con obligación en los términos de la presente Ley.

Artículo 69. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de este, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo anterior, y se manifiesta, entre otras, a través de las conductas siguientes:

VII. Ocultar información con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades.

VIII. Ocultar la convocatoria para el registro de candidaturas, o información relacionada con esta, con la finalidad de impedir su participación.

IX. Proporcionar información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro.

X. Obstaculizar su campaña, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.

XI. Cualquier otra acción que lesione o dañe su dignidad, integridad o libertad en el ejercicio de sus derechos político electorales.

XII. Alguna de las contenidas en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 70. Constituyen infracciones de los partidos políticos, agrupaciones políticas, personas en el servicio público y poderes de los estados a la presente Ley:

VI. La realización de actos de campaña a favor de las personas aspirantes y, en su caso, candidaturas.

VII. La difusión de propaganda electoral que calumnie a las personas aspirantes y, en su caso, a las candidaturas.

VIII. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión a favor de las personas aspirantes y, en su caso, candidaturas.

IX. Otorgar aportaciones económicas o en especie a una persona aspirante y, en su caso, candidatura.

X. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y en lo que resulte aplicable, las de la Ley Electoral.

Artículo 71. Constituyen infracciones de las personas aspirantes o candidatas a la presente Ley:

IX. La realización de actos anticipados de campaña.

X. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de otra persona, agrupación, ente público, o personas servidoras públicas.

XI. No presentar el informe de gastos personales de campaña.

XII. Exceder el tope de gastos personales de campaña.

XIII. La difusión de propaganda política electoral en periodos no permitidos.

XIV. La difusión de propaganda política electoral que contenga expresiones que calumnie a las personas o instituciones.

XV. La difusión de propaganda electoral a través de medios no permitidos por la ley.

XVI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 72. Constituyen infracciones de las ciudadanas o ciudadanos o, en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

V. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Nacional o por el Instituto Estatal, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con las personas aspirantes o candidatas a cargos de elección popular.

VI. Contratar o difundir propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía a favor o en contra de candidaturas registradas.

VII. La promoción de denuncias frívolas.

VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 73. Constituyen infracciones de las personas observadoras electorales, y de las organizaciones con el mismo propósito, a la presente Ley:

III. El incumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones establecidas en el artículo 4, numeral 5), inciso e) de la Ley Electoral.

IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 74. Constituyen infracciones de las notarias o notarios públicos a la presente Ley, el incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la jornada electoral y de atender las solicitudes que les hagan las autoridades electorales, las personas funcionarias de casilla, las ciudadanas y ciudadanos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Artículo 75. Constituyen infracciones de las personas extranjeras a la presente Ley, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución General y las leyes aplicables.

Artículo 76. Constituyen infracciones de los ministerios de culto, asociaciones iglesias o agrupaciones de cualquier religión, a la presente Ley:

IV. La inducción a la abstención, a votar por una candidata o candidato, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación.

V. Realizar o promover aportaciones económicas a un aspirante o candidata o candidato a cargo de elección popular.

VI. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 77. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores, serán sancionadas conforme a lo siguiente:

VII. Respecto de los partidos políticos:

d) Amonestación pública.

e) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta.

f) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución General y de la presente Ley, con la cancelación de su registro como partido político.

VIII. Respecto de las agrupaciones políticas estatales:

d) Con amonestación pública.

e) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad

de la falta.

f) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a seis meses.

IX. Respecto de las personas aspirantes y candidaturas a cargos de personas juzgadoras:

d) Con amonestación pública.

e) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, según la gravedad de la falta.

f) Con la pérdida del derecho de la persona aspirante infractora a ser registrada como persona candidata o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.

X. Respecto de las ciudadanas y ciudadanos, o cualquier persona física o moral:

a) Con amonestación pública.

b) Respecto de las personas físicas, con multa de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley.

c) Respecto de las personas morales, por las conductas señaladas en el inciso anterior: con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley.

d) Con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de las demás conductas previstas como infracción.

XI. Respecto de personas observadoras electorales u organizaciones de observación electoral:

d) Con amonestación pública.

e) Con la cancelación inmediata de la acreditación como personas observadoras electorales y la inhabilitación para acreditarlas como tales en al menos dos procesos electorales locales.

f) Con multa de hasta doscientas veces el valor diario de

la Unidad de Medida y Actualización vigente, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan las personas observadoras electorales.

XII. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto Estatal, se dará vista a la autoridad con superioridad jerárquica y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, o las denuncias o querellas ante la agencia del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 78. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Capítulo, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

VIII. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él.

IX. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

X. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora.

XI. Las condiciones externas y los medios de ejecución.

XII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

XIII. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio, derivado del incumplimiento de obligaciones.

Se considerará reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal.

Las multas deberán ser pagadas en el Instituto Estatal; si la persona infractora no cumple con su obligación, el órgano dará vista a las autoridades competentes a efecto de que procedan

a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.

Los ingresos de las multas aplicadas serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua.

SECCIÓN SEGUNDA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

Artículo 79. Toda persona con interés jurídico podrá acudir en denuncia por la vía del Procedimiento Especial Sancionador ante el Instituto Estatal, cuando considere que alguno de los sujetos regulados en esta Ley haya incurrido en violaciones a la misma.

Artículo 80. El trámite y sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador que establece esta Ley, se regirá por las normas previstas en la Ley Electoral.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LOS EFECTOS DE LA INELEGIBILIDAD

Artículo 81. Tratándose de la inelegibilidad de la candidata o candidato se estará a lo siguiente:

III. Si se trata de la persona que obtuvo el mayor número de votos y existen varias candidatas o candidatos en la misma categoría, ocupará su lugar la persona que haya obtenido en segundo lugar el más alto número de votación válida obtenida.

En el supuesto del párrafo anterior, si la candidata o candidato que obtuvo el segundo lugar también resultar inelegible, ocupará su lugar el tercer lugar y así sucesivamente.

IV. Si se trata de todas las candidatas o candidatos en la misma categoría, se realizará una elección extraordinaria, de acuerdo con lo ordenado por esta Ley.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 82. El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley, tiene por objeto garantizar:

III. Que todos los actos y resoluciones de las autoridades involucradas de los poderes del Estado, así como de las

autoridades electorales en el proceso electoral, se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad.

IV. La definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral para la elección de personas juzgadoras.

Artículo 83. El sistema de medios de impugnación se integra por:

IV. El juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía.

V. El juicio de inconformidad.

VI. El recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador.

Artículo 84. Corresponde al Tribunal Electoral, resolver los medios de impugnación previstos en la presente Ley, en la forma y términos establecidos por este ordenamiento y por los acuerdos generales que en la aplicación de la misma dicte dicho órgano.

Artículo 85. Las autoridades federales, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como la ciudadanía, partidos políticos, candidaturas, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación no cumplan las disposiciones de esta Ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del presente ordenamiento.

**SECCIÓN PRIMERA
DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA**

Artículo 86. El juicio para la protección de los derechos político electorales procederá cuando la ciudadanía, en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votado en las elecciones de personas juzgadoras, sea con base en un interés jurídico o legítimo.

Asimismo, será procedente, cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las

mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General.

Artículo 87. Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, serán definitivas e inatacables y podrán tener los efectos:

III. Confirmar el acto o resolución impugnada.

IV. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir a la parte promovente en el uso y goce del derecho político electoral que le haya sido violado.

V. En su caso, declarar la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, y establecer las medidas de reparación integral.

**SECCIÓN SEGUNDA
DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD**

Artículo 88. Durante el proceso electoral, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, en los términos señalados por esta Ley. Los medios de impugnación no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado.

Artículo 89. Son actos impugnables, a través del juicio de inconformidad, los siguientes:

IV. Los resultados consignados en las actas de cómputo, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas.

V. Por nulidad de la elección.

VI. La falta de elegibilidad de la candidatura que resulte triunfadora.

Artículo 90. Además de los requisitos generales establecidos en esta Ley, el escrito por el cual se promueva el juicio de inconformidad deberá cumplir con los siguientes:

V. Señalar la elección que se impugna, manifestando expresamente si se objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y, por consecuencia, el

otorgamiento de las constancias respectivas.

VI. La mención individualizada del acta de cómputo que se impugna.

VII. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso, la causal que se invoque para cada una de ellas y los motivos por los que se considera que se actualizan las causales de nulidad invocadas.

VIII. La conexidad que, en su caso, guarde con otras impugnaciones.

SECCIÓN TERCERA DE LOS PLAZOS Y DE LAS SENTENCIAS

Artículo 91. La demanda del juicio de inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que se notifique a la parte interesada el resultado del cómputo relacionado con la elección impugnada.

Artículo 92. Las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de inconformidad, podrán tener los efectos siguientes:

V. Confirmar el acto impugnado.

VI. Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas y modificar, en consecuencia, el acta de cómputo respectiva.

VII. Revocar la constancia expedida en favor de una candidatura y otorgarla a la candidatura que resulte ganadora como resultado de la anulación de la votación emitida en una o varias casillas o, en su caso, la elección Estatal o Distrital; y modificar, en consecuencia, las actas de cómputo respectivas, según la elección que corresponda.

VIII. Declarar la nulidad de la elección y, en consecuencia, revocar las constancias expedidas.

Artículo 93. Los juicios de inconformidad deberán quedar resueltos a más tardar el día treinta y uno de julio del año de la elección.

Artículo 94. Las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad, serán definitivas e inatacables.

SECCIÓN CUARTA DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR

Artículo 95. Procede el recurso de revisión respecto del Procedimiento Especial Sancionador, en contra:

IV. De la concesión o negativa de medidas cautelares dentro del Procedimiento Especial Sancionador.

V. Del acuerdo de desechamiento que emita el Instituto Estatal a una denuncia.

VI. De los actos dentro del procedimiento que produzcan un daño material irreparable en la sentencia definitiva.

Artículo 96. El plazo para promover el recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador será de dos días, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

Artículo 97. El plazo para la publicitación del medio de impugnación por parte de la autoridad responsable, será de cuarenta y ocho horas, dentro del cual podrán comparecer las personas terceras interesadas.

Artículo 98. El presente recurso se resolverá dentro de los tres días siguientes a la admisión del medio de impugnación.

SECCIÓN QUINTA DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 99. Las disposiciones de la presente Sección rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos.

Artículo 100. En ningún caso, la interposición de los medios de impugnación previstos en esta Ley producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada.

Los medios de impugnación establecidos en la presente Ley serán de estricto derecho.

Artículo 101. El Tribunal Electoral, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción.

En ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplicación de ordenamiento o leyes locales sobre la

materia electoral contrarias a la propia Constitución General. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio.

SECCIÓN SEXTA DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS

Artículo 102. Durante los procesos electorales para la elección, todos los días y horas serán hábiles.

Artículo 103. Cuando los plazos estén señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas, y cuando estén señalados por horas se contarán de momento a momento, en el entendido de que su vencimiento será a la misma hora del inicio de su cómputo del día en que se contabilice el número de horas respectivo.

Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de la legislación aplicable.

Artículo 104. Los medios de impugnación previstos en esta Ley, deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

SECCIÓN SÉPTIMA DE LOS REQUISITOS DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 105. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, y deberán cumplir con los requisitos siguientes:

VIII. Hacer constar el nombre de la parte actora.

IX. Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Chihuahua y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir.

X. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la parte promovente.

XI. Identificar el acto o resolución impugnado y a la autoridad responsable del mismo.

XII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución General.

XIII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente Ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando la parte promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.

XIV. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa de la parte promovente.

Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI del párrafo anterior.

Artículo 106. Cuando la parte promovente incumpla los requisitos establecidos en las fracciones III, IV y V del artículo anterior, o estos sean poco claros, la Magistratura Electoral instructora formulará prevención para el efecto de que, dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación respectiva, se subsane la irregularidad, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda.

En el caso de que la parte promovente no señale domicilio procesal en el lugar del juicio, todas las notificaciones, aún las de carácter personal, le serán realizadas por estrados.

SECCIÓN OCTAVA DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO

Artículo 107. Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes cuando:

XI. No se presenten por escrito ante la autoridad responsable del acto impugnado.

XII. No se haga constar el nombre de la parte actora o la firma

autógrafo de ésta.

XIII. Cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado solo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

XIV. Cuando se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de la parte actora; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta Ley.

XV. Que la parte promovente carezca de legitimación en los términos de la presente Ley.

XVI. Se presenten fuera de los plazos o no reúnan los requisitos especiales señalados en este ordenamiento.

XVII. No se hayan agotado las instancias previas para combatir los actos o resoluciones electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado.

XVIII. En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección.

XIX. El medio de impugnación resulte evidentemente frívolo.

XX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General, o de esta Ley.

Artículo 108. Procede el sobreseimiento cuando:

V. La parte promovente se desista expresamente por escrito, y ratifique el mismo.

VI. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia.

VII. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley.

VIII. La parte promovente agraviada fallezca o sea suspendida

o privada de sus derechos político electorales.

Artículo 109. Cuando se actualice alguno de los supuestos a que se refieren los dos artículos anteriores, la Magistratura Electoral propondrá la improcedencia o sobreseimiento al Pleno.

SECCIÓN NOVENA DE LAS PARTES

Artículo 110. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación, las siguientes:

IV. La parte actora, que será quien estando legitimada lo presente por sí misma o, en su caso, a través de representante, en los términos de este ordenamiento.

V. La autoridad responsable que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna.

VI. La persona tercera interesada, que es la o el ciudadano o la candidatura, según corresponda, con un interés jurídico en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora.

Artículo 111. La parte actora o tercera interesada podrá autorizar por escrito a licenciada o licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de quien autorice, salvo la presentación de medios de impugnación o recursos. Quien cuente con la autorización no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este artículo.

SECCIÓN DÉCIMA DE LAS PRUEBAS

Artículo 112. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Se podrán invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por las partes.

En el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la

posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.

Artículo 113. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta Ley, se estará a lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA DEL TRÁMITE

Artículo 114. La autoridad que reciba un medio de impugnación, en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá:

III. Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al Tribunal Electoral, precisando: parte actora, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción, anexando copia del escrito de demanda respectivo.

IV. Hacerlo del conocimiento público, mediante cédula, que durante un plazo de cuarenta y ocho horas se fije en los estrados respectivos de la autoridad responsable.

Artículo 115. Cuando algún órgano del Instituto Estatal u otra autoridad involucrada en el proceso electoral reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano de dicho Instituto o autoridad responsable para su trámite.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren el párrafo anterior, será sancionado en los términos previstos en el presente ordenamiento y en las leyes aplicables.

Artículo 116. Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de publicitación del medio de impugnación, las personas terceras interesadas podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes:

VIII. Presentarse ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnado.

IX. Hacer constar el nombre de la persona tercera interesada.

X. Señalar domicilio para recibir notificaciones, en la ciudad de Chihuahua.

XI. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería de quien comparece.

XII. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas de quien comparece.

XIII. Ofrecer y aportar las pruebas; mencionar en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban requerirse, cuando quien promueve justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas.

XIV. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa de quien comparece.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones I, II, IV, V y VII del párrafo anterior, será causa para tener por no presentado el escrito correspondiente. Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI del párrafo anterior.

Artículo 117. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo de publicitación del medio de impugnación, la autoridad responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al Tribunal Electoral, lo siguiente:

VIII. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo.

IX. La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder.

X. En su caso, los escritos de las personas terceras interesadas, las pruebas y la demás documentación que se haya acompañado a los mismos.

XI. En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas de cómputo, hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieren presentado, en los términos de ley.

XII. En caso de que la parte promovente sea una persona con candidatura registrada, el expediente de registro respectivo.

XIII. El informe circunstanciado.

XIV. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto.

Artículo 118. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad responsable, por lo menos deberá contener:

IV. En su caso, la mención de si quien promueve o comparece, tiene reconocida su personería.

V. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado.

VI. La firma del funcionario que lo rinde.

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA DE LA SUSTANCIACIÓN

Artículo 119. Recibida la documentación a que se refieren los dos artículos anteriores, el Tribunal Electoral realizará los actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación, de acuerdo con lo siguiente:

VII. La Presidencia del Tribunal turnará de inmediato el expediente recibido, a una Magistratura Electoral, quien tendrá la obligación de revisar que el escrito del medio de impugnación y demás documentación reúna todos los requisitos de ley.

VIII. La Magistratura Electoral propondrá al Pleno el proyecto de sentencia por el que se deseche de plano el medio de impugnación, cuando se dé alguno de los supuestos de improcedencia.

IX. En cuanto al informe circunstanciado, si la autoridad no lo envía dentro del plazo señalado en esta Ley, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos y se tendrán como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo prueba en contrario; lo anterior, sin perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad con el presente ordenamiento y las leyes aplicables.

X. La Magistratura Electoral, en el proyecto de sentencia del medio de impugnación que corresponda, propondrá al Pleno tener por no presentado el escrito de la persona tercera interesada, cuando se presente en forma extemporánea o

se incumplan los requisitos respectivos establecidos en la presente Ley.

XI. Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos establecidos por este ordenamiento, la Magistratura Electoral, en un plazo no mayor a cinco días, dictará el auto de admisión que corresponda; una vez sustanciado el expediente y puesto en estado de resolución, se declarará cerrada la instrucción pasando el asunto a sentencia.

XII. Cerrada la instrucción, la Magistratura Electoral procederá a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, y lo someterá a la consideración del Pleno.

La no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito de la persona tercera interesada. En todo caso, el Tribunal Electoral resolverá con los elementos que obren en autos.

Artículo 120. Si la autoridad responsable incumple con la obligación de remitir el informe circunstanciado u omite enviar cualquiera de los documentos a que se refiere el artículo 117 de esta Ley, se requerirá de inmediato su cumplimiento o remisión, fijando un plazo de veinticuatro horas para tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar oportunamente los documentos respectivos, se hará acreedora a uno de los medios de apremio establecidos en la Ley.

Artículo 121. La Presidencia o la Magistratura Electoral podrá requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a cualquier persona física o moral, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación.

Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA DE LA NOTIFICACIONES Y DE LA ACUMULACIÓN

Artículos 122. Para la realización de las notificaciones dentro de los medios de impugnación previstos en el presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto en los artículos 336, 337, 338 y 339 de la Ley Electoral.

Artículo 123. Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta Ley, los órganos competentes del Instituto Estatal o del Tribunal Electoral, podrán determinar su acumulación.

La acumulación podrá decretarse al inicio, durante la sustanciación, o en la sentencia respectiva.

**SECCIÓN DÉCIMO CUARTA
DE LAS RESOLUCIONES
Y DE LAS SENTENCIAS**

Artículo 124. Las resoluciones o sentencias que pronuncien, respectivamente, el Instituto Estatal o el Tribunal Electoral, deberán hacerse constar por escrito y contendrán:

VII. La fecha, el lugar y el órgano que la dicta.

VIII. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos.

IX. En su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes.

X. Los fundamentos y consideraciones jurídicas.

XI. Los puntos resolutivos.

XII. En su caso, el plazo para su cumplimiento.

Artículo 125. La Magistratura Electoral podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare en la sustanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento.

Artículo 126. Dentro del término de dos días siguientes a la notificación de la sentencia, el Tribunal Electoral, de oficio o a petición de parte, podrá aclarar un concepto o precisar los efectos de una sentencia, siempre y cuando esto no implique una alteración sustancial de los puntos resolutivos o del sentido del fallo.

La aclaración formará parte de la resolución o sentencia.

Artículo 127. Las sentencias que dicte el Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables.

**SECCIÓN DÉCIMO QUINTA
DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN
DE LAS SENTENCIAS, DE LAS
MEDIDAS DE APREMIO Y DE LAS
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS**

Artículo 128. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden, el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

V. Amonestación.

VI. Multa de cincuenta hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada.

VII. Uso de la fuerza pública.

VIII. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 129. Para el cumplimiento de sus resoluciones, el Tribunal Electoral podrá vincular a órganos o autoridades que no hayan formado parte del procedimiento, atendiendo a la competencia legal de las mismas.

**CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LAS NULIDADES
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS REGLAS GENERALES**

Artículo 130. Las nulidades establecidas en este Capítulo, podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada.

Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral respecto de la votación emitida en una o varias casillas o de una elección, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio de inconformidad.

Artículo 131. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.

Artículo 132. Las candidaturas no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos

o circunstancias que ellos mismos hayan provocado.

Artículo 133. Son causas de nulidad de una elección las previstas en la Ley Electoral y en la Ley General, con las excepciones previstas en esta Ley.

Artículo 134. Sólo podrá ser declarada nula la elección de una persona juzgadora, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.

Artículo 135. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a la parte promovente.

Artículo 136. El Tribunal Electoral deberá declarar la nulidad de la elección por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos siguientes:

V. Se exceda en un cinco por ciento el tope de gastos personales de campaña.

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.

VII. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita, o recursos públicos y privados en las campañas.

VIII. Se acredite la violencia política grave contra las mujeres en razón de género mediante sentencia firme del órgano jurisdiccional electoral.

Artículo 137. Las violaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

Artículo 138. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona que generó las conductas que derivaron la nulidad.

Artículo 139. Para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las reglas siguientes:

VI. Se contará un voto válido por la marca o asiento que

realice la persona votante, en un recuadro de una misma boleta, en favor de una candidatura claramente identificable, con independencia de que puedan emitirse dos o más votos por diversas candidaturas contenidas en una misma boleta.

VII. El Consejo Estatal determinará la cantidad de votos válidos que pueda emitir cada persona votante en una misma boleta, en función del tipo de elección, categoría y el número de candidaturas a elegir.

VIII. Se contará como voto nulo la falta de marca en uno o más de los recuadros de la boleta.

IX. Se contará como voto nulo aquellas marcas en que sea imposible determinar razonable y objetivamente la intención del voto.

X. Se contarán como votos nulos aquellos en que se asiente o marque en más de un recuadro la votación en favor de una misma candidatura por categoría. Solo podrá contabilizarse como válido el primer voto identificado por categoría.

El Consejo Estatal emitirá los criterios generales aplicables a la validez y nulidad de votos contenidos en esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA DE LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA

Artículo 140. La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

IX. Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Instituto Nacional.

X. Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Instituto Estatal, fuera de los plazos señalados por la Ley Electoral.

XI. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

XII. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley.

XIII. Permitir a la ciudadanía sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

XIV. Ejercer violencia física o presión sobre quienes integran la mesa directiva de casilla o sobre el electorado y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

XV. Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a la ciudadanía y esto sea determinante para el resultado de la votación.

XVI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

SECCIÓN TERCERA DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES

Artículo 141. Son causales de nulidad de la elección, adicionalmente a las aplicables previstas en la base VI del artículo 41 de la Constitución General:

IV. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en esta Ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio estatal, o en el respectivo Distrito Judicial.

V. Cuando en el territorio estatal o en el respectivo Distrito Judicial, no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida.

VI. Tratándose de la única candidatura registrada y ésta resulte ganadora e inelegible.

Las causales de nulidad señaladas en el párrafo anterior, deberán estar plenamente acreditadas y se debe demostrar que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección.

Artículo 142. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o en la Entidad, que se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a la candidatura actora.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTA

DE LOS INCIDENTES

Artículo 143. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un medio de impugnación y que tienen relación inmediata con el mismo.

Cuando los incidentes que se promuevan no guarden relación inmediata con el asunto principal, sean notoriamente improcedentes o frívolos, el Tribunal Electoral, de oficio, deberá desecharlos de plano.

Artículo 144. Los incidentes se sustanciarán en la misma pieza de autos que el asunto principal. Por regla general no suspenderán el procedimiento principal.

Solo suspenderán el procedimiento, aquellos incidentes que impidan el curso del medio de impugnación, sin cuya previa resolución sea absolutamente imposible, de hecho, o de derecho, continuar sustanciándolo.

Artículo 145. Para la sustanciación y resolución de los incidentes, se estará a lo siguiente:

IV. Admitido el incidente, se dará vista a la contraparte por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga.

V. Concluido el plazo otorgado en los términos de la fracción anterior, si la Magistratura Electoral instructora lo considera necesario, citará a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos.

VI. Una vez celebrada la audiencia, en su caso, la Magistratura Electoral instructora o el Pleno del Tribunal Electoral, según corresponda, resolverá lo conducente.

Artículo 146. Se tramitarán en la vía incidental por el Tribunal Electoral:

IV. Los recuentos parciales, que consisten en el nuevo escrutinio y cómputo de una o más casillas, sin llegar a la totalidad de las que integraron la elección de que se trate.

V. El recuento total, que consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas que integraron la elección de que se trate.

VI. Las demás cuestiones que la Magistratura Electoral instructora o el Tribunal Electoral estimen necesarias para

la correcta sustanciación de los medios de impugnación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las facultades y atribuciones establecidas en la Ley Electoral se ajustarán, por única vez, a los plazos y términos de la reforma constitucional electoral contenida en el Decreto No. -LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O.

TERCERO.- La etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025 iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Estatal celebre dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Para el proceso electoral extraordinario de 2024-2025, el Consejo de la Judicatura, a más tardar el día 21 de febrero de 2025, deberá enviar al Congreso del Estado, el listado que contenga los nombres de las personas en funciones en el cargo que desean contender, las personas que declinan su participación o participan por otro cargo distinto, ya sea en el Poder Judicial Estatal o Federal.

Las personas juzgadoras en funciones que deseen contender para el proceso electoral extraordinario 2024 - 2025, deberán aparecer en la boleta a efecto de ser elegidas por la ciudadanía, en los términos de los Artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto No. -LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O.

QUINTO.- La jornada electoral extraordinaria se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto Estatal, con excepción de representantes de un partido político.

SEXTO.- El Instituto Estatal efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual resolverá las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025.

SÉPTIMO.- Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Congreso del Estado el 1º de septiembre de 2025. El órgano de administración judicial adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre de 2025.

OCTAVO.- El Congreso del Estado contará con 120 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de realizar las reformas y adiciones que resulten necesarias, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinticinco.

PRESIDENTA, DIP. ELIZABETH GUZMÁN ARGUETA; SECRETARIO, DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN; SECRETARIA, DIP. LUIS FERNANDO CHACÓN ERIVES].

Se concede la palabra a la Diputada Magdalena Rentería Pérez, para que en representación de la Comisión de Juventud y Niñez dé lectura al dictamen preparado.

- La C. Dip. Magdalena Rentería Pérez.- MORENA: Con su permiso, Presidenta.

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Magdalena Rentería Pérez.- MORENA:

Honorable Congreso del Estado
Presente.-

Las Comisión de Juventud y Niñez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica; 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En fecha 4 de octubre de 2024 la Diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Sexagésima Octava Legislatura, presentó la iniciativa con carácter de decreto, a efecto de modificar el artículo 55 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, a efecto de generar certeza jurídica cuando son víctimas de algún delito.

De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia que autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte de antecedentes y hacer un resumen de las consideraciones, con la petición de que el texto quede íntegro del presente dictamen se inserte en el Diario de los Debates de la sesión.

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: De acuerdo, Diputada.

Continue.

- La C. Dip. Magdalena Rentería Pérez.- MORENA: Gracias, Diputada.

Ahora bien, quienes integramos la Comisión de Juventud y Niñez, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, tenemos a bien realizar las siguientes

CONSIDERACIONES:

Al analizar las facultades competenciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto, por lo que procederemos a motivar nuestra resolución.

Nuestro país, como parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación asegurar a niñas, niños y adolescentes la protec... protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y deberá adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que se requieran para establecer un entorno protector que defienda a la niñez de la explotación, los malos

tratos y la violencia.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. eleva a rango constitucional el interés superior de la niñez, el cual exige en las situaciones en las que se vean involucradas niñas, niños y/o adolescentes se protejan y privilegien sus derechos.

Mientras que artículo 20, apartado C, reconoce los derechos de la víctima o del defendido... del ofendido.

A fin de garantizar la justicia restaurativa el derecho a la verdad la justicia y la reparación de la víctima, en nuestro país por muchos años las víctimas de delitos han ocupado lugar supletorio dentro del sistema penal y el ámbito jurídico, es por ello, que con el objeto de contar con un marco jurídico integral que diera respuesta a garantizar todos los derechos relativos a las personas que sufren, la comisión de algún delito o la violación de sus Derechos Humanos en el año 2016 el Estado de Chihuahua expide la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.

Dicha ley, además de reconocer los derechos de las víctimas, también lleva a reconocer las obligaciones por parte del Estado, respecto a la atención a las víctimas y a la no repetición de los actos para evitar de esta manera la revictimización.

La expedición de la Ley en comento, trajo consigo la abrogación de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua.

Derivando de lo anterior, y tal cómo se expuso en la iniciativa que hoy se analiza, se encuentra que en la Ley de Niñas Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, aún no se ha hecho la actualización de las leyes que deben aplicar cuando se esté frente a casos en los que la infancia y adolescencia sean víctimas de delitos.

Por estos motivos encontramos que quienes integramos la Comisión de Juventud y Niñez, nos

permitimos someter a la consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 55, primer párrafo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para quedar redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 55.- En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y de la Ley de... de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua.

En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente... el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a los 22 días del mes de enero del año 2025.

Así lo aprobó la Comisión de Juventud y Niñez, en reunión de fecha 16 de enero del año 2025.

Es cuanto, Diputada.

[Texto íntegro del dictamen presentado]:

[H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

Las Comisión de Juventud y Niñez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas

Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha cuatro de octubre de dos mil veinticuatro la Diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Sexagésima Octava Legislatura, presentó la iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de modificar el artículo 55 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, a efecto de generar certeza jurídica cuando son víctimas de algún delito.

II.- La Presidencia del H. Congreso del Estado, con fecha ocho de octubre de dos mil veinticuatro y en uso de las facultades que confiere el artículo 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III.- La exposición de motivos que sustenta la iniciativa en comento es la siguiente:

"ANTECEDENTES SOBRE PROTECCIÓN DE MENORES

La protección de los derechos de los menores de edad ha sido un tema de gran relevancia para nuestra sociedad, tanto así que en el año de 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, documento que pasó a ser trascendental en la historia, ya que por primera vez se reconocía y consolidaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos en la atención de estos.

Mas adelante en 1959 se aprobaría por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los derechos del Niño, el cual abriría paso a el primer tratado sobre este tema; la Convención sobre los derechos del Niño el cual fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1989 siendo este actualmente uno de los tratados con mayor reconocimiento a nivel mundial, México ratificándolo el 21 de septiembre de 1990, dado a esto quedó obligado a seguir los principios y lineamientos que se establecieron dentro de sus 54 artículos, por lo que hoy por hoy se debe garantizar, respetar y sobre todo tutelar las facultades que tiene el Estado para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En razón de esto es que se debe poner un mayor énfasis en las leyes que buscan la protección de los menores de edad, dando la atención necesaria para respaldar lo que las declaraciones y convenciones ya han establecido anteriormente, así como observar y analizar la legislación vigente para regular y atender los problemas que perjudican a todo niño, niña y adolescente, esto con el objetivo de que se desarrollen plenamente en un entorno sano libre de todo tipo de violencia, abuso o explotación.

Los niños, niñas y adolescentes, son el futuro, debemos de poner especial importancia en ellos, buscar por todos los medios legales necesarios, darles una oportunidad; para que accedan a mejores oportunidades, y evitar en su totalidad de ser posible, que sufran cualquier tipo de violencia.

Esto sin lugar a dudas, permitirá que como sociedad podamos mejorar. Evitara que nuestros niños, niñas y adolescentes, caigan en las manos del crimen organizado, situación que acongoja a nuestro País, a nuestro Estado, y nuestros Municipios.

El Estado de Chihuahua el 01 de enero del 2017, abrogó la LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, por lo cual es necesario, brindarles la certeza jurídica, a este grupo altamente vulnerable, el cual depende de nuestro actuar como legisladores, velando en todo momento por su protección. Es necesario actualizar nuestro marco legal, para que nuestros niñas, niños y adolescentes no padezcan en lo más mínimo de cualquier forma que pudiera vulnerarlos.

Esta reforma ayuda a que a través de una legislación congruente y actualizada con las leyes vigentes, nuestros niñas, niños y adolescentes puedan estar protegidos por las leyes actuales.

Quedando redactado de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE

Artículo 55. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para

la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para asegurar una efectiva reparación integral del daño, se elaborará un Programa Especial de Reparación Integral en el ámbito Estatal, coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de conformidad con los procedimientos y alcances de la reparación integral del daño, establecidos en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.

PROPUESTA

Artículo 55. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua.

En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Para asegurar una efectiva reparación integral del daño, se elaborará un Programa Especial de Reparación Integral en el ámbito Estatal, coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de conformidad con los procedimientos y alcances de la reparación integral del daño, establecidos en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua.

NORMATIVA.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años,

y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA.

Artículo 4º. En el Estado de Chihuahua, toda persona gozará de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, celebrados por el Estado Mexicano y en esta Constitución. La mujer y el hombre son iguales ante la Ley.

....

LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Artículo 9. Las competencias y obligaciones a cargo del Estado y de los municipios, así como de sus servidores públicos, tales como Ministerio Público, magistrados, jueces, asesores jurídicos de las víctimas y las policías, así como aquellas a cargo de la víctima, se encuentran dispuestas en la Ley General, las cuales hacen parte integral de la presente Ley.

LEY PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado y tienen por objeto:

...

II. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como reparar el daño a las víctimas de manera integral, adecuada, efectiva y proporcional a la gravedad del perjuicio causado.”

IV.- Ahora bien, la Comisión de Juventud y Niñez, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, tiene a bien realizar las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto.

II.- La iniciativa cuyo análisis nos ocupa, propone reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, con el propósito de brindar certeza jurídica al ajustar el marco normativo a la legislación vigente, tratándose de casos en los que las niñas, niños o adolescentes sean víctimas del delito.

La parte iniciadora señala que hoy en día deben garantizarse, respetarse y ser tuteladas las facultades que tiene el Estado para proteger los derechos de la infancia y adolescencia, es por esto que debe tenerse un especial cuidado en que las leyes que van dirigidas para este grupo etario regulen

y atiendan los problemas que los perjudican, para con ello procurar en un entorno libre de violencia, abuso o explotación, su desarrollo pleno. Por lo que se requiere de una legislación congruente y actualizada con las leyes vigentes, y tras un estudio de la Ley que nos ocupa, se encuentra que en su artículo 55 hace referencia a la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua la cual fue abrogada en el año 2017, siendo expedidas en su lugar la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua, ordenamientos que a la fecha, no ha sido actualizado. Por tal motivo, la propuesta surge de una problemática o necesidad existente y vigente.

III.- Al respecto, nuestro país, como parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y deberá adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que se requieran para establecer un entorno protector que defienda a la niñez de la explotación, los malos tratos y la violencia. ⁽¹⁾

IV.- Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20 apartado "C" reconoce los "Derechos de la víctima o del ofendido" bajo los principios del derecho internacional humanitario en el que se espera garantizar la justicia restaurativa, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de la víctima. Asimismo, en la misma Carta Magna, pero en su artículo cuarto se eleva a rango constitucional el interés superior de la niñez, el cual exige que en las situaciones en las que se vean involucradas niñas, niños y/o adolescentes se protejan y privilegien sus derechos. Motivo por el cual es pertinente y necesario legislar en la materia.

V. En nuestro país por muchos años las víctimas de delitos han ocupado un lugar supletorio dentro del sistema penal y el ámbito jurídico; es por ello que con el objeto de contar con un marco jurídico integral que diera respuesta a garantizar todos los derechos relativos a las personas que penosamente sufren la comisión de algún delito o la violación de sus derechos humanos, en el año 2016 el Estado de Chihuahua expide la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua. Dicha ley además de reconocer los derechos de las víctimas, también lleva a

reconocer las obligaciones por parte del Estado respecto a la atención a las víctimas y la no repetición de los actos para evitar de esta manera la revictimización. La expedición de la ley en comento, trajo consigo la abrogación de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua.

Derivado de lo anterior y tal como se expuso en la iniciativa que hoy se analiza, se encuentra que en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua aún no ha hecho la actualización de las leyes que deben aplicar cuando se este frente a casos en los que la infancia y adolescencia sean víctimas de delitos. Ya que en su artículo 55 se hace referencia a la Ley actualmente abrogada y faltando las leyes expedidas posteriormente que deben aplicarse en estos casos.

En aras de poder identificar de manera ágil el texto modificado y para una mejor comprensión de los alcances del proyecto, se incluye el cuadro comparativo de la disposición jurídica vigente y la reforma propuesta por este Dictamen:

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua

TEXTO VIGENTE

Artículo 55. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

...

Propuesta

Artículo 55. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la

implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

...

De lo anteriormente expuesto encontramos que existe una problemática real y vigente, al carecer la autoridad de un ordenamiento vigente al cual referirse y que les permita actuar cuando se encuentren frente a delitos cometidos en contra de niñas, niños o adolescentes, lo que complica la aplicación de la norma. Todo esto de acuerdo a lo establecido en tratados internacionales y en nuestra constitución es respaldado el fundamento para legislar tal como lo propone la presente propuesta.

VI. Por lo argumentado en estas Consideraciones, concluimos en la necesidad de atender legislativamente a la problemática identificada por las personas Iniciadoras, a través de la forma y optimizaciones vertidos en los razonamientos detallados en este documento que justifican la ubicación y necesidad de dichas reformas.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Juventud y Niñez, nos permitimos someter a la consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 55, primer párrafo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para quedar redactado en los siguientes términos:

Artículo 55. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

...

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 22 días del mes de enero del año dos mil veinticinco.

Así lo aprobó la Comisión de Juventud y Niñez, en reunión de fecha dieciséis de enero del año dos mil veinticinco.

POR LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y NIÑEZ:
DIP. PRESIDENTA MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ.
DIP. SECRETARIO ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN.
DIP. VOCAL YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS.
DIP. VOCAL JAEL ARGÜELLES DÍAZ.
DIP. VOCAL SAÚL MIRELES CORRAL.]

[Pies de página del documento]:

(1) <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf> 06 de diciembre de 2024

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Gracias, Diputada.

Procederemos a la votación del dictamen, para lo cual solicito a la Primera Secretaría actúe en consecuencia.

- El C. Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Primer Secretario.- P.A.N.: Diputadas y diputados, presentes en el Recinto Oficial respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla.

Se abre el sistema de voto electrónico.

Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan.

Pregunto a quienes se encuentran en la modalidad de acceso remoto o virtual para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto.

Diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera.

- La C. Dip. Edna Xóchitl Contreras Herrera.- P.A.N.: A favor.

- El C. Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Primer Secretario.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Diputada Rosana Días Reyes.

- La C. Dip. Rosana Días Reyes.- MORENA: A favor, Diputado.

- El C. Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Primer Secretario.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco.

- La C. Dip. Irlanda Dominique Márquez Nolasco.- P.T.: A favor, Diputado.

- El C. Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Primer Secretario.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Se cierra el sistema...

Se cierra el sistema de voto electrónico.

Informo a la Presidencia que se manifestó 32 votos favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del dictamen antes leído.

[Se manifiestan 32 votos a favor emitidos por las y los diputados: América Victoria Aguilar Gil (PT), Jael Argüelles Díaz (MORENA), Óscar Daniel Avitia Arellanes (MORENA), Octavio Javier Borunda Quevedo (PVEM), Roberto Marcelino Carreón Huitrón (PAN), Luis Fernando Chacón Erives (PRI), José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN), Rosana Días Reyes (MORENA), Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo (MORENA), Nancy Janeth Frías Frías (PAN), Herminia Gómez Carrasco (MORENA), Elizabeth Guzmán Argueta (MORENA), Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT), Roberto Arturo Medina Aguirre (PRI), Saúl Mireles Corral (PAN), Carlos Alfredo Olson San Vicente (PAN), Leticia Ortega Máynez (MORENA), Edith Palma Ontiveros (MORENA), Ismael Pérez Pavía (PAN), María Antonieta Pérez Reyes (MORENA), Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez (PRI), Magdalena Rentería Pérez (MORENA), Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN), Brenda Francisca Ríos Prieto (MORENA), Carla Yamileth Rivas Martínez (PAN), Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC), Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), Pedro Torres Estrada (MORENA), Joceline Vega Vargas (PAN),

José Luis Villalobos García (PRI) y Arturo Zubía Fernández (PAN).

1 (uno) no registrado de la Diputada Alma Yesenia Portillo Lerma (MC).]

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Gracias, Diputado Secretario.

Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular.

[Texto del Decreto No. 185/2025 II P.E.]:

[DECRETO No. LXVIII/RFLEY/0185/2025 II P.E.

LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 55, primer párrafo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para quedar redactado en los siguientes términos:

Artículo 55. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

...

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la

ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinticinco.

PRESIDENTA, DIP. ELIZABETH GUZMÁN ARGUETA; SECRETARIO, DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN; SECRETARIA, DIP. LUIS FERNANDO CHACÓN ERIVES].

Se instruye a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, elabore las minutas correspondientes y notifique a las instancias competentes.

14.

LECTURA DECRETO DE CLAUSURA DEL SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Acto seguido, solicito a las y los diputados y demás personas que nos acompañan, por favor, se pongan de pie para proceder con la lectura del Decreto de Clausura del Segundo Periodo Extraordinario.

[Todos los asistentes, en atención a lo solicitado por la Presidenta, se ponen de pie].

Decreto número 186/2025

La Sexagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: La Sexagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, clausura hoy 22 de enero del año 2025, el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al término de su lectura.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; a los 22 días del mes de enero del año 2025.

Muchas gracias, pueden tomar asiento.

15.

SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta.- MORENA: Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para el viernes 31 de enero, a las once horas, en la Sala Morelos del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente.

Siendo las doce cuarenta siete [12:47 Hrs.] horas del día 22 de enero del año 2025, se levanta la sesión.

Muchas gracias por su presencia, que tengan una excelente tarde.

[Hace sonar la campana].

<p>CONGRESO DEL ESTADO</p> <p>MESA DIRECTIVA.</p> <p>I AÑO EJERCICIO CONSTITUCIONAL.</p> <p>SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO.</p>
Presidenta:
Dip. Elizabeth Guzmán Argueta.
Vicepresidentes:
Dip. Carla Yamileth Rivas Martínez.
Dip. José Luis Villalobos García.
Secretarios:
Dip. Roberto Marcelino Carreón Huitrón.
Dip. Luis Fernando Chacón Erives.
Prosecretarios:
Dip. Alma Yesenia Portillo Lerma.
Dip. Carlos Alfredo Olson San Vicente.
Dip. Rosana Díaz Reyes.
Dip. América Victoria Aguilar Gil.